

ALCANCE DIGITAL N° 17

LA GACETA

Diario Oficial

Año CXXXVII

San José, Costa Rica, jueves 12 de marzo del 2015

N° 50

PODER LEGISLATIVO

PROYECTOS

ACUERDOS

PODER LEGISLATIVO

PROYECTQS

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS HACENDARIOS

TEXTO SUSTITUTIVO

EXPEDIENTE No. 18.946

DECRETA:

**LEY PARA ELIMINAR LOS PRIVILEGIOS TRIBUTARIOS DE LOS
FONDOS DE INVERSIÓN**

ARTÍCULO ÚNICO.- Modifíquese el artículo 100 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, Ley N° 7732, y sus reformas, para que se lea de la siguiente manera.

“ARTÍCULO 100.- Tributos y exoneraciones

Los rendimientos que reciban los fondos de inversión provenientes de la adquisición de títulos valores, que ya estén sujetos al impuesto único sobre intereses referido en el inciso c) del artículo 23 de la Ley No. 7092, de 21 de abril de 1988, o que estén exentos de dicho impuesto, estarán exceptuados de cualquier otro tributo distinto del impuesto sobre la renta disponible, previsto en la misma ley citada.

Los rendimientos percibidos por los fondos de inversión provenientes de títulos valores u otros activos que adquieran y que no estén sujetos al impuesto único sobre intereses arriba citado, quedarán sujetos a un impuesto único y definitivo, con una tarifa del doce por ciento (12%). La base imponible será el monto total de la renta o los rendimientos acreditados, compensados, percibidos o puestos a disposición del fondo de inversión.

Las ganancias de capital generadas por la enajenación, por cualquier título de activos del fondo, estarán sujetas a un impuesto único y definitivo con una tarifa del doce por ciento (12%). La base imponible

será la diferencia entre el valor de enajenación y el valor registrado en la contabilidad a la fecha de dicha transacción.

Los impuestos descritos en los párrafos segundo y tercero de este artículo se calcularán con el método de declaración, determinación y pago a cargo del fondo de inversión, con un período fiscal mensual y se regirán por las siguientes reglas:

- a) La declaración jurada deberá presentarse dentro de los primeros diez días hábiles del mes siguiente a aquel en que se generaron los rendimientos o las ganancias de capital gravadas, plazo en el cual deberán cancelarse sendas obligaciones tributarias.
- b) Estos impuestos serán administrados por la Dirección General de Tributación Directa. El Poder Ejecutivo queda autorizado para reglamentar dichos impuestos, incluidos los métodos técnicamente aceptables de revaluación de activos.
- c) Los fondos de inversión estarán exentos de los impuestos de traspaso aplicables a la adquisición o venta de activos.
- d) Los rendimientos, dividendos y ganancias de capital generados por las participaciones de los fondos de inversión estarán exonerados de todo tributo.”

Rige a partir de su publicación.”

PROYECTO DE LEY

LEY DE PROTECCIÓN DEL BIENESTAR DE LOS HABITANTES EN LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE (ZMT) Y DE GARANTÍAS AMBIENTALES SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO

Expediente N.º 19.444

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La presente iniciativa tiene como objetivo realizar una serie de reformas coordinadas y sistémicas a distintos artículos de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, Ley N.º 6043; y la Ley Forestal N.º 7575, a efectos de generar una regulación que concilie adecuadamente la administración territorial de los terrenos de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) con el uso y la protección ambiental que establece nuestra legislación en la materia, y la diversa normativa y principios que rigen un sano equilibrio, entre el ámbito ecológico y humano, y los principios internacionalmente reconocidos del desarrollo sostenible.

Fundamentalmente, se pretende encontrar una solución adecuada y balanceada, por un lado, al reto de la protección de los recursos naturales de la zona marítima terrestre del país y, por otro parte, al creciente problema social y económico de una población estimada en más de 350,000 personas que históricamente han vivido, trabajado e interactúan en esa zona especial.

El principio rector de este proyecto de ley gira alrededor de la participación de la sociedad civil en la protección de los recursos naturales, esto es, la noción de que estos se protegen en comunidad, con la interacción de los seres humanos y los ciudadanos que forman parte de la sociedad a partir de su rol como sujetos activos en la protección del medio ambiente. El presente proyecto no participa de la idea de que el medio ambiente y los bienes naturales hay que preservarlos expulsando a los seres humanos, despojándolos de sus sitios de vivienda, trabajo o desarrollo económico, ni cancelándoles los derechos subjetivos que les han sido otorgados o les pueden ser otorgados para desarrollar su vida y su trabajo, sino todo lo contrario, convirtiéndolos en sujetos activos y responsables de la protección de esos bienes públicos.

El fundamento legal de este principio, se encuentra ya tutelado por una serie de normativa vigente en Costa Rica, en cuenta la Ley Orgánica del Ambiente N.º 7554, la cual establece en su artículo 6: “El Estado y las municipalidades fomentarán la participación activa y organizada de los habitantes de la República, en la toma de decisiones y acciones tendientes a proteger y mejorar el ambiente”. Asimismo, el artículo 29 de la misma ley expresa: “Promover la participación activa de los habitantes y la sociedad organizada, en la elaboración y la aplicación de los planes de ordenamiento territorial y en los planes reguladores de las ciudades, para lograr el uso sostenible de los recursos naturales”.

De la misma manera, la Ley de Biodiversidad N.º 7788, establece en su artículo 10, inciso 2): “Promover la participación activa de todos los sectores sociales en la conservación y el uso ecológicamente sostenible de la biodiversidad, para procurar la sostenibilidad social, económica y cultural”.

Adicionalmente, este principio ha sido ampliamente tutelado en los últimos lustros por diversos instrumentos y resoluciones del Sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la participación de los ciudadanos, las personas y las comunidades en la protección del medio ambiente, así como otros instrumentos internacionales ratificados por el Estado de Costa Rica en los últimos lustros, entre ellos:

- Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, (junio, 1992).
- Agenda 21 de la Organización de las Naciones Unidas (junio, 1992).
- Convenio de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica (junio, 1992).
- Programa de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (Creado en junio de 1972), y en particular:
 - Metas de Aichi, (noviembre, 2010).
 - Protocolo de Nagoya (octubre, 2010).

Todas las tendencias internacionales de protección medio-ambiental siguen la misma pauta: considerar que la sociedad civil es un actor determinante como socio del Estado y de la Administración Pública para la protección del medio ambiente, así como la mejor administración territorial. El medio ambiente no es un fin en sí mismo. Se trata de un bien de extraordinaria importancia para los distintos países y para el futuro del planeta en su conjunto, el cual -sin embargo- tiene su valor ontológico y esencial referido a la comunidad humana que lo regula y que coexiste con él. No puede ser considerado como un bien en abstracto, sino en función de una comunidad humana que le sirve de contexto y que la regula de manera específica e histórica para su uso, disfrute y de las futuras generaciones.

Las reformas aquí propuestas buscan, pues, crear una coordinación sistémica e integral entre la distinta normativa existente. Para todos los efectos, la presente ley reformará, y será tomada como base de interpretación para la aplicación de la Ley de Zona Marítimo Terrestre N.º 6043 y la Ley Forestal N.º 7575 en todo lo que compete a zona marítimo terrestre que tuviese patrimonio natural del Estado certificado. Asimismo, en el tenor de lo aquí dispuesto se interpretará también la Ley de Vida Silvestre N.º 7317, a Ley Orgánica del Ambiente N.º 7554, la Ley de Biodiversidad N.º 7788, la Ley de Uso y Conservación de Suelos N.º 7779; así como el resto de normativa ambiental nacional o los convenios internacionales que en esta materia ha firmado y ratificado el Estado de Costa Rica, en todo lo que se refiere a la zona marítimo terrestre.

Esta iniciativa busca complementar los vacíos legales existentes en la materia de esta zona especial, procurando ser un modelo que concilie la protección de los recursos naturales y el patrimonio natural del Estado con la calidad de vida de los habitantes de la República que históricamente habitan y trabajan en estas zonas.

En razón de lo anterior, se somete a la consideración de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

LEY DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO Y EL BIENESTAR DE LOS HABITANTES EN LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE

ARTÍCULO 1.- Reforma de los artículos 41, 42 y 48 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, Ley N.º 6043

Refórmense los artículos 41, 42 y 48 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, Ley N.º 6043, para que se lean de la siguiente manera:

Artículo 41.- Las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas determinadas en la zona restringida, por el plazo y bajo las condiciones que la ley establece.

En los casos de que hubiese patrimonio natural del Estado en los terrenos o parcelas ya en condición de concesión de zona marítimo terrestre bajo la presente ley, en proceso de renovación de sus concesiones, o bien, poseedores de dichas parcelas con pretensión a concesión sobre ellas, se procederá conforme indica el artículo 18 bis de la Ley Forestal que se adiciona en la presente ley. La validez y eficacia del Contrato de Concesión de Zona Marítimo Terrestre queda sujeto a la firma y plena observancia de los “Contratos de Responsabilidad Ambiental” allí establecidas, so pena de resolución o anulación.

Artículo 42.- Las concesiones en las áreas turísticas requieren la aprobación del Instituto Costarricense de Turismo. En las demás áreas la aprobación corresponderá al Instituto de Desarrollo Rural.

En ambos institutos, y en caso de que el terreno referido se encontrare certificado como patrimonio natural del Estado, la aprobación deberá exigir la existencia del “Contrato de Responsabilidad Ambiental” indicado en el artículo 18 bis de la Ley Forestal N.º 7575 como requisito para autorizar la inscripción o la renovación solicitada. Estos institutos no

podrán denegar la aprobación, salvo que esta viole la ley, lo que se deberá indicar expresamente, en forma razonada.

Si la concesión se refiere a una isla o islote marítimos, o parte de las mismas, será necesaria la aprobación de la Asamblea Legislativa.”

(...)

“Artículo 48.- Las concesiones se otorgarán por un plazo no menor de veinte años y ni mayor de veinticinco años y deberán indicar el canon a pagar y su forma de pago. Este canon sustituye el impuesto territorial.

En los casos de terrenos o lotes que estén certificados con patrimonio natural del Estado, el canon se dividirá por partes iguales entre el Minae-Sinac y la municipalidad respectiva de acuerdo con lo que dispone el artículo 18 bis de la Ley Forestal N.º 7575.

El reglamento de esta ley establecerá la forma de tramitar la solicitud, las modalidades de la concesión, el canon a pagar en cada zona de acuerdo con sus circunstancias y, en forma especial, con la diferente situación de los pobladores o habitantes de la zona y quienes no lo sean, así como cualesquiera otras disposiciones que estimaren necesarias para regular las relaciones entre las municipalidades y sus concesionarios.”

ARTÍCULO 2.- Adición de un artículo 18 bis a la Ley Forestal, Ley N.º 7575

Adiciónase un artículo 18 bis a la Ley Forestal, Ley N.º 7575, cuyo texto dirá:

“Artículo 18 bis.- Sobre el patrimonio natural del Estado en la zona marítimo terrestre. Carácter demanial y régimen especial de protección del medio ambiente y administración conjunta.

En todos aquellos casos en que el patrimonio natural del Estado se encuentre en zona marítimo terrestre (ZMT), esto es, en los 150 metros siguientes a la pleamar regulados por la Ley de Zona Marítimo Terrestre N.º 6043, la administración corresponderá en forma conjunta al Ministerio de Medio Ambiente y Energía y la municipalidad del cantón a que correspondieren.

Dichos terrenos seguirán teniendo el carácter demanial y público que indica la Ley N.º 6043, y la presente Ley Forestal por el patrimonio natural que allí hubiese, pero -en virtud de su vocación y uso de suelo, así como la densidad de la población humana existente y el interés social, humano, económico que comportan para el país, las personas y las comunidades

que las habitan- serán regulados por las siguientes disposiciones especiales:

a) En lugar de los permisos de uso descritos en el artículo 19 de esta Ley Forestal, el patrimonio natural del Estado en zona marítimo terrestre estará sujeto a un régimen especial de concesión que con base en los compromisos de protección ambiental definidos por esta ley y las demás normativa ambiental del país, pero en el marco de la figura de concesión estipulada en los artículos 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y concordantes de la Ley de Zona Marítimo Terrestre N.º 6043, y sus reformas. Por el porcentaje de extensión del terreno que fuese certificado como patrimonio natural del Estado se firmará, paralelo al Contrato de Concesión de Zona Marítimo Terrestre, un contrato de reponsabilidad y manejo ambiental, según se describe en los próximos incisos.

b) Créanse los “Contratos de Responsabilidad Ambiental” los cuales serán instrumentos jurídicos anexos -con valor sustantivo e integral- a los contratos de zona marítimo terrestre regulados por la Ley N.º 6043, y tendrán como objetivo garantizar los fines contenidos en la Ley Forestal y el resto de la legislación ambiental del país. Su valor integral y sustantivo implica que, en todos aquellos casos en que exista una concesión de zona marítimo terrestre sobre un terreno en concesión con áreas certificadas como patrimonio natural del Estado, tales instrumentos serán parte consustancial de contrato de concesión municipal, con las obligaciones y compromisos adicionales que ello implique.

c) Podrán acceder a firmar estos contratos de responsabilidad ambiental, primeramente, todos aquellos concesionarios que tengan a la fecha de aprobación de esta ley concesiones vigentes de zona marítimo terrestre bajo la Ley N.º 6043, se encontraren en proceso de renovación de sus concesiones, o bien, se les hubiese vencido el contrato pero estuviesen en posesión de los terrenos en forma notoria, pública y pacífica. En segundo término, aquellos solicitantes de concesiones sobre terrenos de zona marítimo terrestre que no se les hubiese todavía aprobado la concesión, pero tuviesen una posesión probada sobre dichos terrenos de al menos cinco años al momento de aprobarse esta ley. Tercero, aquellos posesionarios sobre terrenos de zona marítimo terrestre que, a pesar de no haber realizado ningún trámite jurídico de concesión o adquisición de derechos, también tuvieren una posesión notoria, pública y pacífica por al menos cinco años a la fecha de aprobación de esta ley. En todos estos casos, la firma del Contrato de Responsabilidad ambiental perfeccionará el Contrato de Zona Marítimo Terrestre que estuviese vigente sobre terrenos con patrimonio natural del Estado, o, bien, satisfará o completará el requisito de salvaguarda ambiental

para aquellos contratos que estuviesen en proceso de renovación; para los peticionarios que estuviesen en el proceso de solicitud o, finalmente, para aquellos posesionarios con los requisitos arriba indicados, y hará a sus firmantes responsables a los compromisos ambientales allí adquiridos.

d) Los “Contratos de Responsabilidad Ambiental en Zona Marítimo Terrestre” serán firmados por tres partes: por el Ministerio de Medio Ambiente y Energía, mediante el Sinac, la municipalidad del cantón respectivo y por el beneficiario de la concesión de uso en ese régimen. En el caso del Sinac, deberá ser firmado por el director del área de conservación respectiva con el refrendo del director del Sinac. Para todos los efectos, esto implica que existe una responsabilidad administrativa y de tutela de política pública tanto de la municipalidad respectiva como del Ministerio de Medio Ambiente y Energía.

e) Para estos efectos, los beneficiarios de contratos de concesión existentes en zona marítimo terrestre bajo la Ley N.º 6043, deberán firmar el respectivo “Contrato de Responsabilidad Ambiental” adicional en un plazo no mayor a 6 meses a partir de la fecha de aprobación de esta Ley. Igualmente, para aquellas concesiones de zona marítimo terrestre que se encontraren en cualquier etapa del proceso de renovación a la publicación de esta ley para la nuevas solicitudes de contrato de concesión, deberá firmarse el referido “Contrato de Responsabilidad Ambiental” como un documento anexo e integral en el momento mismo de la firma del contrato de concesión de zona marítimo terrestre municipal extendido bajo la Ley N.º 6043. Una vez firmados los contratos de responsabilidad ambiental, se inscribirán como documentos anexos al contrato de concesión de zona marítimo terrestre correspondiente en el asiento que se inscribe en el Registro de Concesiones de Zona Marítimo Terrestre del Registro Público. El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) deberá revisar y hacer constar la existencia del “Contrato de Responsabilidad Ambiental” a la hora de autorizar y dar su visto bueno a un expediente de concesión o renovación de concesión de zona marítimo terrestre sobre terrenos con certificación de patrimonio natural del Estado, de previo a su inscripción.

f) Sin perjuicio de otros contenidos que consideren necesario incluir el área de conservación respectiva y la municipalidad del cantón a la que correspondiese, debido a las características de terreno y el patrimonio natural existente, los contratos de responsabilidad ambiental regularán los siguientes contenidos básicos: a) Nombre del concesionario; b) Referencia al número y datos de inscripción, o contrato de concesión de zona marítimo terrestre a la cual se anexa; c) Descripción del terreno; d) Descripción

del patrimonio natural del Estado existente en el terreno, de acuerdo con la certificación emitida por el Sinac por medio del área de conservación específica e) Indicación del plan de manejo o gestión que se considere adecuado para la protección de los bienes ambientales allí existentes y certificados. A estos efectos, el plan de manejo del Contrato de Responsabilidad Ambiental regulará que se preserven adecuadamente y no se autoricen construcciones en aquellas áreas o porcentajes de los terrenos que hubiesen sido certificados con la existencia de patrimonio natural del Estado, permitiéndose tales desarrollos o construcciones en aquellas áreas de los terrenos que no estuviesen certificados con patrimonio natural, buscándose una integración armoniosa y sostenible de las edificaciones humanas y el medio natural certificado y protegido; f) Indicación expresa de la sanción por daño o violación a los bienes ambientales, sin perjuicio de que establece la legislación en materia de delitos ambientales, consistente en la rescisión del contrato de concesión respectivo; g) Indicación de la fecha de inspección o monitoreo anual, sin perjuicio de otras inspecciones preventivas que se consideren necesarias o adecuadas, en que el Sinac y la municipalidad harán revisión del terreno; h) Indicación expresa del uso o destino, según se estipula en el inciso siguiente.

g) Los "Contratos de Concesión en la Zona Marítimo Terrestre" y los correspondientes Contratos de Responsabilidad Ambiental que se regulan en este artículo podrán ser concedidos en relación al uso o destino en la mismas hipótesis que regula la Ley N.º 6043, más las que aquí se regulan, sintetizándose, pues, de esta manera: a) Habitación; b) Turismo sostenible, c) Investigación científica; d) Protección ambiental; e) Recibidores de pescados y mariscos (lonjas) de pesca artesanal, siempre y cuando se encontraren dentro de los 150 metros de la zona de protección especial. En cualquiera de estas hipótesis, el uso o destino que se autorice en el Contrato de Responsabilidad Ambiental deberá indicar que se observarán todos los requisitos de protección ambiental indicados en esta normativa.

h) El incumplimiento por parte de un concesionario de los términos, condiciones y regulaciones de salvaguarda y protección de los bienes naturales del Estado contenidas en la cláusulas de los "Contratos de Responsabilidad Ambiental" generará rescisión de los contratos de concesión en régimen de zona marítimo terrestre extendidos bajo la Ley N.º 6043, entendiéndose para ello que la Ley Forestal N.º 7575, la Ley de Vida Silvestre N.º 7317 y la otra legislación ambiental vigente forma todo un conjunto con la Ley N.º 6043 y el resto de la normativa jurídica del país. Para que opere un proceso de rescisión del contrato de concesión de zona marítimo terrestre por violación del "Contrato de Responsabilidad Ambiental" deberá incoarse un procedimiento administrativo por el Sinac o la

municipalidad respectiva en contra del administrado, expresado en un acuerdo en el que se comunica al concesionario la rescisión de su contrato por violaciones a las cláusulas ambiental acordadas, y en virtud de la prueba recabada sobre violación a los bienes naturales del Estado, la cual deberá ser debidamente documentada por la administración de acuerdo con los principios probatorios del derecho administrativo. Cualquiera de las dos administraciones, si encontraran causa para ello, podrán presentar un juicio de lesividad conjunto contra el concesionario tendente a la resolución o rescisión del contrato de concesión, cumpliéndose para esos efectos la normativa específica prescrita por la Ley General de Administración Pública, y el agotamiento de la vía administrativa y judicial correspondiente. El administrado tendrá derecho al agotamiento de los recursos administrativos y jurisdiccionales que indica la ley para hacer valer sus derechos.

En caso de que el contrato quede resuelto o rescindido, el terreno específico pasará a dominio municipal nuevamente.

i) Los plazos de vigencia de los “Contratos de Responsabilidad Ambiental” quedarán sujetos y corresponderán a los plazos de los contratos de concesión de zona marítimo terrestre fijados por el Concejo Municipal de las municipalidades respectivas de las cuales son anexos, autorizados con base en el artículo 48 de la Ley N.º 6043, y sus reformas. Al renovarse o perfeccionarse los actuales contratos de concesión de zona marítimo terrestre bajo la Ley N.º 6043 como resultado de la firma de los “Contratos de Responsabilidad Ambiental”, se firmará un *addendum* ampliando la vigencia del contrato a la totalidad del plazo con base en el artículo 48 de la zona marítimo terrestre.

j) Los cánones correspondientes a aquellos terrenos en concesión de zona marítima terrestre que estuviese afectados por un “Contrato de Responsabilidad Ambiental” se dividirán en forma proporcional y alícuota del 50% para la municipalidad respectiva y el 50% para el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), que se adjudicará al área de conservación del cantón a donde correspondiese el terreno. La municipalidad tendrá la obligación de girar, en un plazo no mayor de 30 días conforme ingrese cada canon específico a las arcas municipales, el monto correspondiente al 50% del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).

k) Sobre la base de los parámetros contenidos en esta ley, las áreas de conservación respectivas en conjunto con la municipalidad del cantón correspondiente deberán redactar un formato general o machote del “Contrato de Responsabilidad Ambiental” aplicable a su región o cantón en un plazo no mayor a 60 días a partir de la

publicación de esta ley a los efectos de que se puedan poner en práctica las regulaciones aquí contenidas. Los concesionarios con derecho a firmarlos, así como los poseionarios con derecho a su firma, tendrán derecho de pedir la redacción y firma de sus contratos dentro de los 90 días calendario a partir de su petición al área de conservación específica y la municipalidad del caso, los cuales se contarán a partir de la fecha de recibo de las solicitudes por ambas administraciones, Minae y gobierno municipal. En caso de que por falta de diligencia o incumplimiento de cualquier índole alguna de las dos administraciones públicas, transcurridos los 90 días indicados no suscribiese con el peticionario el contrato específico, este podrá hacer constar lo anterior con documento notarial, haciéndose referencia allí de las solicitudes recibidas no satisfechas. Dicho documento notarial será suficiente para que el ICT proceda a satisfacer el requisito del “Contrato de Responsabilidad Ambiental” y remita el Contrato de Concesión de Zona Marítimo Terrestre al “Registro Público de Concesiones de Zona Marítimo Terrestre” para su inscripción.

l) Podrán firmar los “Contratos de Responsabilidad Ambiental” definidos por esta ley y, en consecuencia, perfeccionar sus “Contratos de Concesión en Zona Marítimo Terrestre”, como se indica en los incisos anteriores o, bien, hacerse acreedor a dichos derechos de concesión, las siguientes personas, por el siguiente orden de prelación en relación al terreno o parcela específica:

a) Las personas físicas o jurídicas que sean titulares de un contrato de concesión por parte de la municipalidad respectiva, conforme lo establece la Ley N.º 6043 sobre la zona marítima terrestre sobre esos terrenos con anterioridad a su traslado al patrimonio natural del Estado, o que se encuentren en cualquier etapa del proceso de renovación de su concesión.

b) Las personas físicas o jurídicas que sean ocupantes de la parcela y que hayan realizado, a la fecha de publicación de esta ley, acciones previas para obtener un contrato de concesión o la obtención de un permiso de uso, cuidado y mantenimiento de la parcela ante la respectiva municipalidad. Para todos los efectos, deberán aportar la documentación que acredite dicha condición y el inicio de sus trámites.

c) Los poseionarios sobre terrenos de zona marítimo terrestre que, a pesar de no haber realizado ningún trámite jurídico de concesión o adquisición de derechos, también tuvieren una posesión notoria, pública y pacífica por al menos cinco años a la fecha de aprobación de esta ley.”

ARTÍCULO 3.- Beneficiarios

Serán beneficiarios inmediatos de la presente ley todas aquellas personas que cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 1 y 2 de esta normativa.

TRANSITORIO I.- Plazo de adecuación

A partir de la aprobación de la presente ley y las reformas que implica, se concederá un plazo de 24 meses para que todas las personas, tanto físicas como jurídicas, que se encuentren en alguna de las condiciones indicadas en los artículos 1 y 2 o cualquiera de los extremos de la presente ley, puedan ponerse a derecho, y presentar los documentos que consoliden o acrediten sus concesiones ante la municipalidad del cantón correspondiente. Los posesionarios indicados en los incisos c) y k) del presente artículo 18 bis de la Ley Forestal podrán demostrar su posesión o justo título con una declaración jurada con tres vecinos de su comunidad haciendo constar su posesión histórica superior a 5 años.

TRANSITORIO II.- Sobre construcciones existentes

Se autoriza la conservación de las construcciones existentes en la zona marítimo terrestre a la fecha de aprobación de esta ley, incluidos los terrenos en que hubiese patrimonio natural del Estado, fijándose igualmente un plazo de 24 meses para que los concesionarios u ocupantes de los terrenos y parcelas respectivos procedan con los requerimientos de firma de los "Contratos de Responsabilidad Ambiental", dentro de los cuales deberá hacerse constar la existencia de dichas construcciones y su interacción armónica con el patrimonio natural allí existente y el plan de manejo respectivo de acuerdo con el artículo 2 de la presente ley. Durante ese plazo, se podrá seguir haciendo pago de las construcciones a título precario, mientras se formalizan los "Contratos de Responsabilidad Ambiental" respectivos y los posteriores "Contratos de Concesión de Zona Marítimo Terrestre" al tenor de lo dispuesto por esta ley.

TRANSITORIO III.- Sobre planes reguladores

En caso de que, al momento de aprobarse esta ley, no hubiese plan regulador o plan de manejo ambiental aprobado en la playa o zona costera donde se encontrare un terreno o conjunto de terrenos sujetos a los beneficios y derechos otorgados por esta ley, se utilizará como marco jurídico de salvaguarda ambiental el "Reglamento a Ley de Conservación de la Vida Silvestre", Decreto N.º 32633-Minae, publicado en La Gaceta el 20 de septiembre 2005, a efectos de que se fijen los límites y regulaciones ambientales en los "Contratos de Responsabilidad Ambiental" y en los "Contratos de Concesión de Zona Marítimo Terrestre", adaptándose el contenido de dichos documentos a todas las exigencias ambientales y regulatorias de dicho decreto. Si posteriormente se aprobare un plan regulador o un plan de manejo ambiental costero con exigencias aún mayores salvaguardas al Decreto N.º 32633-Minae antedicho, se procederá a

una enmienda de todos los "Contratos de Responsabilidad Ambiental" y "Contratos de Concesión de Zona Marítimo Terrestre" que resultaren afectados, en un plazo no mayor de seis meses a la aprobación de cualquiera de esos instrumentos.

Rige a partir de su publicación.

Gerardo Vargas Rojas	Juan Rafael Marín Quirós
Karla Vanessa Prendas Matarrita	Otto Guevara Guth
Danny Hayling Carcache	Johnny Leiva Badilla
Olivier Ibo Jiménez Rojas	Juan Luis Jiménez Succar
William Alvarado Bogantes	Natalia Díaz Quintana
Gerardo Fabricio Alvarado Muñoz	Humberto Vargas Corrales
Marlene Madrigal Flores	Rosibel Ramos Madrigal
Laura María Garro Sánchez	Aracelli Segura Retana
Rafael Ángel Ortiz Fábrega	Luis Alberto Vásquez Castro

Franklin Corella Vargas

DIPUTADOS Y DIPUTADAS

20 de enero de 2015

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Ambiente.

1 vez.—Solicitud N° 28419.—O. C. N° 25003.—C-241950.—(2015013879).

PROYECTO DE LEY
CÓDIGO PROCESAL DE FAMILIA

Expediente N.º 19.455

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

I.- INTRODUCCIÓN

Este proyecto de ley de Código Procesal de Familia, se presenta, luego de cuarenta años tanto de la promulgación del Código de Familia, como del surgimiento del primer despacho judicial especializado en la materia. Igual estamos a veinte años de que se instalara el tribunal de apelaciones de familia.

En aquel tiempo en que se gestó el Código de Familia, la misma comisión redactora de dicho Código sustantivo, se planteó abordar la regulación de los procedimientos familiares. Se desistió de ello para quedarse solo con la propuesta de fondo, dejando pendiente el tema procesal. Pendiente que ha tardado por lo menos estos cuarenta años mencionados.

A lo largo de estas décadas, múltiples han sido los esfuerzos tendientes a promulgar una ley que regule los procedimientos familiares. En los años ochenta, una ley creó una comisión que examinara tal propuesta. Pero su labor se detuvo ante la redacción del actual Código Procesal Civil que rige desde el año noventa. En la década última del siglo anterior, dos proyectos se redactaron, pero no se meritaban con el argumento de la propuesta de un código general del proceso.

El momento actual es el propicio para aprobar una legislación procesal, pues existe una organización judicial muy consolidada y madura. Dicha organización está compuesta por más de cien tribunales de la materia, más de doscientas personas juzgadoras que se dedican a ella. Hay esfuerzos académicos de postgrado que apuntalan la cultura jurídica del derecho familiar y procesal familiar, en los cuales se han graduado varias personas profesionales que empujan por lograr saltos cualitativos, y que están comprometidas y capacitadas para lograr un progreso en esta área tan importante.

El proyecto surge también en el momento oportuno de capitalizar no solo las experiencias y propuestas nacionales, sino que también lo que se da en el derecho comparado. Experiencias latinoamericanas en Panamá, El Salvador, México, Argentina, Perú y, la última, en Chile. Ello por mencionar nuestra zona. Pero en otras latitudes y en otros sistemas jurídicos, se han ensayado y concretado propuestas de procedimientos, y también de funcionamiento de tribunales. Muchas de esas experiencias se han estudiado y analizado, pero globalmente, se logra establecer, que existen al menos tres “generaciones” de sistemas, siendo la tercera la que nos debe establecer un norte.

La tercera generación de los sistemas procesales familiares es aquella de mayor sofisticación y especialización que tiende a efectivizar los derechos humanos en las relaciones familiares. En el derecho comparado hay esfuerzos que tienden hacia esta tercera generación. Pero no existe aún un sistema satisfactorio. No obstante el proyecto que ahora se presenta, resulta en suma con muchos elementos dentro del plano normativo que nos ponen en esa senda hacia la tercera generación, en un momento, como se mencionó, propicio, pues se cuenta con una infraestructura, con una experiencia acumulada de cerca de cuarenta años y de cerca de doscientos jueces y juezas esperando se apruebe esta propuesta.

II.- OBJETIVOS QUE SE ALCANZAN CON LA APROBACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL DE FAMILIA

El primer objetivo que se pretende concretar con la aprobación del Código Procesal de Familia, es organizar, en un solo cuerpo normativo, un sistema procesal coherente y estratégicamente direccionado hacia los propósitos transdisciplinarios que debe tener la resolución de los delicados conflictos familiares. La coherencia la dan principios especiales que se enuncian al inicio del Código. Estos principios han servido de base para la construcción de las normas específicas. De todas maneras, esos principios servirán para la aplicación, interpretación y suplenia, dentro de una lógica de suficiencia normativa.

El segundo objetivo es que, si bien hay novedades importantes, se rescatan aquellos aciertos del sistema que ha regido en los años precedentes. Entonces, esta legislación que se propone es un paso más dentro de esta evolución hacia un camino de consolidación. Veremos que tanto en la organización dispuesta como en los procesos, se trasluce esa lógica inicial que plantearon las leyes especiales, de manera tal que el nuevo cuerpo normativo se asienta dentro de la experiencia que se ha acumulado. El operador no lo entenderá como distante ni como ajeno, sino como ese anillo que cierra el círculo de algunas curvas que se habían esbozado en dichas normativas. Con dicha sabiduría de aprovechar aquellas grandes líneas de experiencia y cultura y organización, el nuevo Código no resulta costoso en inversión inicial ni para su mantenimiento. No se trata de un borrón y cuenta nueva, sino de potenciar, con algunas añadiduras, entre ellas la coherencia normativa, el talento y la experiencia existentes. La capacitación para la implementación, desde luego necesaria e indispensable, no resulta tampoco

extraña al operador.

El tercer logro de este proyecto, es el de que se está en sintonía con los instrumentos internacionales que ha aprobado el país. Instrumentos tales como la Convención sobre Derechos del Niño y de la Niña, la Cedaw, la Convención de Belén do Para, la Convención sobre personas con discapacidad, en fin, todos aquellos instrumentos emanados tanto de las Naciones Unidas, del sistema interamericano y de la Conferencia de La Haya. Se ha contado en su diseño con la asesoría de personas expertas en el derecho internacional privado tanto del plano internacional como del nacional.

III.- CAMINO DE REDACCIÓN Y REVISIÓN POR VARIOS AÑOS

Ahora bien, este nuevo paso se da con el esfuerzo de muchas personas expertas costarricenses que han colaborado en un periodo de cerca de ocho años. Primeramente, en elaboraciones normativas en conjunto con otras materias, luego en un marco logístico de idear un camino de construcción. Posteriormente, en hacer un marco teórico inicial, seguido de una intensa discusión que dio pie a un documento de diez bases y a la designación de un grupo de personas expertas para la elaboración de un anteproyecto, quienes contaron con el apoyo de subgrupos en diversas secciones y submaterias. En diciembre del 2008 el anteproyecto, el cual fue producto del esfuerzo de muchas personas, es presentado a Corte Plena. La Corte Plena designa a la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia como comisión revisora. Múltiples jornadas tuvo que dedicar la Sala Segunda a dicha revisión. Esto coincidió con la responsabilidad, que también tocó a dicha Sala, respecto a la reforma procesal laboral.

En el camino de estos ocho años, se tuvo el apoyo de expertos internacionales, que con sus conferencias no solo en el plano procesal, sino constitucional y de derechos humanos, así como de derecho de fondo, ayudaron a inspirar ideas que fueron incluidas en el proyecto: Aída Kemelmajer, Alfredo Ferrante, María Aracy Menezes da Costa, Marisa Herrera, Jorge L. Kielmanovich, Francisco Rivero Hernández, Pedro di Lela, Nora Lloveras, Fátima Yáñez, Rosa Isabel Reyes Rebolledo, Silvana Ballarín y, últimamente, la experta en derecho internacional privado Adriana Dreyzin. Dicho expertos internacionales no solo dieron sus opiniones y enseñanzas oralmente sino que muchos de ellos plasmaron sus criterios en documentos que han sido publicados en el medio.

IV.- ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA

Ahora bien, el proyecto de Código Procesal de Familia consta de cinco partes. Una primera de normas preliminares, otras tres que son los libros del Código, y la quinta parte es una sección de derogatorias, reformas y adiciones.

En las normas preliminares se enuncian los grandes principios y pautas que inspiran el Código, como ya se había mencionado. El primer libro se dedica a las normas generales comunes a los sistemas procesales. En el libro segundo se

desarrollan los procesos que se estipulan en este Código. En el tercer libro se expone todo lo relacionado al derecho internacional procesal de familia en cuanto a la competencia, y también, al proceso de reconocimiento de las resoluciones extranjeras. En la última parte se puntualizan las normas que se eliminan del ordenamiento y aquellas que se modifican. También otras que se adicionan con la

finalidad de dar mejor comprensión, coherencia y efectividad al Código. A continuación se profundiza en esas cinco partes del Código.

A.- Normas preliminares

La parte de normas preliminares establece el objeto del Código, las formas de aplicación e interpretación, la exigencia de suficiencia normativa, la pauta de preferencia del sistema procesal de oralidad y la aplicación de principios procesales, tanto los generales del sistema procesal moderno, los particulares del sistema procesal de los procesos de humanización, así como los principios específicos propios que se establecen en la doctrina para un Derecho Procesal de Familia.

De la misma manera, esta normativa preliminar establece el deber de las personas juzgadoras de tener particular esmero en la efectivización de los derechos humanos de personas en situación de vulnerabilidad, derechos humanos que están contenidos en la normativa nacional, internacional y sus principios. Se enfatiza la garantía del acceso y participación de dichas personas en situación de vulnerabilidad, al sistema procesal de resolución de los conflictos familiares. También se enuncian en estas normas generales la audiencia previa de conciliación, el auxilio a nivel interinstitucional y el costo mínimo del proceso.

1.- La suficiencia normativa

La presente es una propuesta integral, coherente y autosuficiente, esto es que el cuerpo normativo pretende ser una estructura que cumpla y satisfaga las diversas situaciones procesales que emergen en la jurisdicción sin necesidad primaria de acudir a otros cuerpos normativos procesales para la toma de decisiones objetivas del proceso. Esto lo diferenciará de otras soluciones procesales del derecho comparado que remiten a los códigos procesales de carácter civil para la regulación de los temas generales del derecho procesal, lo cual genera una contradicción interna, pues lo familiar y lo civil tienen una esencia diferente. Además las universidades han enfatizado el estudio del proceso civil, y en pocas universidades se ha hecho lo propio con el proceso familiar. Esa contradicción interna resulta por hacer emerger situaciones incompatibles, sin ninguna necesidad. Por ello este proyecto contempla regulaciones completas en ámbitos de sujetos procesales, actos procesales, competencia, teoría cautelar, aspectos probatorios, consecuencias económicas y otros. Con ello, quienes juzgan probablemente encontrarán la respuesta a las dudas y vicisitudes que el proceso presente, bastándose a sí mismo dentro de la lógica de sus principios. Si deja el Código clara la propuesta de que en el remoto caso de que el Código no

se baste a sí mismo, está obligada la persona juzgadora a acudir a estructuras procesales que sean más afines con la materia en la naturaleza general del derecho familiar tanto objetivo como sustantivo.

2.- Sistema procesal de oralidad

Costa Rica vive un momento trascendental en el desarrollo del Derecho Procesal, hace quince años se emitió el actual Código Procesal Penal y a partir de allí una nueva filosofía ha venido imperando en la búsqueda de las mejoras para la solución de los conflictos. Ya se aprobó y está en vigencia el Código Procesal Contencioso-Administrativo. Se han dado pasos importantes para la aprobación de los proyectos de Código Procesal Civil y la reforma procesal en el ámbito laboral; existe ya un proyecto de legislación procesal en lo agrario y ahora se presenta este Código Procesal de Familia, materia que ya tenía adelantos importantes de reformas en temas como filiación, abandono de personas menores de edad, violencia intrafamiliar, adopción y procesos de protección de niñez y adolescencia. En todas estas estructuras que en estos años se han establecido hay un común denominador fundamental para el proceso moderno. Dicho común denominador es la implementación del sistema procesal de oralidad como eje fundamental para la resolución del conflicto. Con ello se busca la necesaria armonía con los avances tecnológicos y la necesidad de una justicia más pronta y siempre cumplida, consideraciones que se complementan en forma adecuada con este sistema procesal de oralidad.

Así, en la parte de normas preliminares se esbozó la preferencia por el sistema procesal de oralidad. Dentro de la redacción del proyecto se tienen claros temas como la privacidad en las audiencias. Así lo han establecido instrumentos internacionales ratificados por el país y la doctrina más autorizada de la materia. También están claros en el Código, la concentración de las audiencias, la suspensión y continuación de las mismas en plazos razonables que eviten hacer nugatoria la intermediación probatoria. Además se establece que quien o quienes inician presidiendo la audiencia deberán finalizarla y dictar el fallo. Acorde con el avance de la tecnología, el Código está propuesto para que ante la implementación del expediente electrónico no sea necesario realizar modificaciones de la legislación.

3.- Los Principios del Proceso de Familia

El proyecto que se presenta está fundado en el sistema de principios procesales que la doctrina ha venido considerando como fundamentales en la materia. Para ello, lo hace en forma deductiva de los principios más generales del derecho procesal hasta llegar a los específicos del derecho procesal de familia. Por ello se recoge en un primer artículo la necesidad de que el operador del sistema tenga clara la aplicación con este Código de los principios generales de todo derecho procesal, específicamente a partir de un debido proceso y sus particularidades, armonizados con los principios que cobijan los procesos de humanización, y entre ambos sobresalen entonces los principios de fácil acceso a la justicia, impulso procesal de oficio, celeridad procesal, buena fe, economía procesal y equilibrio procesal.

Luego de ello, el sistema procesal pretende dar un carácter fundamental a las notas particulares del derecho procesal de familia, establecido en los principios de equilibrio entre las partes, ausencia de contención, solución integral, abordaje interdisciplinario, búsqueda de equidad y equilibrio familiar, mejor interés, protección, accesibilidad, diversidad, y participación e intervenciones especiales y progresivas; además de la preclusión flexible y la inestimabilidad de las pretensiones. Estas son las bases que la persona operadora del sistema debe establecer como marco para sus diversas actuaciones.

B.- Libro Primero

Este libro primero sobre normas generales contiene siete títulos. Estos títulos tratan de temas fundamentales de un sistema procesal como lo son jurisdicción y competencia, sujetos procesales, actuaciones procesales, actuaciones cautelares, la prueba, terminación anticipada de los procesos y consecuencias económicas del proceso. Algunas de las particularidades importantes en este libro se describen a continuación.

- 1.- La competencia y la proximidad de la persona actora, teniendo como regla general la competencia a partir del domicilio de la persona actora del proceso o de la persona vulnerable del conflicto, con lo cual a esta le facilita la intervención, contrario a lo que sucede en la actualidad conforme al Código Procesal Civil donde el domicilio del demandado priva en el proceso.
- 2.- La competencia ampliada en el proceso familiar se establece como un baluarte necesario que evita redundar en los asuntos probatorios y de sedes jurisdiccionales. Procura una definición integral del conflicto, pues se propone que hasta donde sea posible un juez o jueza lo sea para todo el conflicto familiar en las diferentes pretensiones que se establecen.
- 3.- La intervención de sujetos terceros en el proceso es un aspecto importante, por cuanto siendo la necesidad de dirimir el conflicto y buscar la mejor de las soluciones, existen otras personas que pertenecen al vínculo familiar que pueden ser fuente importante para esa búsqueda, como los abuelos por ejemplo de las personas menores de edad en conflictos de custodia o visitas. Lo mismo sucede con intervención de otras instituciones públicas o privadas que trabajan por el bienestar de los sectores vulnerables, tal y como históricamente ha sucedido con el Patronato Nacional de la Infancia.
- 4.- El patrocinio letrado y la función estatal es un tema de mucha discusión en este proyecto, pues base esencial del principio de acceso a la justicia es proponer diversas formas de efectiva participación de los sectores, con un patrocinio letrado eficiente. Es por eso que se propone, en las normas orgánicas, el establecimiento de la defensa pública social para los procesos de familia que cobije a ambas partes; además de la garantía de gratuidad en otros puntos esenciales del proceso.

- 5.- El sistema recursivo es acorde con el sistema procesal de oralidad, que propone una reducción importante de los recursos verticales ante la existencia de la apelación diferida y la amplia proyección para el recurso de revocatoria en la audiencia. Se amplía el recurso de casación con fácil acceso a él.
- 6.- La necesidad de la cautela como elemento fundamental del proceso es tema importante del derecho procesal moderno, por ello el presente Código estipula formas concretas de acciones cautelares con ejecuciones inmediatas no solo para asegurar los derechos pretendidos sino también para la debida protección en situaciones vulnerables.
- 7.- Algunas vicisitudes en materia probatoria reciben especial tratamiento en este proyecto. Especialmente clarifica el sistema de libre valoración de la prueba, acorde a un sistema procesal de oralidad y como beneficio de protección importante especialmente en el tema del derecho patrimonial.

C.- Libro Segundo

Seis títulos contiene este libro segundo. Trata de los procesos que se establecen para la resolución de las diferentes pretensiones relativas a las relaciones familiares. Abarca temas de disposiciones generales, y desarrolla los diferentes tipos de procesos del Código: proceso resolutivo familiar, procesos de protección cautelar, procesos de petición unilateral, procedimientos especiales y ejecución de las resoluciones.

- 1.- El proceso resolutivo general, será el proceso genérico, para la amplia categoría de pretensiones familiares. Se agrupan especialmente lo que hoy son procesos ordinarios y abreviados, pero además se les suman las pretensiones filiatorias y especiales que son concretas de un proceso de conocimiento y también para pretensiones muy específicas sumarias. Tiene algunas particularidades como el inicio del procedimiento en forma verbal con la presentación de la demanda en esa forma en la audiencia previa de conciliación en caso de fracaso de esta y la oportunidad de contestar esa demanda de esa misma manera en ese momento. Conlleva un proceso por audiencias que asegura el sistema procesal de oralidad.
- 2.- La necesidad de la protección cautelar requiere, en el proceso moderno de familia, mejores oportunidades de acción. En este proyecto se incorpora no solo el ya existente proceso de protección de niñez y adolescencia. También se implementa un proceso de protección para las personas con discapacidad y se rediseña en forma amplia el proceso a favor de las personas adultas mayores. Únicamente se consideró innecesario incluir en este proyecto, el proceso de protección de violencia intrafamiliar ante la reciente reforma que la ley de la materia tuvo y que con éxito se viene implementando.

- 3.- Procesos de petición unilateral, en los cuales se tratarán temas como nombramientos de personas tutoras, curadoras, depositarias, las autorizaciones para la disposición de derechos en bienes de personas menores de edad o con discapacidad y la dispensa del consentimiento de los padres o representantes para matrimonio de personas menores de edad. Se tramitarán como procesos de petición unilateral, que se regían anteriormente con los procedimientos de actividad judicial no contenciosa del Código Procesal Civil.
- 4.- Procedimientos especiales de diversas índoles: se incluyen en el proceso aquellas pretensiones de las cuales se consideró que no se podían establecer como procesos resolutivos por las particularidades de la pretensión. Así se legisla por primera vez un proceso específico para las acciones de restitución internacional de personas menores de edad según las normas de los instrumentos internacionales que Costa Rica ha firmado. Además se incorpora como proceso especial el proceso de fijación de la cuota de alimentos y los diversos procedimientos derivados de esta materia para las respectivas modificaciones. En este capítulo se incorporan dos procesos no contenciosos de mayúsculo uso en la jurisdicción actual. Uno de ellos es el procedimiento de divorcio y separación judicial por mutuo consentimiento, al que ahora se agrega, por la reforma sustancial también presentada, el reconocimiento del cese de la unión de hecho en forma consensuada. El otro es el procedimiento para la adopción, cuando concurra necesariamente aislado del proceso de conocimiento de adoptabilidad.
- 5.- Ejecución de las resoluciones y sentencias: tema de importancia capital para hacer efectiva la tutela judicial, especialmente cuando se trata de obligaciones muy personales tratándose de custodia y visitas en que no necesariamente siempre se cumplen los mandatos judiciales. Se establece la necesidad de que las decisiones de modificaciones relacionadas al Registro Civil se ejecuten de manera oficiosa de parte de los despachos judiciales. En el tema patrimonial se recogen normas prácticas importantes para una buena ejecución de las decisiones relativas especialmente el derecho de ganancialidad, siempre complejo en el tema de la ejecución.

D.- Libro Tercero

Ante la importancia de la internacionalización que han venido asumiendo las relaciones familiares, se dispone de un tercer libro del Código, para la regulación de los aspectos de este tipo, tanto en cuanto a competencia internacional como el procedimiento establecido para la ratificación o ejecución de las resoluciones jurídicas extranjeras en Costa Rica. Ello por cuanto la dinámica que han cobrado las relaciones jurídicas en la arena internacional, en lo que va de este siglo, refleja de forma meridiana un crecimiento exponencial de conflictos que involucran el sector de la familia y ello conlleva la aplicación de derecho

internacional de familia que se posiciona así, en un plano significativo en el desarrollo de la familia internacional.

De esta suerte, la elaboración del Código Procesal de Familia no surge de manera azarosa sino que es en cumplimiento de un mandato imperativo que consiste en formular la legislación adjetiva a fin de elaborar un sistema que responda a los factores señalados con proyección temporal.

Situados en la actual instancia, es necesario destacar la articulación de los Derechos Humanos y la protección que brindan las declaraciones y tratados incorporados a la legislación interna con los planteos generados en las relaciones internacionales de familia desde la mirada procesal. Y a partir de esta metodología, se elaboran las normas de Derecho Internacional Procesal de Familia incorporadas en este proyecto.

En este Código el Derecho Internacional Procesal de Familia se enmarca en una concepción axiológica, indaga en los valores de la sociedad multicultural y pluralista respetuosa de las diversidades, a la vez que echa mano del diálogo de las fuentes a nivel vertical y horizontal, pues se consideró la velocidad con que se producen los cambios y ello impone a los estados adecuar sus reglas jurídicas. Consecuentemente, las normas consagradas en este proyecto responden a los nuevos paradigmas de familia, a los principios procesales universales y bajan línea a la realidad. Se trata de reconocer que en la etapa contemporánea no se puede cerrar los ojos al entorno en que vivimos y a él debemos adecuar las leyes.

E.- Derogatorias, reformas y adiciones

En la parte de derogatorias quedan en evidencia aquellas normas que son sustituidas por el Código Procesal de Familia. En forma completa se deroga la Ley de Pensiones Alimentarias, pues es claro que esta Ley contenía normas prácticamente de orden procesal que ahora pasan a engrosar los procedimientos especiales que se han mencionado supra. También se derogan las normas procesales que contienen tanto el Código de Familia como el Código de la Niñez y la Adolescencia. Se recogen en el proyecto cada uno de ellos. Es el caso del proceso especial de filiación que dejará de existir para que las pretensiones relativas a esta materia se establezcan ahora con el proceso resolutorio familiar; también se derogan las normas que se contienen en el Código de Familia sobre los procesos de abandono de persona menor de edad, de adopción, el sumarísimo de dispensa de consentimiento para matrimonio de la persona menor de edad y el sumarísimo de conflicto en el ejercicio de los atributos de la responsabilidad parental.

En cuanto a las reformas, se debe puntualizar que se modifican artículos de otros cuerpos normativos para ajustar su contenido a las propuestas del Código Procesal de Familia. Se modifica la nomenclatura de los títulos del Código de Familia; así como artículos de dicho Código sobre el matrimonio, sobre el régimen de gananciales, sobre el divorcio, separación por mutuo acuerdo, reconocimiento

administrativo de paternidad, reconocimiento mediante juicio, adopción, atributos de la responsabilidad parental, extinción y pérdida de responsabilidad parental, pensiones alimentarias, tutela, unión de hecho.

Se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial específicamente en cuanto a los procesos que conocen los tribunales de familia. Se modifica el Código de la Niñez y la Adolescencia sobre salidas del país de personas menores de edad, derecho a la privacidad, causales de separación definitiva. También hay modificaciones al Código Civil, al Código Penal, a la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia, la Ley General de Migración y Extranjería, sobre todo para corregir la terminología de la responsabilidad parental.

Por último, se procede a adicionar varias normas al Código de Familia, a la Ley Orgánica del Registro Civil y a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Además al propio Código de Familia se le adiciona una sección en el título preliminar relativa a la aplicación de la ley extranjera. En la Ley Orgánica del Registro Civil se incluye un procedimiento administrativo del que fuera reconocimiento de hijo de mujer casada. En la Ley Orgánica del Poder Judicial se incluyen artículos sobre la competencia de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia en asuntos de familia. El artículo 55 se modificó para que contemplara solo la competencia en asuntos laborales y de juicios universales, y se adiciona un artículo 55 bis para puntualizar la competencia en asuntos de familia. Se hacen adiciones también sobre la competencia de los juzgados de niñez y adolescencia, sobre los juzgados de violencia doméstica y de protección cautelar, los juzgados de familia de asuntos sumarios. Se incluye expresamente la figura del juez de enlace y de las comunicaciones judiciales directas en asuntos de derecho internacional de familia. Se suman regulaciones sobre el personal interdisciplinario auxiliar de justicia y respecto a la capacitación de servidores en materia familiar.

V.- SOBRE LAS AUTORIDADES JUDICIALES

De acuerdo con las reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial, los órganos jurisdiccionales con competencia en los asuntos familiares serían la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, los Tribunales Colegiados de Familia, los Juzgados de Familia, los Juzgados de Niñez y Adolescencia, los Juzgados de Pensiones Alimentarias, los Juzgados de Violencia Doméstica y de Protección Cautelar y los Juzgados de Familia de Asuntos Sumarios. Lo únicamente novedoso son los despachos de asuntos sumarios que procuran aproximar ampliamente a las partes y personas usuarias al despacho más cercano, ahora conocidos como juzgados contravencionales. Especialmente en lugares alejados de los centros urbanos importantes, quedando en disposición del Poder Judicial el establecimiento de estos despachos en otras regiones, lo mismo que adecuar los ya existentes a las necesidades que establecerá la implementación de este proyecto. Así también, la posibilidad de otros tribunales colegiados fuera de la capital, y la de establecer igualdades en el rango o categoría de los despachos para efectos de la segunda instancia.

Con base en lo expuesto anteriormente, es que se somete a consideración de los señores (as) diputados (as), el presente proyecto del “**Código Procesal de Familia**”.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

Díctese el presente Código Procesal de Familia:

CÓDIGO PROCESAL DE FAMILIA

ÍNDICE

Normas preliminares
Objeto y Principios

**LIBRO PRIMERO
NORMAS GENERALES**

TÍTULO I

Jurisdicción y competencia

Capítulo I: Competencia Objetiva
Sección I: Competencia material
Sección II: Competencia ampliada
Sección III: Competencia territorial
Sección IV: Generalidades sobre declaratoria de competencia
Capítulo II: Competencia Subjetiva

TÍTULO II

Los sujetos procesales

Capítulo I: La persona juzgadora
Sección I: Poderes y deberes
Capítulo II: Partes e intervinientes
Sección I: Pretensión y legitimación
Sección II: Intervinientes del proceso
Subsección II: Terceros institucionales
Sección III: Capacidad y representación
Subsección I: Capacidad procesal
Subsección II: Representación procesal de menores de edad y de personas con discapacidad
Subsección III: Curatela procesal
Subsección IV: El arraigo
Subsección V: Patrocinio letrado y suplencias
Subsección VI: Intervención de la Defensa Pública
Sección IV: Pluralidad de sujetos
Subsección I: Acción conjunta
Subsección II: Terceros con pretensiones excluyentes

TÍTULO III

Las actuaciones procesales

Capítulo I: Generalidades

Sección I: Idioma y lenguaje

Sección II: Privacidad de las actuaciones

Sección III: Tiempo y lugar para las actuaciones

Sección IV: Medios tecnológicos

Sección V: Plazos judiciales

Sección VI: Suspensión de los procedimientos

Capítulo II: Actos de la persona juzgadora

Sección I: Las resoluciones judiciales

Sección II: Tipos de resoluciones judiciales

Sección III: Comunicación de resoluciones judiciales

Sección IV: Efectos de las sentencias

Sección V: Actividad procesal defectuosa

Sección VI: Impugnación de resoluciones judiciales

Subsección I: Generalidades

Subsección II: Recurso de revocatoria

Subsección III: Recurso de apelación

Subsección IV: Recurso de Casación

Subsección V: Demanda de revisión

Capítulo III: Actos de las partes

Capítulo IV: Las audiencias judiciales

TÍTULO IV

Actuaciones cautelares

Capítulo I: Generalidades

Capítulo II: Procedimientos cautelares

Capítulo III: Medidas cautelares típicas

Sección I: Medidas cautelares en procesos de pretensiones personalísimas

Sección II: Medidas cautelares en procesos de representación

Sección III: Medidas cautelares en pretensiones patrimoniales

Sección IV: Medidas Autosatisfactivas

TÍTULO V

La prueba

Capítulo I: Disposiciones generales

Sección I: Principios básicos

Sección II: Carga de la prueba

Capítulo II: Ofrecimiento y admisión

Sección I. Prueba anticipada

Sección II: Ofrecimiento de prueba

Capítulo III: Admisión de la prueba

Sección I: Iniciativa probatoria de la autoridad judicial

Sección II: Admisión de prueba ofrecida
Capítulo IV: Medios de prueba y su práctica
Sección I: Generalidades
Sección II: Particularidades de los medios de prueba
Subsección I: Declaración de partes
Subsección II: Declaración de terceros
Subsección III: Documentos e informes
Subsección IV: Informes periciales
Subsección V: Dictámenes científicos y tecnológicos
Subsección VI: Reconocimiento judicial de personas, lugares, cosas y situaciones familiares
Capítulo V: Apreciación probatoria

TÍTULO VI

Terminación anticipada de los procesos

Capítulo I: Medios alternos de solución
Capítulo II: Otras formas de terminación del proceso
Sección I: El desistimiento
Sección II: Caducidad del proceso

TÍTULO VII

Consecuencias económicas del proceso

Capítulo I: Costas
Capítulo II: Honorarios del profesional en abogacía

LIBRO SEGUNDO LOS PROCESOS

TÍTULO I

Disposiciones generales

Capítulo I: Aplicaciones generales

TÍTULO II

El proceso resolutivo familiar

Capítulo I: Normas generales
Capítulo II: Procedimiento de conciliación previa
Capítulo III: Trámite del procedimiento
Sección I: Etapa de definición del proceso
Sección II: Fase probatoria y de conclusión del proceso

TÍTULO III

Procesos de protección cautelar

Capítulo I: Disposiciones especiales

Capítulo II: Del procedimiento cautelar de protección

TÍTULO IV

Procesos de petición unilateral

TÍTULO V

Procedimientos especiales

Capítulo I: Procesos de pensiones alimentarias

Sección I: Disposiciones generales

Sección II: Procedimiento principal de fijación de cuota alimentaria

Sección III: Procedimientos de extinción o modificación de la cuota fijada de alimentos y cobro de gastos extraordinarios no pactados

Sección IV: Ejecución de la deuda alimentaria

Capítulo II: Procedimiento de divorcio, separación judicial o cese de la unión de hecho por mutuo consentimiento

Capítulo III: Procedimientos de adoptabilidad y de adopción

Sección I: Declaratoria de adoptabilidad

Sección II: Procedimiento de adopción

Capítulo IV: Procedimiento para la restitución internacional de personas menores de edad

Sección I: Generalidades

Sección II: Procedimientos preliminares

Sección III: Procedimiento

TÍTULO VI

La ejecución de las resoluciones

Capítulo I: Ejecución de Resoluciones Inscribibles

Capítulo II: Ejecución de derechos personalísimos

Capítulo III: Ejecución de derechos patrimoniales

Sección I: El derecho de ganancialidad

Sección II: Obligaciones de hacer, no hacer y entrega de cosas

Sección III: Obligaciones de pago

Subsección I: Sumas no determinadas

Subsección II: Cobro de sumas líquidas

LIBRO III

NORMAS DE DERECHO INTERNACIONAL PROCESAL DE FAMILIA

Título I: Competencia internacional

Capítulo I: Disposiciones Generales

Capítulo II: Disposiciones especiales

Título II: Ejecución de resoluciones extranjeras

CÓDIGO PROCESAL DE FAMILIA

ARTÍCULO 1.- Díctese el presente Código Procesal de Familia:

NORMAS PRELIMINARES OBJETO y PRINCIPIOS

Artículo 1.- Objeto

El presente Código establece la normativa procesal para hacer efectivas las normas jurídicas sustanciales relacionadas con la materia familiar.

Artículo 2.- Aplicación e Interpretación

Al aplicar, interpretar e integrar la norma procesal familiar, se deberá atender los principios rectores de este Código, el carácter instrumental de las normas procesales y los elementos propios del principio general de debido proceso; contextualizado en armonía con las necesidades y características propias de la materia familiar.

Las normas se aplicarán, interpretarán e integrarán en una forma sistemática, atendiendo al espíritu y finalidad de ellas; haciendo prevalecer los principios constitucionales y de los instrumentos internacionales, potenciando las normas y principios del derecho de fondo sobre los procesales y los de tipo personal sobre los patrimoniales.

Artículo 3.- Suficiencia normativa

En casos o situaciones no previstas en este Código, la autoridad competente integrará la normativa atendiendo a los principios sustanciales, procesales y demás fuentes de la materia familiar. La decisión deberá ser fundamentada y no se recurrirá a la aplicación de fuentes procesales de otras materias que resulten, por su naturaleza, incompatibles con los fines previstos en esta ley.

Artículo 4.- Preferencia del sistema procesal de oralidad

Salvo disposición en contrario los procedimientos que regula este Código se regirán por el sistema procesal de oralidad con aplicación del principio de privacidad dentro de él.

Artículo 5.- Principios procesales generales

Serán de aplicación general los principios de fácil acceso a la justicia, impulso procesal de oficio, celeridad procesal, buena fe, economía procesal y equilibrio procesal.

Artículo 6.- Principios propios del Derecho Procesal de Familia

Las normas contenidas en la presente ley tienen como centro a la persona humana y deben interpretarse conforme a los principios de equilibrio entre las partes, ausencia de contención, solución integral, abordaje interdisciplinario, búsqueda de equidad y equilibrio familiar, el mejor interés, protección, accesibilidad, diversidad, participación e intervenciones especiales y progresivas, preclusión flexible e inestimabilidad de las pretensiones.

Artículo 7.- Efectivización de derechos transversales

En los procesos de la jurisdicción familiar, las personas juzgadoras tendrán particular esmero en la efectivización de los derechos humanos de personas en situación de vulnerabilidad contenidos en la normativa nacional, internacional y sus principios.

Artículo 8.- Acceso a la justicia

En todo procedimiento familiar se deberá garantizar que las personas menores de edad, las personas con capacidades especiales y las personas en estado de vulnerabilidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás personas; incluso mediante ajustes de procedimiento adecuados a la edad y a la capacidad especial o vulnerabilidad que se presenta, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de tales personas como participaciones directas e indirectas, incluida la declaración como testigos en todos los procedimientos judiciales, en todas las etapas del proceso.

Artículo 9.- Audiencia previa de conciliación

En los procesos familiares, cuando proceda, se intentará la conciliación mediante una audiencia de conciliación previa al inicio del proceso. Esta etapa la llevará a cabo la autoridad judicial, quién también podrá remitir a las partes a los centros especializados. Lo acordado tendrá carácter y eficacia de cosa juzgada material o formal según el contenido del acuerdo. Podrán aplicarse otros mecanismos alternos de solución de conflictos regulados en la Ley de Resolución Alternativa de Conflictos o instrumentos internacionales, siempre que sean compatibles con los objetivos y fines de la materia familiar.

Se prohíbe la conciliación en aquellas situaciones en que se constaten relaciones desiguales de poder, salvo que se determine que lo acordado beneficie a la persona en situación de vulnerabilidad.

Artículo 10.- Auxilio a nivel interinstitucional

Los tribunales de justicia podrán coordinar con instituciones u organizaciones comunales, regionales o nacionales; la prestación de servicios cuando se requiera. Para estos fines se coordinará la elaboración de directrices, protocolos y directorios conjuntos.

Artículo 11.- Costo mínimo

La tramitación de asuntos contenidos en este Código o en leyes especiales relativas a la materia familiar, estará exenta del pago de tasas, impuestos y timbres de todo tipo.

En las actuaciones jurisdiccionales privará el principio de gratuidad en los casos y formas en que la autoridad judicial considere necesario en virtud de las condiciones socioeconómicas de quienes intervienen, todo según se regla en este Código.

**LIBRO PRIMERO
NORMAS GENERALES**

**TÍTULO I
Jurisdicción y competencia**

Capítulo I: Competencia Objetiva

Sección I: Competencia material

Artículo 12.- Improrrogabilidad de la competencia material

La competencia en razón de la materia es improrrogable, sin embargo, tratándose de asuntos que son conocidos en los juzgados de Niñez y Adolescencia, si la pretensión lo permite y durante el proceso la persona cuyo derecho se discute adquiere la mayoría de edad, las actuaciones verificadas con posterioridad mantendrán su validez, pero antes del dictado del fallo definitivo deberá resolverse sobre la competencia.

Sección II: Competencia ampliada

Artículo 13.- Deber de las partes de informar sobre otros procesos

Al presentarse cualquier tipo de proceso o al contestarse este, las partes tienen el deber de informar al despacho acerca de la existencia de cualquier otro litigio en el cual se discutan pretensiones sobre las relaciones familiares en que intervienen las mismas partes. Deben indicar el órgano jurisdiccional o administrativo en que se encuentre y los datos necesarios para su identificación. Esta obligación subsiste en cualquier estado del proceso.

Artículo 14.- Conocimiento concentrado

La autoridad judicial que conozca de un proceso resolutorio familiar acerca de algún asunto en que están involucradas las mismas partes, podrá conocer de todos aquellos litigios en los cuales se esté debatiendo pretensiones sobre esa misma situación familiar, incluidos los derechos alimentarios; salvo lo referido a procesos de protección cautelar y otros procesos especiales.

El proceso resolutorio familiar relacionado con la separación judicial, el divorcio, la nulidad del matrimonio o el reconocimiento de la unión de hecho atraerá a los demás procesos resolutivos referidos a pretensiones patrimoniales y personales de las mismas partes.

La ejecución de lo resuelto deberá hacerse en el despacho correspondiente de acuerdo con la materia.

Artículo 15.- Oportunidad temporal para acumular las pretensiones

Las acumulaciones en virtud de la competencia ampliada serán procedentes únicamente si se llevan a cabo hasta el inicio de la audiencia de prueba del proceso al cual se acumulan, momento en el que se deberán cumplir las garantías procesales a las partes así como el saneamiento debido. En este caso se podrá suspender la audiencia por el plazo de ley, a fin de que se corrijan los procedimientos y se continúe con la audiencia.

Sección III: Competencia territorial

Artículo 16.- Proceso Resolutorio Familiar

Será competente para conocer del proceso resolutorio familiar el juzgado de la residencia habitual o del domicilio de cualquiera de las partes a elección de la actora, sin posibilidad de prórroga de competencia.

Si la parte demandante residiere en el extranjero, el juzgado competente será el Juzgado de la residencia habitual o del domicilio de la contraria.

Artículo 17.- Diligencias de Protección Cautelar

En los procedimientos de protección cautelar será competente el Juzgado de la residencia habitual de la persona beneficiaria; sin embargo ante casos de urgencias e imposibilidad de acudir al despacho competente según el territorio, se puede plantear la respectiva petición en cualquier despacho competente por la materia, el cual establecerá las medidas provisionales correspondientes y remitirá el expediente al despacho correspondiente para que en forma inmediata continúe con los procedimientos.

Cuando exista una denuncia penal relacionada con los hechos de violencia intrafamiliar, el juzgado de la materia penal podrá ordenar, con independencia de la cautela penal que considere, las medidas de protección de las establecidas en la Ley contra la Violencia Doméstica y pasar luego al despacho de Violencia Doméstica correspondiente mediante un testimonio de piezas, para continuar los procedimientos.

Artículo 18.- Trámites de petición unilateral, adopciones y divorcio, separación judicial o cese de la unión de hecho por mutuo consentimiento

La residencia habitual o el domicilio de la persona a favor de quien se promueven las diligencias determinará la competencia en los asuntos de petición unilateral o de adopción; si no existiera residencia habitual o domicilio para esa persona, la competencia la definirá el lugar de la residencia habitual o domicilio de la persona que promueve dicho trámite.

Tratándose de diligencias de divorcio, separación judicial o cese de la unión de hecho por mutuo consentimiento, será competente el despacho de la residencia habitual o el domicilio de cualquiera de los cónyuges o convivientes.

Artículo 19.- Procesos especiales en Pensión Alimentaria

Serán competentes para conocer del proceso de fijación de cuota de pensión alimentaria el despacho de la residencia habitual o domicilio de la parte actora o de la parte demandada a elección de la primera en el momento de establecer la demanda. La parte actora que cambie de residencia habitual o domicilio podrá pedir la remisión del expediente a la autoridad competente del nuevo lugar pero hasta la firmeza de la sentencia de primera instancia. Si no lo pidiere y la parte demandada no tiene su domicilio o residencia habitual en ese territorio, el despacho lo remitirá a aquel que corresponda, según domicilio o residencia habitual de la parte actora o demandada a elección de la primera y dentro del plazo de tres días que se otorgarán para estos efectos. Si no se pronuncia en ese plazo el tribunal lo remitirá al de su nueva residencia.

Los procesos de modificación o extinción de la cuota de alimentos o de inclusión de nuevos beneficiarios se tramitará en el despacho de competencia del principal a ese momento

Artículo 20.- Pretensiones de ejecución de acuerdos y modificaciones de sentencias

Cuando se pretenda la ejecución de un acuerdo sobre la guarda o custodia de una persona o de un régimen de interrelación familiar que hubiere sido homologado por un tribunal que no tiene competencia material para ejecutarlo, será competente el de la residencia actual de la persona a cuyo favor se pretende el derecho. En tal caso, la parte que pretende la ejecución aportará copia certificada del acuerdo homologado.

Si se trata de la modificación del fallo sobre la guarda o custodia o de un régimen de interrelación familiar, será competente para conocer dicha pretensión el juzgado de la residencia habitual o domicilio de la persona a cuyo favor se verificó el fallo. En tal caso, esta presentará copia certificada de la sentencia o del acuerdo homologado que pretende modificar. Una vez resuelto el asunto, se remitirá oficio al juzgado que dictó la sentencia modificada, quien deberá incorporarla al expediente. En caso de ser necesario para la tramitación del proceso de modificación, se podrá pedir al despacho del fallo original enviar el expediente al nuevo despacho en carácter de vista, debiendo devolverse junto al oficio indicado una vez terminado el proceso de modificación.

Sección IV: Generalidades sobre declaratoria de competencia

Artículo 21.- Declaratoria de falta de Competencia

La falta de competencia territorial se declarará de oficio cuando no se esté en los presupuestos de la subsección anterior, pero deberá hacerse antes de citar a la primera audiencia en el respectivo proceso.

Interpuesta una excepción de falta de competencia en razón del territorio, se resolverá en forma previa a la convocatoria a esa primera audiencia del proceso.

Cuando no exista emplazamiento escrito y la excepción se oponga en la audiencia al contestar la demanda, se resolverá en forma inmediata.

Artículo 22.- Trámite para plantear el conflicto de competencia

La autoridad judicial que reciba el proceso en virtud de la declaratoria de oficio o por acogerse la excepción de falta de competencia mediante resolución que no fue apelada, podrá plantear el conflicto de competencia dentro de los tres días posteriores de recibido el expediente.

Capítulo II: Competencia Subjetiva

Artículo 23.- Causas de impedimento

Serán causales de impedimento para las personas juzgadoras en cualquier tipo de proceso familiar:

- 1.- Tener un interés directo en el resultado del proceso.
- 2.- Tener o haber tenido relación de matrimonio, convivencia, noviazgo, ascendencia, descendencia o parentesco colateral hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad de una de las partes o intervinientes, o que uno de estos familiares mantenga un interés directo en el proceso.

- 3.- Haber sido quién juzga o uno de sus parientes en los grados del inciso anterior, persona abogada, tutora, curadora, apoderada, representante o administradora de alguna de las partes; o alguno de los parientes mantenga una relación comercial de persona acreedora, deudora, fiadora o fiada con alguna de las partes o intervinientes.
- 4.- Cuando la persona juzgadora o algunos de sus parientes indicados en el segundo inciso, sea la parte contraria de algunas de las partes o intervinientes en otro proceso judicial activo o terminado en los dos años anteriores, salvo que este hubiere sido instaurado con el único propósito de inhabilitarlo.
- 5.- Cuando deba fallar en grado, judicial o administrativamente, acerca de una resolución dictada por ella misma o por alguna de las personas con relaciones y parentescos en los grados indicados en el inciso segundo.
- 6.- Cuando la persona juzgadora o sus relacionados y parientes indicados en el inciso segundo es compañera de oficina o de trabajo de alguna de las partes o intervinientes o haberlo sido en el último año.
- 7.- Ser quién juzga o los relacionados y parientes indicados en el inciso segundo, parte o interviniente en un proceso en el que figure como persona juzgadora una parte o interviniente del proceso de su conocimiento
- 8.- Habérsele impuesto alguna corrección disciplinaria en el mismo proceso, por queja presentada por una de las partes.
- 9.- Haber manifestado opinión a favor o en contra de alguna de las partes o intervinientes. Las opiniones expuestas o los informes rendidos que no se refieran al caso concreto, como aquellas dadas con carácter doctrinario, académica o en virtud de requerimientos de los otros poderes o en otros asuntos de que conozcan o hayan conocido de acuerdo con la ley, no configuran esta casual.
- 10.- Haber manifestado opinión a favor o en contra de alguna de las partes o intervinientes en un proceso de su conocimiento y que se encuentre tramitando.
- 11.- Haber sido llamado la persona juzgadora o alguno de los parientes enunciados en el inciso segundo de este artículo, para brindar peritaje, prueba científica o como declarante en el mismo proceso.
- 12.- Haber participado en la conducta activa u omisiva objeto del proceso

Artículo 24.- Procedimiento de inhabilitación

La autoridad judicial que se encuentre dentro de alguna de las causales del artículo anterior, deberá inhabilitarse de oficio mediante resolución, debiendo enviar el proceso a la persona juzgadora que corresponda, quien lo continuará; salvo que, de estimar infundada la inhabilitación, plantear el conflicto ante el superior común de ambos.

En tribunales colegiados, la inhabilitación de alguna de las personas integrantes la resolverán las otras personas que integran el tribunal; pero si la causal los comprendiera a todas las personas que lo integran, decidirá el tribunal sustituto que corresponda.

Artículo 25.- Procedimiento de recusación

Podrá solicitar la recusación, por las causales establecidas en el artículo tras anterior, la parte con derecho a recusar, el Patronato Nacional de la Infancia en los asuntos en que figure como interventor y cualquier otra persona que figura como interviniente. Si después del señalamiento para audiencia y antes de su celebración surgiere alguna causal, deberá interponerse antes del inicio de la audiencia. Puede formularse con posterioridad a la audiencia de prueba y antes de sentencia definitiva, siempre que se trate de causas no conocidas o sobrevinientes a la finalización de esa audiencia.

En la audiencia deberá formularse verbalmente y en los demás casos por escrito, pero en ambos supuestos la parte indicará la causa y los motivos de su gestión, acompañando toda la prueba.

Una vez interpuesta la recusación, si es aceptada por la persona juzgadora, se inhabilitará y pasará a quien deba suplirlo. Si niega la recusación dictará resolución motivada y ordenará pasar el proceso a quien corresponda, quien resolverá, sin más trámite.

Cuando la recusación se formule en la audiencia, se resolverá de inmediato con intervención de otra de las personas juzgadoras de ese despacho para la resolución en caso de negación de la causal. Rechazada la recusación, se continuará con el desarrollo de la audiencia. Cuando se admita, se procederá a la sustitución y, de ser posible, se continuará con la audiencia en ese mismo momento.

Artículo 26.- Improcedencia de recusación

Se rechazará de plano cualquier gestión para ello, en los siguientes casos:

- 1.- Cuando no se sustente en una de las causales expresamente previstas por ley.

- 2.- En procesos o actos de mera ejecución.
- 3.- Cuando la parte interesada en la recusación haya intervenido antes en el proceso teniendo conocimiento de la causal.

Artículo 27.- Efectos de la recusación

La solicitud de recusación no suspenderá la práctica de los actos procesales y estos serán válidos aunque se le declare fundada la recusación; salvo que se lesione el principio de inmediación.

Artículo 28.- Oportunidad para resolver

La inhibitoria y la recusación deberán quedar resueltas antes de iniciar la fase de conclusiones en la audiencia; salvo lo dispuesto en la parte final del párrafo primero del artículo 25, en cuyo caso se resolverá inmediatamente.

Artículo 29.- Perpetuidad de la competencia subjetiva

Cuando por inhibitoria o recusación una persona juzgadora haya sido reemplazada, el expediente regresará al despacho inicial si la persona inhibida o recusada haya dejado de ser titular y el asunto no inicia aún la fase de audiencia de prueba.

Artículo 30.- Recusación de personas peritas y otras de auxilio judicial

Las personas peritas designadas por acuerdo entre partes no podrán ser recusadas, salvo por causas sobrevinientes o ignoradas por las partes al momento de la escogencia.

Para aquellas no designadas de común acuerdo, las causas de impedimento les serán aplicables en cuanto fueren conducentes. Además, constituyen causales de separación la falta de idoneidad o pericia y haber vertido sobre el mismo asunto un dictamen contrario a una de las partes. La recusación de ellas se formulará por escrito si fuere antes de la audiencia y oral si fuere dentro de la audiencia; en ambos casos se escuchará a la parte contraria y deberá resolverse al iniciar la audiencia.

El presente régimen será aplicable, en lo pertinente, a las demás personas funcionarias judiciales.

TÍTULO II
Los sujetos procesales

Capítulo I: La persona juzgadora

Sección I: Poderes y deberes

Artículo 31.- Deberes

Son deberes de quienes administran justicia:

- 1.- Conducir el proceso manteniendo el equilibrio procesal; sancionar el fraude procesal e imponer las medidas de saneamiento para evitar la indefensión de las partes.
- 2.- Dictar las medidas de protección necesarias para evitar la violación de los derechos de las personas en estado de vulnerabilidad, tales como personas menores de edad, con capacidades especiales, adultos mayores, personas en situación de riesgo de violencia intrafamiliar o en desbalance de poder u otros, todo de conformidad con los principios que engloban el debido proceso y los demás enunciados en las normas preliminares de este Código.
- 3.- Fomentar, en los casos procedentes, tanto en la etapa previa como en cualquier otra del proceso, la conciliación o mediación, dentro de un diálogo constructivo y no adversarial.
- 4.- Resolver cada uno de los asuntos que se le presentan a su conocimiento, motivando las resoluciones judiciales en concordancia con el cuadro fáctico que se le presenta, la prueba evacuada, la normativa sustancial y procesal nacional e internacional aplicable. Esta resolución debe llevarla a cabo teniendo en consideración los principios fundamentales de la materia, el interés de las partes, la aplicación del derecho y la visión de una pronta y cumplida ejecución de lo resuelto.
- 5.- Rechazar en forma fundamentada cualquier gestión o petición totalmente improcedente o que tenga signos evidentes de pretender atrasos en el proceso.
- 6.- Ejercer el poder ordenatorio que la ley le otorga cuando considere que las partes y demás intervinientes han actuado en contra de los principios y deberes que rigen su actuación, incluyendo el abuso y el fraude procesal. En estos supuestos deberá hacerse la comunicación respectiva a quién corresponda.

- 7.- Integrar el procedimiento en aquellos casos en los cuales no hay norma para el caso concreto, respetando las garantías del debido proceso, el ejercicio legítimo de la tutela judicial y en general los principios que rigen la materia.
- 8.- Dirigirse a las partes con respeto, con un lenguaje que elimine las actuaciones despectivas, mortificantes o degradantes para las partes y personas usuarias de sus servicios; manteniendo el comportamiento en su condición en la judicatura y buscando siempre que las partes no generen mayor intensidad en el conflicto.
- 9.- Mantener la privacidad del contenido del expediente y de los asuntos que son tratados, discutidos y acordados en las audiencias respectivas.
- 10.- Informar adecuadamente a las partes y personas usuarias, en cada audiencia, de la finalidad de esta, de los temas a tratar y de los derechos y deberes que tienen dentro del proceso.
- 11.- En la dirección de las audiencias, vigilará el orden y respeto entre quienes participan, pudiendo retirar a cualquiera en caso necesario.
- 12.- Cuando la pretensión y el proceso lo permita, escuchar a las partes en conflicto y a aquellas personas cuyos derechos se está discutiendo en el proceso, a fin de conocer la opinión de ellas.
- 13.- Ordenar, cuando dentro de un proceso familiar se detecte su necesidad, la apertura de cualquier proceso de protección para solucionar una problemática que atenta contra el desarrollo integral y digno de una persona en estado de vulnerabilidad.
- 14.- Aplicar los deberes y facultades que le sean propios en materia probatoria, en concordancia con el conflicto que se presenta, ejerciendo en debida forma la iniciativa probatoria y la admisión o no de los elementos probatorios presentados por partes e intervinientes de acuerdo con criterios de utilidad y pertinencia; a fin de llegar a una decisión conforme a derecho y equidad.
- 15.- Desarrollar los mecanismos establecidos y realizar las integraciones de procedimientos concordantes a fin de que la ejecución de los fallos sea efectiva y que las partes puedan ejercer en forma real los derechos que le fueron otorgados en sentencia.

Artículo 32.- Potestades

Serán poderes de la persona juzgadora, en uso racional, proporcional y de acuerdo con el conflicto o asunto que se le presenta, los siguientes:

- 1.- Recurrir a las personas auxiliares de la justicia a fin de ampliar o verificar el ámbito fáctico que le es presentado en busca de la tutela efectiva.
- 2.- Ordenar, en forma fundamentada, cualquier medio probatorio que sea necesario para resolver con acierto el asunto sometido a su conocimiento.
- 3.- Tratándose de asuntos relacionados con derechos personales, podrá decidir, incluso de oficio, la ejecución inmediata de las resoluciones judiciales, respetando siempre lo acordado.
4. Abstenerse de ejecutar las resoluciones en procesos que involucran protección de derechos de personas en estado de vulnerabilidad, tales como cuidado personal, interrelación familiar y otros, cuando haya transcurrido un tiempo prolongado desde su dictado en los casos en los cuales la situación fáctica posterior no sea acorde con la del momento de la resolución.
- 5.- Disponer la ejecución de resoluciones no firmes cuando estén de por medio derechos de personas en estado de vulnerabilidad.

Capítulo II: Partes e intervinientes

Sección I: Pretensión y legitimación

Artículo 33.- Partes legítimas

Parte legítima activa es aquella que alega tener determinada relación jurídica con la pretensión y parte legítima pasiva es aquella a la cual se le atribuye una determinada relación jurídica con la pretensión.

La legitimación sustancial deberá concurrir para acoger determinada pretensión en sentencia.

Artículo 34.- Defensa de derechos ajenos, colectivos, difusos y supraindividuales

Tendrán legitimación para iniciar y defender derechos humanos de personas o grupos en estado de vulnerabilidad, derechos difusos, colectivos y supraindividuales el Patronato Nacional de la Infancia, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Consejo Nacional de Rehabilitación y Enseñanza Especial, el Consejo Nacional para el Adulto Mayor, la Defensoría de los Habitantes, la Dirección General de Adaptación Social, la Dirección General de Migración y Extranjería, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Procuraduría General de la República, demás entes estatales y las organizaciones no gubernamentales que trabajan con estos

grupos sociales. Asimismo deberán entenderse con esta legitimación quienes ostentan el depósito, guarda de hecho o la curatela de aquellas personas.

Artículo 35.- Sucesión procesal

En caso de muerte de una de las partes y cuando dicha situación no ponga fin al proceso, se continuará con el albaceazgo de la respectiva sucesión.

En caso de disolución de una persona jurídica que sea parte de un proceso, se continuará con su liquidador.

Sección II: Intervinientes del proceso

Subsección I: Familiares y otros terceros

Artículo 36.- Llamado de intervinientes

Podrán intervenir en el proceso todas aquellas personas que, sin pretender derecho alguno para sí, tengan relación con el vínculo familiar y cuya participación permita una mejor decisión del conflicto.

Lo anterior procederá a petición de parte o por iniciativa de quién vaya a intervenir. Dicha intervención no necesita patrocinio letrado para sus actuaciones.

Artículo 37.- Facultades y obligaciones dentro del proceso

Estas intervenciones tendrán la prerrogativa de participación activa en el proceso, ofreciendo prueba, coadyuvando en el litigio, proponiendo soluciones al conflicto, asistiendo a las audiencias programadas, recurrir las resoluciones en las formas previstas siempre que su agravio se derive de una protección a favor de las personas en estado de vulnerabilidad.

Quienes figuran como tales estarán obligados a cumplir con las normas procesales, someterse al régimen ordenatorio del tribunal y colaborar con el proceso y la ejecución de las resoluciones.

Subsección II: Terceros institucionales

Artículo 38.- Actuación del Patronato Nacional de la Infancia

En aquellos casos en los cuales el Patronato Nacional de la Infancia no participe como parte en el proceso y se trate de litigios o asuntos en los cuales está de por medio la discusión de derechos de personas menores de edad, la autoridad judicial está en la obligación de darle intervención en el proceso; para lo cual podrá apersonarse por medio de representación legal con personería acreditada y en su participación podrá ofrecer cualquier tipo de prueba en beneficio de las personas menores de edad, coadyuvando en el litigio con la parte

que representa a dichas personas, proponiendo soluciones integrales al conflicto; podrá asistir a las audiencias señaladas y recurrir las resoluciones en las formas previstas siempre que su agravio se derive de la protección de personas menores de edad.

Quien se apersona en su representación se someterá al régimen ordenatorio y disciplinario del tribunal, además deberá colaborar con la autoridad judicial en cuanto al conocimiento que tenga la institución del conflicto familiar u otra ayuda que pueda brindar para esclarecerlo.

Artículo 39.- Otras instituciones

Con las mismas capacidades, representaciones, atribuciones y obligaciones dadas al Patronato Nacional del Infancia, la autoridad judicial puede llamar a participar en el proceso, a petición de parte o de oficio, y en calidad de interviniente, a cualquier institución pública o privada que tenga como función la protección de sectores vulnerabilizados de la población. Si se trata de personas con discapacidad la intervención será para el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial y en casos de personas adultas mayores lo será para el Consejo Nacional de Protección al Adulto Mayor. Estas instituciones tienen la obligación de servicio y colaboración en la solución del conflicto y en su ejecución.

Sección III: Capacidad y representación

Subsección I: Capacidad procesal

Artículo 40.- Reconocimiento de capacidad procesal

En los procesos de las jurisdicciones familiares se presume la capacidad procesal de toda persona que es parte. Aquellas personas que por disposición de ley o por su condición personal no tengan capacidad procesal y las personas jurídicas actuarán por medio de legítima representación. Salvo motivos de imposibilidad, inexistencia o por ser innecesaria esa representación legítima, actuarán mediante representación nombrada a tal efecto.

Subsección II: Representación procesal de menores de edad y de personas con discapacidad

Artículo 41.- Representación de personas menores de edad

Se reconoce a todas las personas mayores de doce años el ejercicio personal y plena de la capacidad procesal para el trámite de los procesos establecidos en este Código, sin perjuicio de que prefieran que sus padres u otras personas representantes actúen en su nombre.

Tratándose de personas menores de doce años de edad, la autoridad judicial llamará a quien ejerza la responsabilidad parental o bien, en su caso, a

quién asigne el Patronato Nacional de la Infancia y, si esta persona no se encontrare disponible en ese momento, podrá nombrársele representación provisional hasta tanto el ente mencionado apersona a la persona elegida. No obstante, estas personas podrán ejercer el derecho a ser oídas y participar activamente de manera progresiva y conforme a su capacidad volitiva, según la ley y bajo la apreciación del tribunal; teniendo derecho de acudir personalmente ante este y a que se les atienda en forma personalizada y conforme a sus características etarias, debiendo las personas funcionarias judiciales velar por la efectivización de los derechos de las personas menores de edad.

Excepcionalmente, las personas menores de doce años podrán accionar en forma personal. En este caso, para el inicio del proceso el tribunal deberá contar con un informe psicológico que acredite que la persona menor de edad tiene la capacidad para ejercer dicha acción.

Artículo 42.- Asistencia y patrocinio letrado gratuito

El Estado garantizará la asistencia y el patrocinio letrado gratuito a las personas menores de edad que carezcan de medios económicos suficientes.

Artículo 43.- Garantías mínimas en el procedimiento para personas menores de edad

Se debe garantizar a toda persona menor de edad todos los derechos contemplados en la Constitución Política, la Convención sobre los Derechos del Niño, otros tratados internacionales y las leyes de la materia.

Artículo 44.- Garantía de derechos y principios a personas con discapacidad y personas adultas mayores

En los tribunales de materia familiar se han de garantizar los derechos y principios contenidos en la Constitución Política, los instrumentos internacionales y las leyes de la materia atinentes a las personas con capacidades especiales, entre estos:

- 1.- El respeto a su condición de persona en igualdad de oportunidades jurídicas en relación con las demás personas.
- 2.- Respeto de su identidad, dignidad, autonomía individual, libertad de tomar decisiones propias e independencia.
- 3.- La no discriminación.
- 4.- La accesibilidad al sistema judicial o administrativo.
- 5.- El respeto a la evolución de las facultades de las personas con capacidades especiales.

Para tal efecto, el Poder Judicial, el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, el Consejo Nacional de Protección del Adulto Mayor y demás

instituciones intervinientes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar a estas el apoyo particular que requieran en el ejercicio de sus derechos.

Las personas declaradas en estado de interdicción que actúen como parte actora del proceso, lo harán por medio de la persona curadora nombrada en el respectivo procedimiento; si no existe dicha condición de declaratoria de interdicción, y si se considera innecesario o improcedente la existencia de una curatela definitiva, se procederá con el nombramiento de un representante para el proceso específico, para lo cual antes de iniciar el mismo las personas interesadas deberán proponerlos al despacho competente del proceso a entablar.

Subsección III: Curatela procesal

Artículo 45.- Procedencia

En los procesos que así lo requieran, cuando la parte demandada carezca de representante legal, procederá el nombramiento de una persona que actúe como curadora procesal:

- 1.- Si no ha sido posible hallarla para que asuma el proceso.
- 2.- Si se trata de personas que por tener limitaciones en su capacidad mental, física y sociocultural o se trate de personas en estado de vulnerabilidad, a quienes les es imposible hacer valer sus derechos por sí solas.
- 3.- En los casos de una persona jurídica que careciere de representante legítimo en tanto se convoca al respectivo procedimiento de nombramiento de representante dentro de la estructura de la persona jurídica.
- 4.- Existiere incompatibilidad o intereses contrapuestos entre representante y representado.

Artículo 46.- Forma de nombramiento

Verificado lo anterior, mediante los elementos probatorios que sean necesarios a consideración del tribunal, se realizará su nombramiento de la lista de personas curadoras que al efecto tiene el Poder Judicial. Los gastos de esa persona correrán por cuenta de la parte actora para lo cual deben depositarse los respectivos honorarios provisionales antes del nombramiento, salvo aquellos casos en que la parte actora o promovente sea una institución pública, esté litigando con patrocinio de la Defensa Pública, Consultorios Jurídicos o en casos en que se estime así por parte de la autoridad judicial, en cuyo caso quedarán a cargo del Poder Judicial.

Artículo 47.- Pago de honorarios

El pago de los honorarios establecidos estará supeditado al efectivo cumplimiento del cargo encomendado, por lo cual la persona curadora procesal estará obligada a apersonarse a todas las audiencias señaladas y a cumplir con los mínimos apersonamientos de contestación de demanda y otro tipo de intervenciones, pudiendo la autoridad judicial resolver una cuota menor de honorarios a la fijada inicialmente si considera que no se ha cumplido a cabalidad el cargo.

Subsección IV: El arraigo

Artículo 48.- Justificación

Cuando una persona no tiene representación legal acreditada en el Registro de Personas del Registro Público o teniéndolo, se trata de pretensiones de derechos indisponibles y existe sospecha de que quiere evadir una demanda, ya sea porque se pretende ocultar o tiene prevista la salida del país, se puede solicitar el arraigo a la autoridad judicial competente para el proceso que se quiere entablar.

Artículo 49.- Procedimiento

Se apercibirá a la persona arraigada para que en el plazo de cinco días nombre una representación con las suficientes facultades para asumir el proceso e informe al despacho con indicación de calidades y forma para sus notificaciones. En caso de no cumplirse, el proceso seguirá sin su intervención hasta el final o hasta que lo tome en el estado que se encuentre.

Por apersonada la representación o la persona apoderada con facultades suficientes, o transcurridos los cinco días señalados, la parte actora tendrá un máximo de quince días para presentar la demanda, bajo sanción de pago de daños y perjuicios en que se incurrió.

Subsección V: Patrocinio letrado y suplencias

Artículo 50.- Excepción al patrocinio Letrado

Toda persona deberá comparecer al proceso con patrocinio letrado, excepto en los siguientes procesos:

- 1.- Resolutivos familiares que no producen cosa juzgada material.
- 2.- Petición unilateral.
- 3.- Relativos a la materia de pensiones alimentarias.
- 4.- Protección cautelar.
- 5.- Ejecución de fallos de asuntos que no producen cosa juzgada material.

Artículo 51.- Facultades de los profesionales en abogacía y personas directora judiciales y suplentes

La persona designada para actuar en la dirección legal del proceso tendrá las facultades dadas por un poder especial judicial, salvo cuando se trate de gestiones de petición de terminación del proceso, para la conciliación o actos que impliquen la disposición de derechos, para lo cual se requiere poder especialísimo.

La persona designada podrá nombrar, con autorización expresa de la parte, otras personas abogadas suplentes para que puedan cumplir los mismos deberes y ejercer sus derechos en el proceso. Por ningún motivo esta suplencia podrá cobrar honorarios a cargo de las partes, salvo que hubieran actuado en el proceso durante un periodo de tiempo prolongado que fuera mayor al de la persona titular, pero en ese caso los honorarios se rebajarán de ella.

Artículo 52.- Deberes de la persona abogada directora

La persona designada como abogada directora apersonada o quién le supla tendrá, dentro del proceso, los siguientes deberes:

- 1.- Contribuir a la conducción del proceso, evitando el fraude, actuando con buena fe, lealtad y probidad, al igual que evitando las nulidades procesales.
- 2.- Fomentar en los casos en que proceda, en la etapa previa o en cualquier fase del proceso, la conciliación o mediación, brindando a la parte que representa un diálogo constructivo y no adversarial para la solución del conflicto.
- 3.- Informar en forma adecuada a la parte sobre el estado del proceso, el significado de cada audiencia y de los derechos y deberes que esta tiene dentro del proceso.
- 4.- Dirigirse a las autoridades judiciales y a las otras partes e intervinientes con el respeto debido, con un lenguaje que elimine las actuaciones despectivas, mortificantes o degradantes; manteniendo el comportamiento debido y buscando siempre no generar mayor conflicto.
- 5.- Motivar en forma debida las gestiones verbales o escritas que presente cuando así se requiera.
- 6.- Facilitar a la autoridad judicial la obtención de los elementos probatorios y aquellos documentos que se requieran para el proceso.
- 7.- Asistir a las audiencias judiciales.

- 8.- Contribuir a la ejecución de los fallos, aunque sea adverso a los intereses de su representación.

Artículo 53.- Sustitución de personas abogadas directoras

Las partes podrán sustituir a las personas abogadas designadas para el proceso o a cualquiera de sus suplentes en todo momento y deben hacerlo saber a la autoridad judicial en cualquiera de las audiencias o por escrito. El tribunal pondrá en conocimiento de la persona suplida y le prevendrá la liquidación de honorarios en el caso que procediere.

Artículo 54.- Omisión de firma de las personas abogadas directoras

Cuando una gestión escrita o digital dirigida a un órgano judicial deba tener autenticación profesional y se presenta sin la firma o el sello en su caso, el despacho deberá advertir a la parte que, dentro de los tres días siguientes a la notificación de la prevención, debe subsanar la omisión en el despacho. Si no se hiciera en el plazo indicado, la gestión no surtirá efecto alguno.

Artículo 55.- Poder especialísimo

En los casos en que sea necesario poder especialísimo, deberá ser otorgado en escritura pública y se consignarán los actos para los cuales se da la autorización dentro del proceso; en caso de conciliación o mediación se deberá especificar en forma concreta las cláusulas exactas del eventual arreglo, todo bajo pena de nulidad del acuerdo que se tome. El poder podrá ser revocado en cualquier estado mediante la misma forma de su otorgamiento, salvo que sea en forma oral en la audiencia, para lo cual no se exigirá ninguna formalidad.

Subsección VI: Intervención de la Defensa Pública

Artículo 56.- Casos en que actúa

En todo proceso familiar, quienes no cuenten con los recursos económicos para contratar patrocinio letrado podrán solicitar asistencia letrada a la Defensa Pública del Poder Judicial. En cualquier momento en que el juzgado detecte que la parte tiene los medios económicos para contar con ese tipo de asistencia le prevendrá que en el plazo de cinco días la asuma por su cuenta y cancele el monto de honorarios por la asistencia recibida; sin perjuicio de que pueda continuar con esa asesoría y se realice el cobro de honorarios que correspondan una vez finalizado el proceso.

Artículo 57.- Funciones que se asumen

La defensa o asistencia gratuita asumirá las mismas funciones, deberes y derechos de quienes actúan como personas abogadas directoras.

Sección IV: Pluralidad de sujetos

Subsección I: Acción conjunta

Artículo 58.- Acción conjunta opcional

Conforme con el principio del abordaje integral, en caso de que se comparta causa u objeto u algún otro aspecto del asunto familiar que lo justifique, dos personas o más pueden litigar en forma conjunta facultativamente.

Artículo 59.- Acción conjunta necesaria

Cuando la intervención de otras personas en el proceso como partes sea indispensable para una sentencia útil, por la naturaleza de la relación jurídica sustancial, cuando la sentencia a dictarse pudiera afectarlas, ó bien porque así lo dispone la ley, las partes deberán demandar o ser demandadas en el mismo proceso; de no ser así, el despacho ordenará, dentro de ocho días, la conjunta integración bajo el apercibimiento de archivar la demanda o las pretensiones de la parte demandada. Si quién deba integrarse es una persona jurídica cuya representación la tiene una de las partes del proceso, esa integración se podrá hacer hasta en la propia audiencia en donde se deduce la demanda, contestación y pretensiones del contrario.

Subsección II: Terceros con pretensiones excluyentes

Artículo 60.- Intervención de terceros en pretensiones principales excluyentes

Si está en curso un proceso resolutivo familiar y un tercero pretende para sí algún derecho que está en discusión, deberá apersonarse antes del inicio de la audiencia del proceso para demandar a ambas partes, con todas las facultades y deberes de estas. En el fallo se resolverá lo que corresponda.

TÍTULO III

Las actuaciones procesales

Capítulo I: Generalidades

Sección I: Idioma y lenguaje

Artículo 61.- Obligatoriedad del idioma español

Todas las actuaciones procesales, verbales o escritas, deberán llevarse a cabo en el idioma español, salvo en aquellas actuaciones verbales cuando quienes intervienen hablan una misma lengua indígena nacional.

Los documentos o informes aportados al proceso en idioma distinto al español deberán contar con la debida traducción oficial, salvo casos en los cuales la normativa internacional prescinda de la traducción oficial. El despacho podrá admitir u ordenar aquellos documentos o informes de traducción privada cuando las circunstancias así lo ameritan. Podrá ordenarse la traducción a cargo del Poder Judicial en casos excepcionales o cuando la parte interesada carezca de recursos para sufragarlo.

Artículo 62.- Sobre el lenguaje a utilizar

En las audiencias judiciales será obligatorio utilizar un lenguaje sencillo, claro, informal y de fácil entendimiento, evitando el lenguaje adversarial.

Sección II: Privacidad de las actuaciones

Artículo 63.- Privacidad de la documentación

Todos los escritos, documentos e informes se considerarán privados. Se podrá custodiar en forma reservada en el archivo del despacho, de lo cual se dejará constancia en el expediente. Se podrán hacer publicaciones relacionadas con el expediente garantizando la privacidad de los litigantes. Por ningún motivo se ordenará la publicación del expediente por medios electrónicos que no aseguren esta privacidad de las personas intervinientes.

Artículo 64.- Préstamo de expedientes judiciales

Los expedientes judiciales serán de conocimiento únicamente de las partes y quienes las representen o dirijan profesionalmente; por ningún motivo los despachos judiciales podrán facilitar la sumaria a otras personas ajenas al proceso, salvo autorización expresa y por escrito de la parte o su representante legal o que el despacho lo autorice, debiendo constar en el expediente si dicho préstamo conlleva reproducción del mismo con firma de la persona autorizada.

Sección III: Tiempo y lugar para las actuaciones

Artículo 65.- Amplitud de horario

Para llevar a cabo las actuaciones judiciales todos los días y horas son hábiles.

Artículo 66.- Lugar de actuaciones

Las actuaciones se verificarán en la sede del despacho. En casos especiales, atendiendo el estado de vulnerabilidad de las personas intervinientes o la naturaleza de la diligencia, se podrán llevar a cabo fuera de la sede judicial.

En tales casos el Poder Judicial deberá cubrir los gastos que ello implique, salvo que la parte esté en condiciones económicas de asumir el costo de la diligencia.

Artículo 67.- Inicio de las actuaciones judiciales

Las actuaciones judiciales previamente señaladas deberán iniciar a la hora indicada, salvo situaciones excepcionales a criterio de quién juzga. Si todas las partes concurren con anterioridad a la hora señalada y expresan conformidad con el inicio adelantado de la diligencia, se podrá aceptar si la agenda del despacho lo permite. En ambos supuestos se dejará constancia en el expediente.

Sección IV: Medios tecnológicos

Artículo 68.- Documentación de actuaciones

Las actuaciones judiciales podrán ser documentadas por los medios tecnológicos que disponga el despacho.

Las partes podrán solicitar al despacho copia electrónica de esa documentación siempre y cuando existan condiciones para asegurar la privacidad.

Artículo 69.- Uso de medios tecnológicos para obtener información

En cualquier estado del proceso, el despacho puede obtener información de interés para el proceso por medios electrónicos, si se tratara de elementos de prueba, deberá establecerse en cada caso el procedimiento necesario de garantía del debido proceso según las normas probatorias de este Código.

Sección V: Plazos judiciales

Artículo 70.- Determinación del plazo

Los actos procesales deben cumplirse dentro de los plazos establecidos en este Código. Cuando no estén expresamente establecidos, la autoridad judicial podrá establecerlos tomando en cuenta la naturaleza del proceso, la importancia de estos dentro de la relación familiar, la calidad de la actuación que se pretende, las condiciones personales de quienes litigan y la dependencia de esa condición con la actuación, siempre y cuando se respeten los principios del debido proceso.

Artículo 71.- Improrrogabilidad de los plazos

A excepción de los casos que la presente normativa así lo disponga en forma expresa, todos los plazos judiciales que se otorguen para el cumplimiento de una determinada actividad procesal serán improrrogables. En caso de que las partes pretendan prorrogarlo por haber acontecido alguna situación que lo amerite, la petición debe hacerse antes del vencimiento, salvo que ocurran situaciones que

lo hagan imposible. El despacho podrá disponer la prórroga cuando ocurran eventos de conocimiento general que hagan presumir la imposibilidad de que las partes cumplan lo ordenado dentro del plazo ordinario, o que se trate de situaciones especiales de personas en estado de vulnerabilidad.

Artículo 72.- Renuncia, restricción y ampliación de plazos

Los plazos se pueden renunciar, ampliar o restringir cuando la ley así lo permita o el despacho considere procedentes las razones invocadas por las partes. En todo caso, se deben proteger los derechos sustanciales y procesales de personas en estado de vulnerabilidad.

Artículo 73.- Cómputo de los plazos

Todos los plazos, salvo excepciones expresas en este Código, empezarán a correr al día siguiente hábil a aquel en que se hubiere notificado a todas las partes. Cuando el plazo es de veinticuatro horas se entenderá reducido a las horas hábiles del despacho correspondiente del día siguiente. Si se trata de días, se contarán únicamente los que fueren hábiles y si fueren por meses o años, se contarán de fecha a fecha.

Si el día de finalización no existe en el calendario, el plazo se considerará cumplido el último día del mes. Si este plazo finaliza en un día no hábil, se considerará finalizado al día siguiente hábil.

En caso de que por disposición administrativa del Poder Judicial se declare asueto parte de un día, únicamente se entenderá extendido el plazo al día siguiente cuando se trata del último día del plazo otorgado.

Se considerará finalizado un plazo a la hora exacta de cierre del despacho, pero todo cumplimiento que inicie a esa hora se tendrá por válido. Aquel que se inicia posteriormente a esa hora se tendrá por hecho al día siguiente hábil; todo de acuerdo con el reloj oficial del despacho o a lo que se desprende de los sistemas tecnológicos de que disponga el Poder Judicial.

Sección VI: Suspensión de los procedimientos

Artículo 74.- Procedencia

Se podrá suspender los procedimientos cuando las partes así lo requieran, por prejudicialidad, en los casos en que la autoridad judicial lo considere necesario o en los casos previstos en la ley.

La suspensión se decretará por el plazo que el despacho considere prudente tomando en cuenta los fundamentos por los cuales se solicita, la situación fáctica del caso, la naturaleza de las pretensiones y el resguardo de los principios fundamentales del proceso.

Al decretar la suspensión, el despacho deberá respetar los principios de inmediación y concentración que rigen el sistema procesal de oralidad.

Artículo 75.- Prejudicialidad

La existencia de un proceso penal pendiente en ningún caso dará lugar a prejudicialidad. Cuando para resolver sobre el objeto del litigio sea necesario decidir acerca de alguna cuestión que, a su vez, constituya el objeto principal de otro proceso pendiente ante el mismo o distinto tribunal, si no fuere posible la acumulación de procesos, el despacho, de oficio o a solicitud de parte, podrá decretar la suspensión del curso de las actuaciones, en el estado en que se hallen, hasta que finalice el proceso que tenga por objeto la cuestión prejudicial.

Capítulo II: Actos de la persona juzgadora

Sección I: Las resoluciones judiciales

Artículo 76.- Identificación en las resoluciones y firma de las personas juzgadoras

Toda resolución judicial deberá contener, salvo otros requisitos expresos en la ley para resoluciones específicas, la identificación del despacho judicial que la toma, el número de expediente, las partes, la hora y fecha y el nombre de quién la dicta.

Artículo 77.- Firma de las personas juzgadoras

Toda resolución, salvo la tomada verbalmente en una audiencia, deberá ser firmada por quien la dicta. En órganos colegiados, cuando existe imposibilidad para hacerlo, esto se indicará, pero únicamente procederá si se trata de un número menor al cincuenta por ciento (50%) de quienes conforman el órgano colegiado.

La firma deberá ser tomada a mano o por medio de la firma digital en casos necesarios según se regula en la normativa de la materia.

Artículo 78.- Fundamentación de la resolución judicial

Las resoluciones judiciales deben ser claras, precisas y congruente y, salvo las de mero trámite, deberán estar fundamentadas.

Artículo 79.- Adición y aclaración de las sentencias

La parte dispositiva de las sentencias podrán adicionarse o aclararse de oficio o a solicitud de parte. La solicitud deberá hacerse dentro de tercero día luego de la notificación de la sentencia en su totalidad.

Artículo 80.- Corrección de errores materiales en las resoluciones judiciales

Los errores materiales podrán ser corregidos en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte interesada.

Sección II: Tipos de resoluciones judiciales

Artículo 81.- Providencias, autos y sentencias

Providencia es toda decisión judicial de mero impuso del proceso sin necesidad de valoración de la persona juzgadora; auto es todo pronunciamiento que contiene un criterio de valor sobre la situación o derechos procesales de las partes y las sentencias resuelven definitivamente las pretensiones debatidas en el proceso.

Artículo 82.- Requisitos de las sentencias

Además de los requisitos generales de las resoluciones judiciales, toda sentencia debe contener:

- 1.- Identificación de las partes y demás personas involucradas en el proceso.
- 2.- Resumen de las pretensiones de partes e intervinientes.
- 3.- Decisión sobre las cuestiones interlocutorias dejadas para resolver en el fallo.
- 4.- Hechos tenidos por acreditados y no acreditados.
- 5.- Las consideraciones de hecho y de derecho, con la correspondiente valoración probatoria y análisis de las normas legales aplicables.
- 6.- Resolución de las pretensiones y excepciones deducidas por las partes.
- 7.- Las consecuencias económicas del proceso.

Artículo 83.- Contenido adicional en sentencias de segunda instancia

Las sentencias de segunda instancia, además de los requisitos del artículo anterior, deberán contener:

- 1.- Resolución sobre las cuestiones relativas a la actividad procesal defectuosa solicitada. Se hará de oficio únicamente cuando sea necesario para una mejor comprensión de la resolución y el respeto del debido proceso.
- 2.- Consideraciones fácticas de modificación del fallo de primera instancia necesarias para la solución de la instancia superior.

- 3.- Resolución de los recursos admitidos en forma diferida en las resoluciones que definen el asunto en segunda instancia y se hayan reiterado en los agravios del recurso o aquellos recursos diferidos necesarios para la resolución aunque no hubieran sido reiterados por las partes.
- 4.- Consideraciones de hecho o derecho acerca de los agravios propuestos y las cuestiones que el tribunal considere prudente para la resolución.

Sección III: Comunicación de resoluciones judiciales

Artículo 84.- Aplicación de la Ley Notificaciones Judiciales

Salvo lo dispuesto en esta sección, las comunicaciones judiciales en los procesos contenidos en este Código se regularán conforme lo preceptuado en la Ley de Notificaciones Judiciales.

Artículo 85.- Deberes de la persona notificadora

Cuando se deba efectuar la notificación de una resolución que ordena el apremio corporal, la entrega de una persona menor de edad o en estado de vulnerabilidad o cualquier otra medida urgente, el despacho deberá indicarlo a la persona notificadora, para que la realice en forma inmediata.

Artículo 86.- Resoluciones en audiencias

Las resoluciones que se dicten en forma verbal en las audiencias se tendrán por notificadas en el acto a todas las partes, aunque no hubieren comparecido. De esas resoluciones no podrá alegarse desconocimiento.

Artículo 87.- Notificaciones personales o en casa de habitación

Además de las establecidas en el artículo 19 de la Ley de Notificaciones Judiciales u otras leyes especiales, se notificarán en forma personal o en casa de habitación las siguientes resoluciones:

- 1.- En los procesos resolutivos familiares las que establecen un sistema de interrelación familiar como medida cautelar o en sentencia, a ambas partes.
- 2.- La medida cautelar que resuelva la entrega para el cuidado personal de una persona menor de edad o persona en estado de vulnerabilidad, así como la sentencia que ordena esta obligación y la que le hace saber la forma de ejecutarla.

- 3.- La primera resolución que ordene el depósito de cuotas alimentarias, la que establezca la posibilidad del despacho de cobro de salario escolar o pago de inicio de lecciones y de los aumentos automáticos, así como la que aperciba el cumplimiento bajo aplicación del apremio corporal.

Artículo 88.- Notificaciones en el extranjero

Las notificaciones en el extranjero deberán hacerse por los medios consulares respectivos y por conducto de la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, diligencias que serán gratuitas para la parte cuando en forma motivada el despacho así lo disponga; en ese caso del Poder Judicial asumirá los gastos. El incumplimiento injustificado de esta norma se considerará falta grave y se pondrá en conocimiento de la Cancillería de la República quién determinará la responsabilidad respectiva del funcionario en caso de no haberse llevado a cabo la notificación por su negligencia.

Sección IV: Efectos de las sentencias

Artículo 89.- Carácter de cosa juzgada

La sentencia dictada en el proceso resolutive familiar y cualquier otra resolución que indique la ley, produce cosa juzgada material, salvo lo relativo a guarda crianza y educación, la suspensión de los atributos de la responsabilidad parental y la que resuelva el sistema de interrelación familiar o cualquier conflicto familiar que puedan ser modificado con posterioridad por el cambio de circunstancias en el ámbito familiar.

Sección V: Actividad procesal defectuosa

Artículo 90.- Principios generales

Cuando un acto procesal contenga un vicio, es deber de la persona juzgadora sanear el mismo sin necesidad de decretar la nulidad del acto, salvo en aquellas situaciones en que se haya afectado el debido proceso, el defecto o vicio esté prevista con sanción de nulidad por la normativa y no sea posible continuar sin decretar esa nulidad.

No procede la declaratoria de la nulidad de la actividad procesal cuando se ha logrado el fin perseguido con la actuación; si quien la solicita concurrió a causar el vicio o no ha sufrido perjuicio por él o cuando el vicio pueda ser subsanado.

Si la parte que se ha visto afectada por un vicio no lo alegare por los medios y en el momento oportuno, quedarán subsanados de pleno derecho.

Artículo 91.- Conservación de actos

Si fuera necesario decretar la nulidad de un acto procesal defectuoso, se deberán conservar las actuaciones a las que no alcance el motivo de nulidad, dejando constancia expresa de ellas.

Artículo 92.- Decreto de nulidades de la actividad procesal

En los casos estrictamente necesarios, se decretará la nulidad de la actividad procesal defectuosa de oficio o a solicitud de parte. Las de resoluciones judiciales deberán plantearse con los recursos que procedan contra ellas y las de otras actuaciones por petición de parte o interesado sin formalidad alguna bajo el cumplimiento de los principios contenidos en este apartado una vez conocido el vicio y sin que opere su preclusión. Los vicios de las actuaciones producidas en audiencia deberán reclamarse y resolverse en forma inmediata.

Cuando se solicite una actividad procesal defectuosa con posterioridad a la firmeza del fallo o a la conclusión del proceso se tramitará dentro del mismo expediente, siempre y cuando sea planteado en el plazo de tres meses a partir de su conocimiento.

Artículo 93.- Nulidades en actividades defectuosas en segunda instancia

En segunda instancia solo será decretada una nulidad de una actividad procesal a petición de parte y excepcionalmente se podrá decretar de oficio según los principios de este capítulo, cuando se trate de situaciones que requieran necesariamente su saneamiento.

Sección VI: Impugnación de resoluciones judiciales

Subsección I: Generalidades

Artículo 94.- Taxatividad y legitimación en los medios de impugnación

Las resoluciones judiciales únicamente podrán ser recurridas por los medios y en los casos que expresamente estén señalados y dentro de los plazos y formas previstas en la normativa.

Tendrán legitimación para recurrir todas aquellas personas a los que la resolución les cause algún perjuicio.

Artículos 95.- Desistimiento del recurso

Se puede desistir del recurso ante el despacho de origen o ante el superior en grado. Presentado el desistimiento el despacho de primera instancia resolverá lo que corresponda. Si se hubiese admitido el recurso, el superior conocerá del

desistimiento sin mayor trámite ni audiencia a las partes. Cuando exista sospecha de fraude procesal, de un vicio de la voluntad o violaciones al debido proceso, se rechazará en resolución fundada.

Artículo 96.- Efectos de la interposición de los medios de impugnación en cuanto a los plazos y ejecuciones

La impugnación de una resolución judicial no interrumpirá ni suspenderá la ejecución de lo resuelto, salvo cuando de la ejecución provisional resulte un daño irreparable, se trate de una situación de imposible restauración o cuando lo disponga una norma en forma expresa.

No se ejecutará la sentencia que resuelva sobre el estado civil de las personas o el desplazamiento de la filiación hasta que se encuentre firme.

Cuando se trate de sentencias de condena, la parte victoriosa puede pedir la ejecución de esta con el otorgamiento de las garantías necesarias a criterio del despacho.

Artículo 97.- Deber de fundamentar los recursos

Todos los recursos interpuestos contra cualquier tipo de resolución deberán estar debidamente fundamentados, bajo pena de ser rechazados de plano.

Artículo 98.- Congruencia y no reforma en perjuicio

Al resolver el recurso, no se podrá conocer aspectos no impugnados ni hacer variaciones a la resolución que perjudiquen al recurrente; salvo que ello sea estrictamente necesario en atención a lo resuelto. En todo caso se evitará decretar nulidades de las resoluciones recurridas.

Subsección II: Recurso de revocatoria

Artículo 99.- Procedencia y plazos

Los autos son revocables de oficio o a petición de parte. La solicitud deberá hacerse dentro de tercero día. Si se tratare de pronunciamientos en audiencia, la impugnación deberá hacerse durante el mismo acto en forma inmediata a su dictado y se resolverá en ese momento, previa escucha a las otras partes e intervinientes en caso de ser necesario a criterio de la persona juzgadora.

La resolución que deniega un recurso de revocatoria no será impugnable; pero la que revoque parcial o totalmente dicho pronunciamiento podrá ser recurrida por medio de los recursos que procedan contra la nueva resolución.

Subsección III: Recurso de apelación

Artículo 100.- Procedencia y plazos

El recurso de apelación procederá únicamente contra las resoluciones judiciales que expresamente así se indique y deberá interponerse dentro de tercer día. Tratándose de resoluciones interlocutorias dictadas en forma verbal en las audiencias, se deberá interponer en el acto y resolver su admisibilidad o no en forma diferida de inmediato. Cuando proceda el recurso de apelación contra autos, este deberá interponerse conjuntamente con el recurso de revocatoria y de no hacerlo se rechazará de plano.

Artículo 101.- Resoluciones apelables

El recurso de apelación cabrá contra las siguientes resoluciones, salvo norma en contrario:

- 1.- Todas las sentencias que resuelven el fondo del asunto.
- 2.- Los autos que:
 - a) Rechacen de plano una demanda o la ejecución de un fallo.
 - b) Declaren la inadmisibilidad de la demanda.
 - c) Decreten la suspensión o interrupción del proceso, excepto que se pida conjuntamente.
 - d) Denieguen medidas cautelares y los que resuelven cautelarmente sobre relaciones intrafamiliares no patrimoniales de personas en estado de vulnerabilidad.
 - e) Confirman, cancelen, sustituyan o modifiquen medidas cautelares.
 - f) Resuelvan sobre acumulación o desacumulación de procesos.
 - g) Den por terminado anticipadamente el proceso.
 - h) Rechacen prueba ofrecida ordinariamente.
 - i) Ordenen prueba de oficio.
 - j) Declaren la nulidad de actos procesales defectuosos.
 - k) Fijen los honorarios de personas abogadas.
 - l) Denieguen la ejecución provisional del fallo.
 - m) Resuelven una liquidación de costas e intereses.
 - n) Consideren infundada la oposición a la sentencia anticipada en materia de pensiones alimentarias y restitución internacional de personas menores de edad.
 - o) Decreten apremio corporal.
 - p) Resuelven sobre los beneficios de pago en tractos y búsqueda de trabajo en materia alimentaria.
 - q) Resuelven sobre gastos extraordinarios en materia alimentaria.

Artículo 102.- Procedimiento

Admitido el recurso se le otorgará un plazo de tres días a las otras partes e intervinientes para que expresen agravios. Vencido el plazo se remitirá el expediente o legajo ante el superior sin ulterior trámite.

Cuando fuere ofrecida prueba con el recurso o en los agravios de quienes no han recurrido, su admisión será restrictiva a las que sean necesarias para una solución acorde con la tutela de la realidad y cuya omisión en primera instancia se haya debido a causas ajenas a las partes o a cuestiones propias del carácter de quienes están litigando. En todo caso se podrá ordenar prueba de oficio, cuando así lo estime necesario para la decisión. Cuando se requiera recepción de prueba de declaraciones se señalará una audiencia dentro del plazo de quince días y el despacho que conoce deberá resolver dentro de quinto día.

Si no fuere necesaria esta audiencia, el fallo se emitirá dentro del plazo de cinco días a partir de su recibido.

Artículo 103.- Apelación con efecto diferido

El recurso de apelación contra autos planteado en la propia audiencia del proceso se admitirá en efecto diferido para conocerse junto al recurso de la sentencia final. La parte recurrente cuya apelación fue diferida debe reiterar y fundamentar sus motivos junto al recurso de la sentencia final; de lo contrario se tendrá por desistido. El órgano de segunda instancia conocerá de los recursos reiterados y diferidos cuando exista interés y trascendencia para la decisión final.

Si quién interpuso la apelación diferida no hubiere recurrido la sentencia, por haberle sido favorable, los alegatos que se habían dado en esa apelación deberán considerarse por el superior al conocerse el recurso de la otra parte si fuere necesario en vista de la forma de resolución que se toma.

Artículo 104.- Apelación por inadmisión

El recurso de apelación por inadmisión deberá presentarse ante el órgano superior correspondiente y procederá contra las resoluciones que denieguen ilegalmente un recurso de apelación.

El escrito se presentará ante ese órgano y contendrá necesariamente lo siguiente:

- 1.- Los datos generales del asunto que se requieren para su identificación.
- 2.- La fecha de la resolución que se hubiere apelado y de aquella en que quedó notificada a todas las partes.
- 3.- La fecha en que se hubiere presentado la apelación ante el despacho de primera instancia.

- 4.- Copia literal de la resolución en que se hubiere desestimado y de la resolución impugnada, con indicación de las fechas en que quedaron notificadas todas las partes. La copia literal de las resoluciones podrá hacerse dentro del escrito o presentarse en forma separada, pero en ambos casos quién recurre deberá afirmar que es exacta.

El órgano superior resolverá sobre la inadmisibilidad dentro del tercer día del recibido del recurso, si lo deniega sin más trámite enviará la sumaria al despacho de origen para que sea agregado y si se admite lo hace para que se verifique la oferta de expresión de agravios y se continúe con el trámite del recurso.

Subsección IV: Recurso de Casación

Artículo 105.- Sentencias objeto de casación

El recurso de casación procede contra todas aquellas sentencias de segunda instancia dictadas en procesos resolutive familiares que produzcan cosa juzgada material y en procesos de ejecuciones de sentencia con cosa juzgada material.

Artículo 106.- Motivos de casación

El recurso de casación procederá cuando se invocan motivos procesales o motivos sustanciales.

Los motivos procesales serán:

- 1.- Cuando se hayan producido en el proceso vicios o defectos que generen nulidad de actuaciones que hayan sido alegados y se hubiere desestimado o se tratase de recursos diferidos no resueltos sobre el tema.
- 2.- Cuando la sentencia es incongruente o cuando la parte dispositiva es oscura o incompleta, en estos dos casos siempre y cuando se hubiere presentado la respectiva adición o aclaración.
- 3.- Cuando no existe claridad ni precisión en la determinación de los hechos probados.
- 4.- Cuando se hubiere fundado el fallo en medios de prueba ilegítimos o se hayan producidos en forma ilegal en el proceso.
- 5.- Cuando la sentencia contenga el vicio de falta de fundamentación.

Los motivos sustanciales serán:

- 1.- Violación directa del orden jurídico sustancial
- 2.- Violación del orden jurídico resultante de la incorrecta o ilegítima aplicación del régimen probatorio, siempre que no resulte afectado el principio de inmediación y con la condición de que se trate de cuestiones que se hayan propuesto y debatido en el proceso.

Artículo 107.- Plazo y requisitos de interposición

El recurso deberá interponerse por escrito ante el mismo órgano que dictó la sentencia dentro de los diez días siguientes a la notificación y contendrá la identificación precisa del proceso y deberá puntualizar y fundamentar los motivos en que se basa y mencionará la pretensión concreta que se solicita; no es necesario citar las normas jurídicas violadas, pero sí indicar el derecho vulnerado. Por ningún motivo se rechazará el recurso por cuestiones de errores materiales o de mención de normas jurídicas o falta de orden en los motivos. Cuando se aleguen motivos de las apelaciones diferidas deberán indicarse expresamente.

Artículo 108.- Procedimiento de admisión

Recibido el recurso, el despacho que dictó la resolución recurrida revisará que se haya interpuesto en plazo, si así fuere emplazará a las partes por cinco días para que expresen agravios y posteriormente enviará la sumaria al órgano respectivo para su conocimiento. Si el recurso fuera extemporáneo, el propio despacho lo rechazará de plano, sin perjuicio de la aplicación de las reglas de la inadmisión en este tipo de recursos.

Recibida la sumaria por el órgano de casación, revisará su admisión conforme los requisitos del artículo anterior y los motivos alegados; si se alegare actividad procesal defectuosa, revisará las alegaciones pudiendo disponer las correcciones necesarias para subsanar los vicios y si fuera procedente y no es posible la subsanación de los vicios alegados decretará las nulidades que considere.

Artículo 109.- Prueba para mejor resolver en casación

En el procedimiento de casación únicamente se podrá admitir, de oficio o a petición de parte en el recurso y a criterio del órgano de casación, prueba para mejor resolver de tipo documental, pericial o científica que sea de influencia decisiva en el proceso, siguiendo los procedimientos de prueba de este Código, siempre que se trate de prueba que no hubiere sido admitida en el proceso o que de haberse admitido su falta de práctica no sea atribuible al ahora proponente.

Artículo 110.- Audiencia y resolución final

Cuando la parte lo haya pedido y el órgano de casación lo considere necesario se verificará una audiencia con las partes e intervinientes, siempre que el recurso ya haya sido admitido y no existen vicios o de haberlos se hubieren subsanados; en la cual se evacuará la prueba para mejor resolver admitida si fuere procedente y se podrán hacer alegatos por las partes.

Dentro de los cinco días luego de la audiencia, el órgano tomará la decisión final mediante voto y tendrá un mes posterior a ello para su redacción y notificación. Si no hubiera audiencia, estos plazos se tomarán a partir de resolución que admitió el recurso.

Artículo 111.- Resolución de fondo

Para el dictado de la sentencia de casación, en primer lugar se resolverá las cuestiones relativas al procedimiento y si se considera necesario, por no poderse hacer las correcciones de los vicios, se decretará la nulidad de la sentencia, se indicarán los vicios y defectos y se devolverá el expediente al despacho para que se repongan los trámites, se verifique nueva audiencia de segunda instancia si fuera necesario y se falle el asunto.

Si se trata de revocación por el fondo, se casará la sentencia total o parcialmente y se procederá a fallar el asunto en lo revocado. Si no procede la revocatoria, se declarará sin lugar el recurso y se remitirá el expediente a la oficina de origen.

Subsección V: Demanda de revisión

Artículo 112.- Procedencia y causales

La demanda de revisión procederá contra los pronunciamientos con autoridad y eficacia de cosa juzgada material, siempre que concurra alguna de las siguientes causales:

- 1.- Cuando se hubiere dictado como consecuencia de prevaricato, cohecho o actos fraudulentos declarados en sentencia penal.
- 2.- Cuando mediare fraude procesal, colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes para alcanzar el fallo.
- 3.- Cuando alguna de las pruebas decisivas del pronunciamiento impugnado hubiere sido declarada falsa en fallo penal firme o se hubieren obtenido mediante violencia, intimidación o dolo.
- 4.- Cuando por actos fraudulentos de la parte contraria no se hubiere presentado prueba esencial o se hubiere imposibilitado la

- comparecencia de la parte interesada a algún acto donde se practicó prueba trascendente.
- 5.- Si se hubiere dictado sentencia sin emplazamiento a la parte impugnante.
 - 6.- Si hubiere existido falta o indebida representación durante todo el proceso.
 - 7.- Si la sentencia contradice otra anterior con autoridad de cosa juzgada material, siempre que no se hubiere podido alegar dicha excepción.
 - 8.- Cuando se hubieren afectado ilícitamente, bienes o derechos de terceros que no tuvieron participación en el proceso.
 - 9.- En cualquier otro caso en que se hubiere producido una grave y trascendente violación al debido proceso.
 - 10.- Cuando surgieren nuevos medios probatorios científicos o tecnológicos que permitan desvirtuar las conclusiones que se obtuvieron en la sentencia impugnada, salvo en materia filiatoria cuando la sentencia establezca un estado de filiación de una persona menor de edad; sin embargo, en este último caso procederá la revisión a instancia de la persona cuya filiación se declaró cuando adquiriera la mayoría de edad.
 - 11.- Cuando en materia filiatoria se hubiere denegado el emplazamiento de estado en virtud de que no fue posible verificar la prueba científica acorde con el tiempo del proceso.

Será necesario que el vicio hubiere causado perjuicio a la parte impugnante y no haya sido posible subsanarlo dentro del mismo proceso en que se produjo.

No es procedente la revisión cuando se sustente en una causal ya conocida y no invocada por quién impugna en una solicitud de revisión anterior.

Artículo 113.- Legitimación y plazo

La solicitud de revisión puede ser interpuesta por quienes hayan sido parte en el proceso, las personas que sean sus sucesoras o causahabientes y por personas terceras cuando se trate de causales establecidas en su interés.

El plazo para interponer la revisión será de un año contado a partir del momento en el cual la persona perjudicada tuviere la posibilidad de alegar la causal respectiva; no obstante, no procederá la demanda cuando hayan

transcurrido diez años desde la firmeza de la sentencia que se impugna. Tratándose de derechos humanos vulnerados no existirá caducidad del plazo para interponer tal demanda.

Artículo 114.- Requisitos y efecto de la interposición

La demanda de revisión se presentará ante el propio órgano que dictó el fallo en primera instancia y deberá indicar expresamente la causal y los hechos concretos que la fundamentan, invocando todos los motivos que conozca al momento de interponerlo, así como la proposición de prueba pertinente.

Esta demanda no suspenderá la ejecución de la sentencia recurrida. Sin embargo, de acuerdo con las circunstancias y a petición de la persona impugnante, se podrá suspender la ejecución de la sentencia, previo establecimiento de las garantías con base en la naturaleza de las pretensiones.

Artículo 115.- Procedimiento

Por interpuesta la revisión, el despacho de instancia remitirá en forma inmediata el expediente al órgano competente, quien revisará las cuestiones formales y podrá pedir subsanar errores en la presentación en un plazo de cinco días. Si reúne los requisitos o subsanados estos, el tribunal se pronunciará sobre su admisión así como sobre la garantía de suspensión si hubiere sido solicitado, y emplazará a quienes hubieren litigado en el proceso o a sus causahabientes, por el plazo de cinco días. Por ningún motivo se rechazará la demanda por cuestiones de forma si del escrito se desprende el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Contestada la demanda o transcurrido el plazo para hacerlo, practicada la prueba científica o pericial admitida y estando en autos los informes, se señalará hora y fecha para una audiencia con las partes e intervinientes en la que se admitirán y practicarán las demás pruebas y se expondrán conclusiones.

Dentro de los cinco días luego de la audiencia, el órgano tomará la decisión final mediante voto y tendrá un mes posterior a ello para su redacción y notificación.

Artículo 116.- Contenidos y efectos del fallo

Declarada con lugar la demanda de revisión, el tribunal anulará, en todo o en parte, la sentencia impugnada, en cuanto fuere procedente y ordenará reponer las actuaciones necesarias. A pesar de la existencia de la causal, si esta no fuere determinante de la decisión impugnada, el tribunal podrá mantener incólume lo resuelto.

Dictada la sentencia, se remitirá el expediente al órgano de primera instancia para que proceda conforme se disponga. Si hubiere que reponer

actuaciones, serán eficaces las pruebas recibidas y practicadas en el tribunal que conoció de la revisión.

La nulidad declarada producirá todos sus efectos legales, salvo los derechos adquiridos por terceros que deban respetarse.

Cuando se haya rendido garantía dineraria para suspender la ejecución del fallo impugnado, esta se le girará a quien o quienes se hayan causado perjuicio por la suspensión, como indemnización mínima, según la proporción prudencial que determine el Tribunal que conoció de la impugnación.

En el fallo se ordenará la condena en costas para quién demandó la revisión en caso de no acogerse la petición, salvo que se estime los presupuestos de exención de costas en el proceso según lo normado en este Código. Si se acogiere la revisión, se falla sin condena en costas.

Artículo 117.- Recursos

Contra la sentencia que resuelva la revisión no cabrá recurso alguno. El rechazo por razones meramente formales no impedirá la interposición de una nueva demanda de revisión.

Capítulo III: Actos de las partes

Artículo 118.- Forma de gestión de las partes

Las partes o las personas profesionales que intervienen en su representación deberán gestionar en forma escrita en las actuaciones previas a la audiencia o fuera de estas. En las audiencias solo se admitirán gestiones verbales.

Los escritos necesariamente deberán ser firmados por las partes con autenticación de persona abogada, pero cuando ya estas están debidamente acreditadas en el proceso, es suficiente su firma. En los procesos que expresamente se indique, no se requiere que el escrito contenga la firma de autenticación de una persona abogada, pero deberá ser entregado personalmente por el firmante.

Cuando la parte gestionante debe firmar un escrito y por motivos de imposibilidad no pueda hacerlo, se presentará personalmente con el escrito ante el despacho judicial y se dejará constancia de esa situación; pero si la parte imposibilitada no lo presenta personalmente en los procesos que no requieren la autenticación de persona abogada, firmará un tercero a ruego con autenticación profesional. En todo caso la parte imposibilitada estampará en el escrito su huella dactilar, salvo que la imposibilidad no lo permita.

Artículo 119.- Entrega de copias de escritos y documentos

En los procesos resolutivos familiares con cosa juzgada material y en los procesos especiales de adoptabilidad y adopción; divorcio, separación judicial o cese de la unión de hecho por mutuo consentimiento; y los procedimientos de ejecución de estos procesos, se deberán entregar copias de los escritos que se presentan y de los documentos que acompañan; salvo que a criterio de la autoridad judicial no sea necesario por la calidad de las partes y el costo de los mismos, en cuyo caso el despacho lo suplirá si fuera necesario.

Artículo 120.- Efectos de las actuaciones de las partes

Los actos procesales de las partes, una vez verificados de manera efectiva ante el despacho competente, producirán inmediatamente la constitución, modificación o extinción de derechos y deberes procesales, salvo disposición legal en contrario.

Capítulo IV: Las audiencias judiciales

Artículo 121.- Privacidad de las audiencias

Toda audiencia judicial será privada, sin perjuicio de la presencia de personas ajenas al proceso cuando la autoridad judicial lo autorice con la necesaria anuencia de las partes, siempre y cuando esa presencia tenga una finalidad académica o de colaboración con las partes o la propia autoridad judicial.

Artículo 122.- Debido comportamiento de las partes y representantes

En toda audiencia las partes y sus representantes legales y judiciales deberán tener un adecuado comportamiento en el desempeño de las labores asignadas a cada uno y en el respeto debido hacia las demás personas.

Artículo 123.- Deberes de la persona juzgadora al inicio de la audiencia

En toda audiencia, conforme las pretensiones que se deducen, las personas juzgadoras deberán dirigirse a las partes y sus representantes para:

- 1.- Explicar claramente a las partes e intervinientes de las funciones que se asumen en la audiencia, los derechos y deberes que les compete, las oportunidades de participación, las consecuencias de su desatención y la obligación de comportamiento en esta; con la necesaria anuencia de las partes e intervinientes a no tomarla como la condición propicia de agravamiento de conflictos.
- 2.- Invitar a las partes e intervinientes a la consideración de una forma alterna a la solución del conflicto; para lo cual dará el espacio físico y

temporal necesario, y en caso de considerarse prudente, podrá llamar a la audiencia a cualquier profesional especialista en resolución alterna de conflictos para el tratamiento de esta fase.

Artículo 124.- Principio de concentración de la audiencia

Todos los actos de la audiencia deben llevarse a cabo en forma consecutiva, pudiendo únicamente interrumpirse las audiencias por motivos de horario de los despachos o cualquier situación que ocurra que imposibilite la diligencia, pero en todo caso debe proseguirse lo antes posible ese mismo día o al día siguiente, conservando la unidad de la audiencia.

Artículo 125.- Suspensión y continuación de audiencias de prueba y decisorias

Cuando sea necesario, por la imposibilidad de práctica probatoria, para considerar aspectos procesales complejos, por el inminente arreglo conciliatorio entre las partes o la enfermedad de la persona juzgadora, algunas de las partes del proceso o sus representantes profesionales, se pueden suspender las diligencias de una audiencia probatoria y decisoria final hasta por un plazo máximo de quince días hábiles; en cuyo caso el tribunal deberá indicar en ese momento la fecha y hora de la continuación. Quién o quienes inician presidiendo la audiencia deberán finalizarla y dictar el fallo.

Si no se pudiere continuar esta audiencia por motivos de imposibilidad de la persona juzgadora o un miembro de un tribunal, se deberá nuevamente iniciar la audiencia con otras personas juzgadoras.

Artículo 126.- Registro de las audiencias

Las audiencias, hasta donde sea posible y los medios tecnológicos lo permitan, deberán ser grabadas en voz y video. Por ningún motivo se filmarán las entrevistas de personas menores de edad.

En caso de que no existan medios tecnológicos para la grabación de la audiencia, en el acta deberá consignarse todo lo actuado y la prueba recibida, sin necesidad de anotar las discusiones sobre la práctica de esta.

TÍTULO IV
Actuaciones cautelares

Capítulo I: Generalidades

Artículo 127.- Principios que las rigen y su oportunidad

La materia cautelar garantizará la efectiva tutela de los derechos fundamentales y el objeto del proceso. Las medidas cautelares se podrán solicitar en cualquier estado del proceso o antes de su interposición.

Artículo 128.- Presupuestos y legitimación para su aplicación

Las medidas cautelares procederán a solicitud de parte o de oficio. Para ordenarla se atenderá a la apariencia del derecho que se pretende y al peligro de la espera de la solución final.

Artículo 129.- Medidas cautelares potestativas

La autoridad judicial al resolver una petición de medida cautelar podrá ordenar, aún de oficio, cualquier otra medida para tutelar los intereses de las personas involucradas en el proceso.

Artículo 130.- Caducidad de las medidas cautelares anticipadas

Cuando se ha concedido una medida cautelar anticipada la parte tendrá que presentar su demanda o gestión de audiencia previa dentro del mes siguiente a su dictado o ejecución según corresponda; de lo contrario esta caduca y quedará sin efecto.

Capítulo II: Procedimientos cautelares

Artículo 131.- Requisitos de la petición

Al solicitar una medida cautelar se debe expresar claramente los motivos en que se funda, ofrecer la prueba necesaria y, si es anticipada, deberá indicar el tipo de proceso que se pretende instaurar.

Artículo 132.- Decreto y ejecución

El despacho adoptará la medida cautelar sin dar audiencia a las otras partes o intervinientes, salvo que lo considere necesario. Se ejecutará a pesar de que existan recursos pendientes de resolver.

La medida cautelar firme se podrá revisar, de oficio o a petición de parte, cuando se estime que variaron las circunstancias que la motivaron. De ser necesario se ordenará su cancelación, modificación o sustitución.

Capítulo III: Medidas cautelares típicas

Sección I: Medidas cautelares en procesos de pretensiones personalísimas

Artículo 133.- Régimen provisional de sistema de interrelación familiar

En los procesos familiares se podrá establecer un régimen provisional de interrelación familiar con personas menores de edad, personas con discapacidad o personas adultas mayores; además se podrán establecer otras medidas que aseguren, desde el inicio del proceso, la identidad y relación propia entre estas personas y quién pretenda el régimen.

Artículo 134.- Cuido provisional de personas

La autoridad judicial podrá ordenar la anticipación del derecho pretendido de cuidado provisional de personas como medida cautelar, procurando que el lapso que transcurra hasta la sentencia no provoque la consolidación del derecho a favor del titular de la medida otorgada.

En los asuntos de petición unilateral para el nombramiento de un representante o el cuidado personal para una persona con discapacidad o persona menor de edad, la autoridad judicial podrá ordenar el cuidado personal con independencia de los aspectos patrimoniales.

Artículo 135.- Entrevistas, diagnósticos sociales y psicológicos de personas menores de edad, adultas mayores o con discapacidad

Cuando sea estrictamente necesario para la resolución de alguna de las medidas cautelares indicadas en los artículos anteriores, en forma excepcional la autoridad judicial podrá ordenar, incluso de oficio, cualquier prueba que estime necesaria para establecer la realidad en cuanto a la relación existente entre quien la pide y la persona menor de edad, adulta mayor o con discapacidad.

También podrá ordenar la entrevista personal, para lo cual podrá solicitar la participación y colaboración de los integrantes del equipo interdisciplinario.

Artículo 136.- Salida del domicilio conyugal

En los procesos de disolución, nulidad y separación judicial del matrimonio y en el reconocimiento de unión de hecho, la autoridad judicial podrá ordenar o autorizar a cualquier de los cónyuges o convivientes la salida inmediata del hogar, con independencia de la titularidad de la propiedad en el que se encuentren. En todo caso, al ordenar la medida se deberá considerar la existencia de personas menores de edad o personas con discapacidad y su relación afectiva con cónyuges o convivientes.

A fin de hacer efectiva esta medida, el despacho judicial podrá solicitar la intervención de la autoridad de policía y hacer uso de cualquier otra medida tendiente a asegurar la integridad física y moral de las partes y demás miembros de la familia y, en casos excepcionales, podrá ordenar el allanamiento de morada.

Artículo 137.- Otras medidas cautelares de protección en procesos donde se discuten relaciones de pareja

La autoridad judicial podrá ordenar, a fin de asegurar la protección de los miembros de la familia, cualquier medida de protección que estime pertinente, además de las establecidas en la normativa de violencia intrafamiliar.

Sección II: Medidas cautelares en procesos de representación

Artículo 138.- Administración interina de bienes

En los asuntos de petición unilateral para el nombramiento de representantes de personas menores de edad o con discapacidad, o en cualquier otro proceso que así lo requiera, de ser necesario y existan indicios de que el patrimonio corre peligro, se ordenará el nombramiento de una persona administradora interina de los bienes.

Artículo 139.- Inmovilización de bienes

En caso de que exista riesgo patrimonial relacionado con una posible defraudación en contra de los intereses de la persona presunta insana o de la persona menor de edad, se podrá ordenar al Registro Público de la Propiedad la inmovilización de los bienes inmuebles o muebles registrables e inscritos a su nombre.

Sección III: Medidas cautelares en pretensiones patrimoniales

Artículo 140.- Embargo preventivo

En el trámite de procesos con pretensiones patrimoniales, a fin de impedir que la parte demandada, mediante el ocultamiento o distracción de bienes, pueda eludir su responsabilidad, se podrá pedir el embargo preventivo de bienes, sin que se exija garantía pecuniaria alguna; aunque la autoridad judicial será vigilante en determinar en cualquier momento del proceso la existencia de un embargo excesivo y ordenar la reducción.

Cuando se solicita el embargo de una propiedad para el cobro de la eventual condena de responsabilidad en procesos en los que ambas partes son miembros de la misma familia, la autoridad judicial deberá valorar adecuadamente si la procedencia de ese embargo puede afectar los derechos de otras personas miembros de la familia, en especial personas en estado de vulnerabilidad y, de ser así, denegará la petición.

Artículo 141.- Anotación de demanda

En el proceso donde se discuta la declaratoria del derecho de ganancialidad de bienes inmuebles, muebles inscribibles o derechos de concesión de órganos administrativos, que presumiblemente puedan ser considerados de esa forma se ordenará la anotación de estos; para lo cual se enviará en forma inmediata el respectivo mandamiento al Registro correspondiente, sin perjuicio de que se haga mediante vías electrónicas directas.

De igual forma, se ordenará la anotación de ese tipo de bienes de una persona jurídica, cuando se demande a ella por considerar que ha sido constituida para sustraer bienes con derecho de ganancialidad del patrimonio de la pareja, o que exista para tales fines.

Artículo 142.- Medidas cautelares referente a libros de personas jurídicas

Cuando en un proceso se discuta la existencia de bienes de los cónyuges o convivientes, inscritos a nombre de una persona jurídica, la autoridad judicial podrá ordenar el decomiso de los libros de la sociedad o inmovilización de cualquier registro de acciones o cuotas de participación, a fin de evitar que se trasladen en forma simulada y se vulnere el derecho de ganancialidad. En este caso se dejará constancia en el expediente y se devolverán en forma inmediata.

En caso de que la persona jurídica no cuente aún con los libros respectivos, la autoridad judicial podrá ordenar al ente administrativo encargado la no entrega de los mismos en caso de que se soliciten, o que antes de otorgarlas hagan constancia de fecha cierta al día entregado para verificar la autenticidad de posteriores traspasos.

Artículo 143.- Inmovilizaciones y depósito de bienes muebles

Cuando se discute el derecho de ganancialidad sobre bienes muebles no inscritos, la autoridad judicial podrá apersonarse al lugar en donde se encuentran, llevar a cabo un inventario detallado de dichos bienes y ordenar a quien los posea la obligación de no enajenarlos ni gravarlos sin consentimiento del despacho.

También puede ordenarse el depósito de los bienes en cónyuges o convivientes que no los posea o en tercero que garantice el cuidado y mantenimiento.

Sección IV: Medidas Autosatisfactivas

Artículo 144.- Procedencia

Procederá el dictado de una medida autosatisfactiva por parte de la autoridad judicial cuando a su juicio sea necesario para procurar el mejor disfrute

de los derechos fundamentales en el ámbito familiar, cuyo dictado no causa un perjuicio grave para los otros miembros de la familia.

Quién lo solicita deberá acompañar la petición de los elementos de prueba necesarios para la identificación del derecho pretendido y la urgencia de la tutela.

Artículo 145.- Efectos

El dictado de la medida autosatisfactiva conlleva la inmediata ejecución de lo decidido y no requiere de discusión posterior; salvo la activación de otras vías procesales para discutir lo resuelto.

**TÍTULO V
Actividad probatoria**

Capítulo I: Disposiciones generales

Sección I: Principios básicos

Artículo 146.- Principios específicos de prueba en el proceso familiar

La materia probatoria en el proceso familiar se regirá por los principios generales de la prueba; específicamente los principios de libertad probatoria, gratuidad, privacidad, confidencialidad, contradictorio, concentración y flexibilidad en el ofrecimiento, admisión y práctica probatoria dentro del marco de legalidad.

Artículo 147.- Principio de libertad probatoria

Los hechos sometidos al debate podrán ser demostrados con cualquier tipo de prueba. El tribunal estará obligado a consultar documentos, indicadores económicos u otros, así como cualquier normativa pertinente para establecer los hechos.

Artículo 148.- Principio de concentración de la prueba

La prueba deberá ser evacuada en una sola audiencia según se dispone y regula en este Código.

Artículo 149.- Juramento y examen de condiciones de personas declarantes y peritas

Salvo las personas menores de doce, todas quienes rendirán declaración testimonial o de parte y las personas peritas están obligadas a rendir juramento. La autoridad judicial les hará saber las consecuencias legales existentes en caso de no cumplir con esto en cada caso. Antes de rendir la declaración se deberá expresar las calidades propias, las relaciones de parentesco, amistad, compañerismo laboral, vecindad o cualquier circunstancia que pueda ser

determinante para valorar la prueba. En sus dictámenes, las personas peritas están en el deber de indicar estas circunstancias.

Artículo 150.- Incorporación de prueba de otros procesos

De acuerdo con el principio de abordaje integral de los procesos sobre una misma situación familiar, la prueba evacuada en otros procesos podrá ser incorporada sin necesidad de ratificación siempre y cuando se trate de las mismas partes involucradas. Cuando se trate de prueba pericial o testimonial, excepcionalmente se podrá hacer llegar al proceso a quien la haya emitido con el fin de ser examinado sobre determinados aspectos de interés.

Artículo 151.- Costo económico en materia probatoria

Las actuaciones o diligencias probatorias serán gratuitas salvo que la parte solicitante cuente con recursos.

Sección II: Carga de la prueba

Artículo 152.- Principio de facilidad probatoria

Al momento de ordenar prueba se tomará en cuenta la disposición y facilidad que cada una de las partes e intervinientes tienen para hacerla llegar al proceso. Las partes estarán obligadas a cooperar en el aporte de las pruebas, con independencia del hecho que se pretenda demostrar.

El incumplimiento de ese deber permitirá al tribunal tener por demostrado el hecho de la contraria que se pretende acreditar con la prueba.

Capítulo II: Ofrecimiento y admisión

Sección I. Prueba anticipada

Artículo 153.- Procedencia y recepción

Cuando se pretenda demostrar un hecho que por su propia naturaleza o por los riesgos que tiene con respecto a personas o bienes no pueda esperar a ser evacuada en la etapa procesal establecida, la parte podrá solicitar la admisión y práctica de esta acreditando debidamente la situación.

La prueba así admitida se recibirá en audiencia con la presencia de las partes. Excepcionalmente y en casos de suma urgencia a criterio del tribunal se podrá recibir sin citación de partes.

La prueba carecerá de eficacia si se comprobare que no se produjeron las condiciones que ameritaron su recibo anticipado. En todo caso el tribunal deberá fundamentar debidamente su decisión.

Sección II: Ofrecimiento de prueba

Artículo 154.- Momento del ofrecimiento

Las pruebas deberán ser aportadas u ofrecidas conforme lo indica este Código para cada uno de los procedimientos. Cuando se trate de prueba no conocida por las partes o que no haya sido posible obtenerla con anterioridad, podrá ser ofrecida sin formalismo alguno en cualquier momento del proceso hasta el inicio de la audiencia.

Capítulo III: Admisión de la prueba

Sección I: Iniciativa probatoria de la autoridad judicial

Artículo 155.- Potestad del tribunal en la introducción de prueba en el proceso

En todo proceso, ya sea al inicio de este o durante la audiencia respectiva, la autoridad judicial tendrá potestad de hacer llegar prueba no ofrecida por las partes o aquella que sea necesaria para demostrar hechos sugeridos por las partes e intervinientes que no ha sido posible demostrar con las ofrecidas inicialmente.

La persona juzgadora deberá fundamentar su decisión tomando en cuenta principios de imparcialidad, razonabilidad, proporcionalidad, experiencia, solución integral, vulnerabilidad, protección y accesibilidad; así como para evitar los fraudes procesales.

Sección II: Admisión de prueba ofrecida

Artículo 156.- Potestad de la autoridad judicial

Serán admisibles las pruebas que tengan conexión y sean pertinentes con los hechos y que sean útiles, en aplicación a los principios de protección del proceso familiar, sin perjuicio de excluirlas cuando se refieran a hechos admitidos en asuntos de derechos disponibles, las relacionadas con hechos notorios en forma general dentro de una determinada región o en un ámbito subjetivo concreto y las que se refieran a hechos evidentes a una presunción que no admite contradicción.

Artículo 157.- Prueba abundante

Se podrá denegar las pruebas que se consideren abundantes, siempre y cuando se respete el principio de equilibrio procesal.

Tratándose de declaración de terceros, la autoridad judicial podrá reducir el número de declarantes, valorando para ello las circunstancias del tipo de proceso y las pretensiones.

Capítulo IV: Medios de prueba y su práctica

Sección I: Generalidades

Artículo 158.- Medios de prueba

Se consideran medios de prueba los siguientes:

- 1.- Declaración de partes
- 2.- Declaración de terceros
- 3.- Documentos e informes
- 4.- Dictámenes periciales
- 5.- Dictámenes científicos y tecnológicos
- 6.- Reconocimiento de lugares, personas, cosas y situaciones familiares
- 7.- Cualquiera otro con garantía del debido proceso

Artículo 159.- Participación de intérpretes

Si por motivos de idioma, expresión del lenguaje, impedimentos físicos, limitaciones de tipo socioeducativas y cualquier otra situación la práctica de la prueba pueda causar gravamen en los derechos de las partes e intervinientes en el proceso; la autoridad judicial, a solicitud de parte o de oficio, dispondrá el nombramiento de intérpretes a cargo del Poder Judicial, salvo que la parte proponente cuente con recursos.

La parte proponente de la prueba deberá informar al despacho con la antelación debida el requerimiento de intérprete a fin de realizar las gestiones necesarias para el nombramiento.

Artículo 160.- Lugar, momento y forma de la práctica de la prueba

Las pruebas se practicarán en el momento que señale la autoridad judicial y en el asiento del despacho. Se podrá realizar la recepción de pruebas en lugar diverso cuando las circunstancias lo ameriten o utilizarse medios tecnológicos disponibles, siempre y cuando se garantice el debido proceso y el principio de inmediación.

Artículo 161.- Medios de protección

A fin de evitar la revictimización de partes, intervinientes y cualquier otro sujeto del proceso, el tribunal dispondrá el uso de medios tecnológicos disponibles.

Sección II: Particularidades de los medios de prueba

Subsección I: Declaración de partes

Artículo 162.- Obligación de declarar

Las partes tienen el deber de prestar declaración sobre hechos que le sean propios o ajenos.

Cuando se trate de personas jurídicas, podrán hacerlo no solo quienes ostenten al momento de la declaración la calidad de representantes, sino que también podrán ser llamados quienes las representaban al momento de suceder los hechos, sin perjuicio de que estos puedan declarar en calidad de testigos.

Artículo 163.- Repercusiones por la ausencia

Cuando la parte debidamente notificada de la audiencia para la declaración de parte no se apersonare sin justificación alguna, no quiera declarar o de cualquier forma lleve a cabo actos que frustren la realización de la prueba, se considerará que admite tácitamente los hechos del interrogatorio, presumiéndose como ciertos, siempre y cuando sean contrarios a sus intereses en el proceso, todo de conformidad con los términos de valoración probatoria que regula este Código.

Artículo 164.- Inadmisión de la declaración de parte

No será admisible la declaración de parte sobre hechos referentes a derechos no disponibles, salvo que sea necesaria como elemento integrador de otras pruebas o para tener mejor visión del conflicto familiar.

Por ningún motivo se admitirá la prueba de declaración de parte en los procedimientos de aplicación de las medidas de protección contra la violencia doméstica ni en los procesos de protección cautelar establecidos en este Código.

Artículo 165.- Imposibilidad de utilizar notas y apuntes

Al momento de la declaración no se podrá utilizar notas ni apuntes, excepto cuando se trate de preguntas referidas a cifras o datos de difícil precisión, siempre y cuando los tenga en su poder al momento en la audiencia.

Subsección II: Declaración de terceros

Artículo 166.- Personas sujetas a declarar

Toda persona que tenga la capacidad suficiente para declarar podrá ser ofrecida como testigo o llamada a declarar por el tribunal, sin perjuicio de las restricciones que se mencionan en este apartado.

Artículo 167.- Testigos hijas o hijos de las partes

Cuando se trate de testigos hijas o hijos de las partes o de alguna de ellas y que sean menores de quince años de edad, se recibirá su testimonio sin la presencia de las partes, quienes deberán hacerse representar por sus representantes legales.

Artículo 168.- Examen del declarante sobre todo el contexto familiar

Las personas quienes rindan testimonio podrán ser interrogadas sobre los hechos propuestos y cualquier situación familiar personal o patrimonial de interés para la decisión del proceso.

Artículo 169.- Abstención para declarar

Al momento de rendir la declaración el tribunal advertirá a las personas declarante que se pueden abstener de hacerlo cuando la declaración puede implicar consecuencias penales de conformidad con el artículo 36 de la Constitución Política o cuando se trate de personas protegidas por el secreto profesional o deber de reserva legal. En estos dos últimos supuestos la parte podrá relevarlas y deberá procederse a recibir su declaración.

Artículo 170.- Consulta a documentos

En la declaración de terceros se aplicará lo dispuesto sobre la excepcionalidad de declarar consultando notas y apuntes dispuesta para la declaración de partes.

Artículo 171.- Dirección del interrogatorio

Una vez juramentada la persona declarante será examinada sobre sus calidades y relación con las partes, se le invitará a declarar sobre los hechos del proceso. Las partes podrán preguntar en varias ocasiones en el orden que la autoridad judicial considere en cada caso, manteniendo el equilibrio procesal. La advertencia a decir verdad deberá hacerla el tribunal únicamente.

El interrogatorio será verbal y directo, salvo tratándose de personas menores de edad, con discapacidad, o en cualquier otra situación de vulnerabilidad, caso en el cual el interrogatorio se hará por medio de la autoridad judicial o con la ayuda de profesionales. Por ningún motivo se permitirán tratos inadecuados de las partes y representantes legales hacia las personas declarantes.

Una vez terminada la declaración, la persona declarante se retirará de la sala de audiencias, salvo que el tribunal le ordene que permanezca dentro de las instalaciones del despacho para cualquier situación de nueva convocatoria a declarar o la realización de un careo.

Artículo 172.- Sustitución de testigos

En cualquier estado del proceso, incluso hasta antes de la etapa de recepción de prueba, se podrá solicitar la sustitución de quienes han sido ofrecidos para declarar, siempre y cuando el cambio no produzca retraso o imposibilidad en la realización de la audiencia.

Artículo 173.- Careo

Cuando exista contradicción entre declarantes, sean partes o terceros, se podrá, de oficio o a petición de parte, ordenar un careo.

Artículo 174.- Ausencia de testigos

Cuando a la audiencia no compareciere alguna de las personas admitidas para recibir su declaración y se considere necesaria la misma, se deberá hacerlo llegar dentro del plazo que se estipule para la suspensión de las audiencias, con auxilio de la fuerza pública si fuere necesario.

Subsección III: Documentos e informes

Artículo 175.- Validez documental

Todo documento aportado por las partes en la fase inicial del proceso se considerará admitido de pleno derecho y estos y los que fueran aportados posteriormente y admitidos por el despacho se presumirán válidos y auténticos, salvo que por los medios establecidos se llegue a considerar lo contrario.

Tendrán la validez de un documento físico lo que sean entregados por medios tecnológicos.

Los documentos aportados por las partes o los requeridos por el tribunal a las instituciones públicas estarán exentas de pago de impuestos, pero sí deberán contener el sello de la institución y la firma de quién los emite con competencia para ello; lo mismo respecto de las reproducciones de dichos documentos y las autenticaciones del contenido de los medios electrónicos.

Artículo 176.- Documentos públicos

Se considerarán documentos públicos aquellos que sean emanados por personas funcionarias públicas en el ejercicio de su cargo, o por aquellas personas que para tales efectos revisten tal carácter con los requisitos exigidos en la ley.

Los documentos expedidos por instituciones públicas de otros países deberán contar con la debida traducción al idioma español y con los requisitos de autenticación consular, salvo que a criterio de la autoridad judicial o por existencia

de convenios internacionales, en salvaguarda de la gratuidad, la sumariedad y la informalidad del proceso, no sea necesario sin que se afecte el debido proceso y el derecho de defensa.

Artículo 177.- Impugnación de documento privado

En caso de impugnación, el documento privado deberá ser debidamente reconocido por quién lo ha emitido o firmado.

De oficio o a petición de parte, se hará comparecer a las personas involucradas en la emisión, confección, firma o en el contenido de un documento, para que aclaren cualquier duda que se tenga sobre la autenticidad o su contenido.

Artículo 178.- Obligatoriedad de la exhibición de los documentos

El despacho, a solicitud de parte o de oficio, podrá ordenar a quien tenga posesión de cualquier tipo de documento privado, informe, libro, documento público extranjero o cualquier otro elemento de prueba, su presentación cuando sea estrictamente necesario para la resolución de las pretensiones deducidas de las partes.

Artículo 179.- Petición de informes

El despacho podrá, de oficio o a petición de parte, solicitar a cualquier persona física o jurídica, de hecho o derecho, institución pública o ente privado: los informes, expedientes, estudios y otros documentos referentes a los hechos del proceso y cuya demostración no pueda ser solventada por otro medio de prueba. Lo solicitado puede ser remitido por cualquier medio que asegure autenticidad.

Artículo 180.- Secreto y privacidad de documentos

Será potestad de la autoridad judicial, en resguardo de los principios procesales de privacidad y reserva en el proceso y tomando en consideración las condiciones vulnerables de las personas involucradas y cuyos derechos se discuten, mantener en reserva cualquier tipo de documento o informe y únicamente mostrarlo a las partes en las respectivas audiencias, cuando el documento contenga información privada de ellas o de personas allegadas, en especial de las personas menores de edad. Al momento de presentar el documento, se ordenará a las partes abstenerse de llevar a cabo acciones contrarias a la armonía familiar en vista del descubrimiento del contenido del mismo.

Artículo 181.- Procedimiento de impugnación de documentos

Los documentos que hayan sido presentados junto a la demanda únicamente podrán ser impugnados al momento de contestar las pretensiones y

los presentados posteriormente se impugnarán en la audiencia inicial, sin que deba requerirse más formalidades que las necesarias para identificar la causa, objeto y pretensión de la articulación. En el primer caso la autoridad judicial otorgará una audiencia de tres días a la parte y en el segundo caso lo hará en forma verbal. Se podrá ordenar las pruebas necesarias para resolver lo pedido, salvo que en la vía penal se haya resuelto sobre la falsedad, con efectos de cosa juzgada material.

Subsección IV: Informes periciales

Artículo 182.- Ofrecimiento y admisión

Se podrá pedir la intervención de personas peritas para la elaboración de informes en aquellos hechos o circunstancias que requieran conocimientos ajenos al Derecho. Esta pericia se limitará al objeto que se puntualiza en su pedido.

La autoridad judicial podrá admitir, en carácter de prueba documental o de informes según corresponda, peritajes ya confeccionados con anterioridad, siempre que no exista duda de la autenticidad, profesionalidad y resulten oportunos para la decisión del asunto.

Artículo 183.- Nombramiento de personas peritas no institucionales

El nombramiento de las personas peritas no institucionales se hará con base a la lista que al efecto existe en el Poder Judicial. Previamente a la designación se prevendrá el depósito de los honorarios cuando proceda. En caso de personas que no integren esas listas, será necesario su juramento en el despacho.

Cuando la pericia así lo exija, el nombramiento podrá recaer en un grupo de personas o de un ente u órgano público o privado para la elaboración del informe; caso en el cual debe incluirse en el peritaje el nombre de las personas que intervinieron directamente en la pericia.

Artículo 184.- Deberes de persona peritas

Antes de la rendición del informe, las personas peritas están en la obligación de mantener reserva y privacidad de la información, salvo que a criterio del tribunal se requieran informes preliminares relacionados con dicha información.

Artículo 185.- Contenido y limitaciones del peritaje

En el informe pericial se deberá incluir únicamente aquellos datos indispensables para la apreciación del elemento probatorio. Se prescindirá de todas aquellas situaciones de la vida de las personas involucradas en el proceso que no sean relevantes. En sus conclusiones el peritaje deberá ser congruente con la petición judicial.

Artículo 186.- Examen y ampliación de peritajes en audiencias

Cuando así lo determine el tribunal, la persona perita deberá comparecer a la audiencia de prueba para informar, ampliar o aclarar la pericia y lo hará de la forma más sencilla posible. Las partes podrán hacerse acompañar para estos efectos de una persona profesional en la materia, quien podrá solicitar a través de la autoridad judicial las aclaraciones y adiciones que sean necesarias.

Subsección V: Dictámenes científicos y tecnológicos

Artículo 187.- Casos en que procede

Se podrá ordenar prueba eminentemente científica o tecnológica, o la práctica de reproducciones de cualquier naturaleza, cuya elaboración estará a cargo de una persona, un grupo de ellas o un ente público o privado, adscrito o no al Poder Judicial.

El nombramiento de ellas, el pago de sus honorarios, sus deberes y funciones se regirán por lo reglado para la prueba pericial. De la misma forma deberá comparecer a audiencia cuando así es requerido para su examen e interrogatorio de las partes.

Artículo 188.- Prueba científica en procesos relativos a la filiación

Tratándose de pretensiones sobre filiación en las cuales sea indispensable prueba científica, la autoridad judicial deberá ordenarla, incluso de oficio, en forma inmediata al inicio del proceso.

Cuando una persona debidamente citada para la práctica de esta prueba se niega a acudir a la cita, podrá ser conducida por la autoridad de policía, para lo cual el despacho hará uso de los medios coercitivos necesarios.

Subsección VI: Reconocimiento judicial de personas, lugares, cosas y situaciones familiares

Artículo 189.- Reconocimiento de personas

En cualquier tipo de proceso en el cual se demanda la existencia de agresiones físicas o emocionales, la autoridad judicial ordenará, de inmediato, la realización de un reconocimiento de las personas víctimas; a fin de valorar la magnitud y las secuelas de los hechos, por medio de profesionales de los equipos interdisciplinarios o de otras dependencias del Poder Judicial o cualquier entidad pública o privada que se encargan de estas actuaciones.

Al momento de llevar a cabo esta diligencia, se debe tener en cuenta todas las precauciones necesarias para el respeto de los derechos de la personalidad, incluyendo la posibilidad de acompañamientos con personas de confianza y que se verifique sin presencia de las otras partes y representantes legales y en lugares

debidamente acondicionados para su práctica. Por ningún motivo se admitirá esta prueba si ello implica violación del derecho fundamental de la dignidad humana.

Artículo 190.- Reconocimiento de situaciones familiares, lugares y cosas

A fin de valorar el lugar y la forma en que se desarrolla la dinámica familiar en aquellos procesos en los cuales es requerido para la pretensión concreta y no sea necesario peritaje social, se podrá ordenar llevar a cabo un reconocimiento de esos lugares o de las situaciones familiares que allí se presentan; a esta diligencia pueden asistir las partes, representantes legales, personas peritas y otras personas que puedan coadyuvar para que se diligencie adecuadamente, sin perjuicio de que se ordene con carácter de prueba anticipada, según los procedimientos señalados en este Código.

Si se tratare de un reconocimiento ofrecido por alguna de las partes, se debe indicar cuál es el motivo y objeto de este y la parte contraria podrá indicar al despacho antes de su realización otros aspectos que se incluyan en su objeto.

A fin de verificar este tipo de actuaciones, la autoridad judicial podrá contar con el auxilio policial que estime conveniente y las partes o personas encargadas de los lugares no podrán negar el ingreso a las autoridades a dichos sitios, de lo contrario se podrá ordenar de inmediato el allanamiento del lugar para cumplir con lo ordenado.

Si se trata de reconocimiento de cosas, se podrá ordenar el traslado de estas al despacho judicial para la práctica de este.

Capítulo V: Apreciación probatoria

Artículo 191.- Forma de apreciación y valoración de la prueba

En materia de familia se apreciará y valorará las probanzas conforme a los criterios de lógica, experiencia, sentido común, ciencia y correcto entendimiento humano sin sujeción a reglas de valores determinados para cada medio de prueba, atendiendo a todas las circunstancias y los elementos de convicción que los autos suministren; pero, en todo caso, deberán hacerse constar las razones fundamentos de la valoración.

Artículo 192.- Presunción ante inasistencia a prueba científica

En procesos relativos a pretensiones de filiación, cuando no se pudo verificar la prueba científica a causa de la inasistencia de una de las personas compelida a esos efectos, se tendrá como presunción en su contra aquello que se quería demostrar con la prueba.

TÍTULO VI
Terminación anticipada de los procesos

Capítulo I: Medios alternos de solución

Artículo 193.- Conciliación en el proceso

Además de la gestión previa de conciliación en el proceso resolutivo familiar, en cualquier estado de este u otros procesos las partes podrán proponer la realización de una audiencia conciliatoria; sin que se pueda rechazar la solicitud, salvo que se trate de materia no conciliable o que sea previsible que la gestión pretenda dilatar el proceso.

Para la realización de la audiencia, se podrá recurrir a los servicios profesionales especializados en conciliación del Poder Judicial.

Artículo 194.- Conciliación extrajudicial

Las partes podrán presentar, en cualquier tipo de proceso, arreglos de tipo conciliatorio. La autoridad judicial revisará el arreglo y, si lo encuentra ajustado a derecho, lo homologará. Cuando se considere necesario, se convocará a una audiencia para la discusión de lo conciliado.

Si el acuerdo es presentado al despacho por una sola de las partes, se debe dar audiencia a la parte contraria para que se manifieste acerca de la petición de homologación.

Artículo 195.- Opinión previa

Tratándose de personas menores de edad o con discapacidad que puedan externar su opinión, de previo a la homologación en la audiencia indicada, se deberá escuchar su posición acerca de los aspectos conciliados que se refieran a derechos propios, todo bajo pena de nulidad de la resolución homologatoria.

Artículo 196.- Asuntos no conciliables

No procederá la conciliación cuando se trata de la discusión de derechos irrenunciables o indisponibles. En violencia intrafamiliar o protección de derechos de personas en estado de vulnerabilidad solo se admitirá cuando sea evidente que el acuerdo favorezca a la víctima.

Cuando en un proceso se concilian extremos que no afectan los aquí enunciados, se podrá admitir el arreglo parcial.

Artículo 197.- Efectos del acuerdo conciliatorio en materia de pensiones alimentarias

Los acuerdos extrajudiciales en materia de pensiones alimentarias surtirán efectos a partir de su adopción salvo para el cobro por la vía de apremio corporal, el cual solo se podrá solicitar a partir de la homologación judicial y en relación con las cuotas futuras. Los montos adeudados antes de la homologación se cobrarán por la vía de apremio patrimonial.

Capítulo II: Otras formas de terminación del proceso

Sección I: El desistimiento

Artículo 198.- Procedencia

Se podrá desistir en forma total o parcial las pretensiones o peticiones en cualquier etapa del proceso, hasta antes del dictado de la sentencia de primera instancia. Si la demanda ha sido contestada se requerirá el asentimiento de la otra parte, para lo cual se dará el plazo de tres días.

Cuando existen pretensiones de ambas partes, quién no ha desistido podrá aceptar el desistimiento e indicar que desea continuar el proceso en todo o en parte en cuanto a las suyas. Si se presentare en audiencia se oirá a la otra parte y se resolverá ahí mismo.

En ambos casos, la no contestación a esa audiencia tendrá por desistido todo el proceso.

No se admitirá el desistimiento parcial de litis consortes necesarios.

Artículo 199.- Limitaciones al desistimiento

No procederá el desistimiento de procesos de protección cautelar y todos aquellos que tutelen derechos de personas en estado de vulnerabilidad.

Artículo 200.- Efectos del desistimiento

El desistimiento provoca la terminación del proceso en cuanto a las pretensiones desistidas y la demanda se tendrá por no puesta para todos los efectos.

Una vez admitido el desistimiento se condenará en costas a quien haya desistido, salvo casos excepcionales a criterio de la autoridad judicial.

Sección II: Caducidad del proceso

Artículo 201.- Procedencia

Cuando la parte no haya cumplido una prevención ordenada por la autoridad judicial impidiendo la continuación del proceso, transcurridos tres meses se declarará caduco. Esta declaratoria se hará de oficio o a petición de persona interesada.

Artículo 202.- Improcedencia de la caducidad

No procede la caducidad en los procesos de protección cautelar y todos aquellos que tutelen derechos de personas en estado de vulnerabilidad. Tampoco procederá en los asuntos de petición unilateral de nombramiento de tutor o curador.

Artículo 203.- Efectos de la caducidad del proceso

La caducidad extingue el proceso y se tendrá como no interpuestas las pretensiones de la parte que incumpliere y se le condenará al pago de las costas, salvo casos excepcionales a criterio de la autoridad judicial.

Cuando se trata de procesos con pretensiones de ambas partes, se continuará con las de la otra parte.

TÍTULO VII Consecuencias económicas del proceso

Capítulo I: Costas

Artículo 204.- Imposición de costas

Toda resolución que le ponga fin a un proceso contencioso impondrá al pago de las costas a la parte vencida. Podrá eximirse cuando se estime que la parte litigó con evidente buena fe, no procedieron todas las pretensiones o se acojan las de ambas partes en forma total o parcial.

Se considerarán costas los honorarios del profesional en abogacía, la indemnización del tiempo invertido por la parte en asistir a las actuaciones judiciales en que fuere necesaria su presencia y los demás gastos indispensables del proceso.

Artículo 205.- Costas en casos de pluralidad subjetiva

Cuando exista pluralidad de personas obligadas en costas, se determinará si la imposición es solidaria o divisible. En caso de resultar divisible se indicará la distribución de la responsabilidad.

Cuando fueron varias las personas acreedores de las costas, el monto establecido aprovechará a todas por partes iguales, salvo que se justifique una distribución diferente.

Artículo 206.- Honorarios de auxiliares en el proceso

Lo relativo a los honorarios de personas ejecutoras, peritas y otras auxiliares judiciales se regulará según los reglamentos y circulares que emanen del Poder Judicial.

Ninguna persona que labore para el Poder Judicial podrá percibir remuneración o retribución de las partes por el desempeño de su función.

Capítulo II: Honorarios del profesional en abogacía

Artículo 207.- Fijación

Los honorarios se fijarán conforme lo establecen la Ley Orgánica del Colegio de Abogados y el decreto de Arancel de Honorarios de profesionales en abogacía y notariado.

Artículo 208.- Petición conjunta de fijación de honorarios

La parte y su profesional en abogacía podrán solicitar a la autoridad judicial la fijación de los honorarios, lo que deberá resolverse en forma inmediata.

Artículo 209.- Cobro unilateral de honorarios

Cuando no existe acuerdo entre la persona profesional y su cliente, aquel podrá solicitar al despacho, en forma unilateral, su fijación. La petición deberá presentarse, bajo pena de caducidad de la vía, dentro del año siguiente a la separación de la persona abogada o la terminación del proceso. Tal petición se sustanciará en pieza separada en el mismo proceso y no suspenderán su tramitación.

De la solicitud se dará audiencia a la parte que representó para que en cinco días manifieste por escrito si acepta o no la liquidación presentada. La autoridad fallará el asunto sin más trámite, salvo prueba que recabar, en cuyo caso se convocará a una audiencia según las normas de este Código.

La resolución final tendrá efectos de cosa juzgada material.

Artículo 210.- Fijación contractual de honorarios

Las personas profesionales en abogacía y sus clientes podrán fijar contractualmente el monto de los honorarios y sus modalidades de pago, respetando los límites impuestos por la normativa profesional. Dicha estipulación

no afectará a las partes contrarias del proceso, para efectos de fijación de costas personales.

Artículo 211.- Convenio de cuota litis

El convenio de cuota litis será procedente en asuntos patrimoniales o con trascendencia económica. Deberá constar por escrito y la cantidad pactada no podrá exceder el veinticinco por ciento (25%) que se obtenga en el proceso respectivo, sin importar la naturaleza de dicho proceso. Para la validez del convenio, la persona profesional deberá asumir los gastos del asunto y supeditar su cobro el resultado económico favorable para su cliente.

Cuando no se obtenga resultado económico en ese proceso, pero si resultado positivo para las partes de las pretensiones, los honorarios se fijarán prudencialmente por la autoridad judicial.

Será nula cualquier estipulación que conceda mayores beneficios a favor de la persona abogada, aún por intermedio de terceros y la cesión que se haga con la finalidad de permitir el ejercicio ilegal de la profesión.

Los profesionales en derecho no podrán cobrar suma alguna si han renunciado al proceso sin justa causa. Si la separación se diere por imposibilidad legal o material antes de que el proceso concluya, tendrá derecho a los honorarios que le hubieren correspondido si no existiera el contrato de cuota litis. Cuando se suscribiere con varias personas procesionales se establecerán las obligaciones de cada una; el porcentaje estipulado se distribuirá proporcionalmente entre ellas o conforme a lo pactado y la separación de una de ellas no implica terminación del contrato, salvo disposición en contrario.

LIBRO SEGUNDO LOS PROCESOS

TÍTULO I Disposiciones generales

Capítulo I: Aplicaciones generales

Artículo 212.- Indicación de procesos

Toda pretensión de carácter familiar se tramitará, según su naturaleza, en los siguientes procesos:

- 1.- Resolutivos familiares.
- 2.- De protección cautelar.
- 3.- De petición unilateral.
- 4.- Resolutivos especiales.
- 5.- De ejecución de resoluciones judiciales.

Artículo 213.- Pretensiones sin procedimiento regulado

Las pretensiones que no tengan una tramitación especial en este Código se regirán por el trámite que la autoridad judicial determine y que mejor se ajuste a la oportuna solución del conflicto conforme a los principios de este Código.

Artículo 214.- Documento sobre la representación.

La parte actora, cuando sea necesario, debe presentar los documentos para acreditar la personería con la demanda o la gestión previa cautelar. La parte accionada debe presentarlos al momento de la audiencia inicial o al contestar en forma escrita; pero no se exigirá acreditar la personería de los padres cuando actúan en representación de sus hijos o hijas menores de edad. Las partes no estarán obligadas a indicar los nombres de representantes ni a presentar documentos de personería de las personas jurídicas demandadas.

Capítulo II: La demanda

Artículo 215.- Requisitos de la demanda

La demanda, en cualquier tipo de proceso, deberá contener como mínimo los siguientes requisitos:

- 1.- Nombres, calidades, número de documento de identificación y domicilio de las partes; sin perjuicio de que ante la imposibilidad de la parte actora de suministrar los datos completos de identificación, se inicie el proceso con la obligación de las partes de hacerlos llegar durante la tramitación del mismo. Cuando por la existencia de situaciones de riesgo a la integridad de las partes se amerite, las calidades y domicilio se indicarán por aparte para manejo exclusivo y restringido del despacho.
- 2.- Exposición clara de los hechos en que se basa lo pretendido.
- 3.- Las pretensiones del proceso, especificando las principales, subsidiarias y accesorias y su fundamentación normativa sustancial.
- 4.- La estimación de los daños y perjuicios cuando se solicitan en forma accesorias con indicación de los hechos que los originan.
- 5.- Ofrecimiento de las pruebas y aporte de las documentales.
- 6.- Informar al despacho de cualquier tipo de litigio en el cual se discuten pretensiones relacionadas con las partes o de las personas a quienes representan. Se deberán indicar los datos requeridos para su identificación.

7.- Señalar medio y lugar, en los casos en que procede, para recibir notificaciones futuras y el lugar en el cual se debe notificar el curso de la demanda.

Artículo 216.- Corrección de la demanda

La autoridad judicial apercibirá corregir cualquier omisión que impida cursar la demanda o la gestión inicial. Para su cumplimiento se otorgará a la parte actora un plazo de cinco días para cumplir.

Artículo 217.- Rechazo de plano e improcedencia de la demanda

La autoridad judicial declarará improponible la demanda y la rechazará de plano cuando se evidencie claramente alguno de los siguientes supuestos:

- 1.- Caducidad.
- 2.- Cosa juzgada material.
- 3.- Litis pendencia.
- 4.- Improcedencia por el objeto o la causa propuesta.

Para determinar esta situación el despacho tomará en cuenta lo expresado en la demanda, los documentos aportados con ella y cualquier antecedente del que tenga conocimiento por haber tramitado o estar tramitando en el propio despacho judicial o en otro.

Artículo 218.- Ampliación y modificación de pretensiones

La demanda podrá ser ampliada o modificada en cuanto a las partes y pretensiones pero siempre antes de ser contestada. En este caso el despacho deberá otorgar nuevo emplazamiento.

Únicamente en el proceso resolutivo familiar, definidos los hechos y pretensiones, se admitirá la ampliación de los hechos cuando es presentada en la audiencia de prueba, antes de su recepción; de lo cual se conferirá audiencia a la parte contraria.

Artículo 219.- Citaciones y emplazamientos a personas residentes en el extranjero

Cuando se deba notificar personalmente una citación previa o una demanda a una persona que reside en el extranjero, se otorgará un plazo mínimo de quince días, el cual podrá ampliarse por la lejanía del país, la naturaleza del proceso y sus pretensiones.

Artículo 220.- Efectos de la presentación de la demanda y del emplazamiento

El emplazamiento o la convocatoria a la audiencia previa, debidamente notificada tienen como efecto procesal prevenir el conocimiento del asunto al despacho y sujetar a las partes al proceso en caso de que no exista oposición, además de que produce la interrupción de la prescripción.

Artículo 221.- Requisitos de la contestación

Al contestar la demanda, la parte demandada deberá referirse a cada uno de los hechos y pretensiones, además deberá ofrecer la prueba aportando la de tipo documental. La autoridad judicial prevendrá que se complete la contestación cuando no sea acorde con lo normado, lo que se indicará se haga al momento en caso de contestación verbal en audiencia o en tres días si se trata de una contestación escrita.

TÍTULO II

El proceso resolutivo familiar

Capítulo I: Normas generales

Artículo 222.- Pretensiones

En el proceso resolutivo familiar se conocerán las pretensiones relacionadas con:

- 1.- El vínculo matrimonial
- 2.- El reconocimiento de la unión de hecho.
- 3.- La aplicación del régimen patrimonial del matrimonio y de la unión de hecho.
- 4.- La filiación y la oposición de la adopción.
- 5.- La oposición a la declaratoria de adoptabilidad en sede administrativa.
- 6.- Los conflictos en el ejercicio de los atributos de la responsabilidad parental referidos al cuidado personal de hijas e hijos y modificaciones de sentencias sobre estas pretensiones que no se tramiten en la vía de petición unilateral.
- 7.- La pérdida, con petición o no de adoptabilidad, y la suspensión de los atributos de la responsabilidad parental.
- 8.- La oposición válida y definida por la autoridad judicial a la declaratoria de insania.
- 9.- Los reclamos de daños y perjuicios.
- 10.- Cualquier otra que indique ley.

Capítulo II: Procedimiento de conciliación previa

Artículo 223.- Convocatoria a audiencia de conciliación

Presentada la demanda en forma, en los casos en que procede y dentro de los siguientes diez días hábiles, se citará a las partes a una audiencia en la que se intentará la conciliación previa a todo trámite. Para poder llevar a cabo esta audiencia en el momento señalado, el tribunal podrá solicitar la intervención del personal profesional del Centro de Resolución Alternativa de Conflictos del Poder Judicial.

Artículo 224.- Realización de la audiencia

Las partes comparecerán a la audiencia en forma personal con su representante legal, salvo aquellos asuntos en los que no se obliga al patrocinio letrado.

Podrán comparecer a través de poder especialísimo siempre y cuando en el poder se hayan establecido en forma expresa los extremos a conciliar y las propuestas del arreglo.

La autoridad judicial invitará a las partes a conciliar, evitará el lenguaje adversarial y solicitará mantener una conducta respetuosa y conciliadora, evitando discusiones acerca de los hechos que motivaron el conflicto.

Si las partes llegan a un acuerdo parcial o total en las pretensiones, el despacho en ese mismo momento homologará el acuerdo y ordenará, si fuere del caso y lo piden las partes, la ejecución de esos acuerdos.

Artículo 225.- Desistimiento tácito de la demanda

En el supuesto de que la parte accionante no comparezca a la audiencia se tendrá por desistida la demanda sin recurso alguno y se ordenará su archivo y la autoridad judicial podrá, cuando proceda, condenarle al pago de las costas.

Queda a salvo de este archivo cuando se trata de una demanda en la cual se discuten derechos de personas menores de edad, personas con capacidades especiales o en situación de vulnerabilidad de género y que pueda seguirse el proceso bajo la representación legal que corresponda.

Artículo 226.- Registro de la audiencia

De lo actuado en la audiencia previa de conciliación, se levantará un acta lacónica indicando la existencia o no del arreglo. En este último caso no será necesaria la firma de las personas presentes, sino únicamente de quien la presidió.

Capítulo III: Trámite del procedimiento

Sección I: Etapa de definición del proceso

Artículo 227.- Procedimiento en caso de fracaso de la conciliación

Fracasada la conciliación, en forma verbal el demandado contestará la demanda en los términos establecidos en este Código pudiendo invocar las excepciones pertinentes.

La autoridad judicial prevendrá que se complete la contestación cuando no sea acorde con lo normado, lo que se indicará se haga al momento dentro de la audiencia.

De ser posible, en la misma audiencia se pondrá en conocimiento a la otra parte.

Artículo 228.- Consecuencias de la ausencia del demandado a la audiencia previa

En caso de que la parte accionada no se hubiera apersonado a la audiencia previa, admitida la demanda, se tendrá por notificada y sin contestación y se continuará hasta la fijación de la audiencia de prueba si fuere procedente; todo con ausencia de la parte demandada, quien podrá apersonarse al proceso en cualquier momento y tomarlo en el estado en que se encuentre.

Artículo 229.- Pretensiones de la parte demandada y contestación

Al momento de contestar la demanda la parte accionada podrá formular pretensiones contra la parte actora o cualquier otra persona, para lo cual precisará los hechos en que se motivan y ofrecerá las pruebas que considere de su interés, aportando las de tipo documental. De las pretensiones se dará traslado verbal a la parte actora para que se refiera a ellas, quien podrá interponer las excepciones que considere oportunas y ofrecerá la prueba de descargo. Todo lo anterior siempre y cuando se trate de pretensiones vinculadas con la situación familiar y de acuerdo con el principio de abordaje integral.

En caso de formulación de pretensiones por parte del demandado contra un tercero, la autoridad judicial decidirá la admisión de la misma y en ese caso pondrá en conocimiento a la parte actora presente y ordenará notificar al tercero, a quienes invitará a una nueva audiencia con todas las partes, la cual se deberá realizar cinco días después de la primera audiencia, en ella tanto la parte actora como el tercero contestarán los hechos y podrán interponer excepciones y proponer la prueba pertinente aportando la de tipo documental. De no asistir el tercero estando debidamente notificado, el proceso seguirá y se tendrá por apersonado al proceso y si la parte actora no asiste se tendrá por contestada en

esas pretensiones del demandado. En este caso, el procedimiento seguirá en forma diferida según el artículo siguiente.

Artículo 230.- Contestación diferida y audiencia

El despacho podrá, a petición de la parte accionada al momento de iniciar esta fase y cuando lo estime necesario, diferir la contestación de la demanda, para lo cual señalará una nueva audiencia al quinto día posterior a la audiencia para que el demandado conteste con las formalidades previstas en este Código. En caso de contestación incompleta, se pedirá su subsanación en el acto.

En la misma contestación la parte demandada podrá deducir hechos y pretensiones propias en forma escrita de lo que se dará traslado verbal al actor o contra quién se dirige, si es contra el actor allí mismo se contestará la demanda, opondrá excepciones y ofrecerá y aportará la prueba documental; si es un tercero se procede conforme al artículo anterior, con nueva audiencia para que el tercero la conteste e interponga las excepciones y proponga la prueba que estime oportuna, aportando la de tipo documental.

En esta audiencia la parte actora contestará la demanda y demás actuaciones que pueda establecer.

Artículo 231.- Allanamiento

En los procesos en los cuales es posible allanarse a las pretensiones de la contraria, en virtud del objeto debatido, se procederá con el dictado del fallo en lo aceptado en forma dispositiva y dentro del tercer día se dictará y notificará el fallo en su totalidad.

Artículo 232.- Planteamiento de excepciones

Únicamente se admitirán las siguientes excepciones de carácter procesal:

- 1.- Falta de competencia
- 2.- Falta de capacidad o defectos en la representación
- 3.- Litis consorcio necesario
- 4.- Litispendencia
- 5.- Cosa juzgada
- 6.- Caducidad
- 7.- Transacción

Al formularse cualquiera de estas excepciones, se deberá fundamentar y ofrecer la prueba. La autoridad judicial podrá rechazarlas de plano si las estima infundadas, improcedentes o porque tengan como finalidad un abuso procesal.

En la audiencia inicial del proceso estas excepciones se contestarán y se resolverán, salvo que se haya diferido la fase para conocerse en forma escrita, se resolverán de esa forma y se notificará.

Sección II: Fase probatoria y de conclusión del proceso

Artículo 233.- Actuaciones en la audiencia de prueba del proceso

En la audiencia inicial o en la segunda audiencia en caso de contestación diferida, una vez establecidos los hechos y pretensiones de las partes y resueltas las excepciones procesales, se resolverá cualquier gestión atinente al proceso, se admitirá la prueba ofrecida y se convocará a la audiencia de prueba, sin perjuicio de que por acuerdo de partes, y de ser procedente se lleve a cabo inmediatamente.

La audiencia deberá verificarse dentro del mes siguiente a su señalamiento, salvo razones probatorias o de otra índole debidamente justificadas que ameritan un plazo mayor.

En la audiencia de prueba se realizarán las siguientes actuaciones:

- 1.- Explicación clara a las partes de las funciones que cada una asume, sus derechos y deberes, las oportunidades de participación, las consecuencias de su desatención y la obligación de mantener un comportamiento adecuado; con una actitud no adversarial y la necesaria anuencia de las partes e intervinientes a no tomar la audiencia como propicia para el agravamiento de conflictos.
- 2.- Instar a las partes a considerar una forma alterna de la solución del conflicto.
- 3.- Resolución de cualquier cuestión procesal interlocutoria que haya sido formulada antes de esta audiencia o durante esta. Si se trata de medidas cautelares que deben ser revisadas, se procederá con el trámite de la gestión, sin perjuicio de que lo haga en cualquier momento en la audiencia.
- 4.- Práctica de la prueba
- 5.- Las partes expresarán sus conclusiones, para lo cual el tribunal regulará el tiempo de las intervenciones.
- 6.- El dictado de la parte dispositiva de la sentencia. En casos de especial complejidad, mediante resolución debidamente fundamentada al concluir la audiencia, se podrá diferir este dictado dentro de un plazo máximo de tres días, a lo cual se convocará a las partes. En todo caso, la sentencia integral deberá ser dictada y

notificada en los medios señalados dentro del quinto día posterior a la parte dispositiva.

TÍTULO III **Procesos de protección cautelar**

Capítulo I: Disposiciones especiales

Artículo 234.- Objeto de regulación

Mediante el presente título se regula el procedimiento para la protección de las personas en condición de vulnerabilidad, salvo aquellos regulados por leyes especiales.

Los procesos de protección para personas menores de edad en sede administrativa se regirán por lo dispuesto en el Código de la Niñez y la Adolescencia; y en la sede jurisdiccional se conocerán las situaciones suscitadas a partir del dictado de las medidas de protección administrativas, esto mediante el procedimiento establecido en este título.

Artículo 235.- Legitimación especial

Cualquier persona puede comparecer, en nombre de otra, a solicitar el proceso de protección. En caso de personas menores de doce años de edad y cuando no se trate del procedimiento de protección de niñez y adolescencia, el despacho llamará a una persona representante del Patronato Nacional de la Infancia para que asuma la representación e inicie el procedimiento.

Artículo 236.- Conocimiento previo del Patronato Nacional de la Infancia

En materia de protección de niñez y adolescencia en vía judicial, previa a acceder a esta vía es necesario que el caso se haya conocido en el Patronato Nacional de la Infancia.

Artículo 237.- Medidas de protección para la tutela de derechos

Para la tutela de los derechos se podrán decretar las siguientes medidas de protección:

- 1.- Suspender o modificar provisionalmente cualquier medida o acuerdo conciliatorio extrajudicial que viole o amenace violar los derechos consagrados en la normativa sustantiva.
- 2.- Ordenar en forma inmediata la atención de carácter médico, educativo u otro, que requiera la situación.

- 3.- Nombrar a una persona como representante específica cuando exista interés contrapuesto.
- 4.- Ordenar el pago de una pensión alimentaria provisional, en cuyo caso una vez establecida se deberá enviar de inmediato el correspondiente legajo al despacho de la materia alimentaria competente para que se continúe con el procedimiento según el trámite previsto en este código.
- 5.- Ordenar el cumplimiento de cualquier medida de carácter personal que se requiera para el desarrollo integral y el mantenimiento de la salud física o emocional. Para ello ordenará la colaboración de las instituciones públicas correspondientes.
- 6.- Confiar provisionalmente el cuidado de personas menores de edad, adultas mayores o con discapacidad hasta que se resuelva lo pertinente en el proceso respectivo.
- 7.- Cualquier otra medida necesaria para la protección de derechos fundamentales de la persona agredida.

Capítulo II: Del procedimiento de protección

Artículo 238.- Contenido de la solicitud

La solicitud deberá contener, como mínimo, los datos que identifique a la persona solicitante de la medida y de la persona contra quién se solicite la medida; su grado de parentesco si lo hubiere o bien el interés que defiende, los datos de identificación de la persona que se pretende tutelar y el domicilio de todos con indicación de medio para notificaciones y el ofrecimiento de la prueba respectiva.

Artículo 239.- Otorgamiento de medidas provisionales

Presentada la solicitud y de considerarse procedente, se dictarán, sin mayor trámite, las medidas provisionales que la autoridad judicial considere oportunas.

Cuando se muestre inconformidad fundada dentro de los cinco días siguientes a la última notificación a las personas interesadas, el juzgado convocará a las partes a una audiencia en la que se evacuarán las pruebas que correspondan.

La audiencia se realizará dentro de los quince días siguientes, momento en el cual deberá constar en autos la pericia de tipo médica, psicológica, social u otra.

Artículo 240.- Resolución final

Recibida la prueba, se procederá de inmediato al dictado de la parte dispositiva de la sentencia. La sentencia integral deberá ser dictada y notificada en los medios señalados dentro del plazo de tres días.

La resolución podrá confirmar la medida dispuesta, prorrogarla por un período igual, sustituirla por otra o revocarla.

Se podrá iniciar de oficio el proceso correspondiente para definir la situación jurídica de la persona vulnerabilizada respecto de la persona que ejerce sobre aquella atributos de depósito, tutela, curatela o responsabilidad parental.

Artículo 241.- Delegación de ejecución

El tribunal dará el seguimiento al cumplimiento de la resolución dictada. Cuando se trate de alguna de las medidas de protección previstas para la sede administrativa o las aplicables para los padres, madres o responsables de las personas menores de edad, podrá delegar la ejecución de lo acordado para proteger a la persona menor de edad en la oficina local competente del Patronato Nacional de la Infancia, el que deberá brindar informes sobre dicho cumplimiento dentro del plazo señalado. Tratándose de otras personas en estado de vulnerabilidad el seguimiento se podrá delegar en las instituciones competentes.

TÍTULO IV Procesos de petición unilateral

Artículo 242.- Aplicación del procedimiento

Se tramitarán como procesos de petición unilateral las siguientes:

- 1.- Nombramiento de personas tutoras para personas menores de edad, en aquellos casos en que no se ha establecido como pretensión subsidiaria de un proceso de terminación de los atributos de la responsabilidad parental.
- 2.- Nombramiento de personas curadoras para personas con discapacidad.
- 3.- Nombramiento de personas depositarias para personas menores de edad en los casos en los cuales no corresponde el nombramiento como medida subsidiaria en procesos judiciales relativos a la resolución de la responsabilidad parental de los padres.
- 4.- Autorizaciones para la disposición de derechos en bienes de personas menores de edad o personas con discapacidad.

- 5.- Autorización de la dispensa del consentimiento de los padres o representantes para matrimonio de personas menores de edad.

Artículo 243.- Intervención de instituciones públicas y otras personas

La autoridad judicial podrá dar intervención a cualquier institución pública que represente los intereses de personas con discapacidad o adultas mayores.

Cuando se trate de personas menores de edad, la autoridad judicial valorará la posibilidad de darle intervención a la madre o al padre en ejercicio de los atributos de la responsabilidad parental que no ha intervenido en la gestión.

En el caso de nombramiento de persona curadora para una persona con discapacidad se deberá notificar a todas aquellas personas que figuren como sus hijas, padres, cónyuge o conviviente de hecho.

Artículo 244.- Requisitos de la petición

La petición se presentará por escrito o mediante actuación verbal ante el despacho en forma clara. Deberá contener los datos necesarios de identificación, los hechos que la motivan, ofrecer la prueba aportando la documental e indicar el medio para atender notificaciones.

Artículo 245.- Audiencia y sentencia

Notificadas las personas intervinientes y llegada a los autos las pruebas solicitadas, se convocará a una audiencia, a la que se podrá hacer llegar la persona en cuya favor se promueve la diligencia. Se escuchará a las personas solicitantes, parientes y afectadas, se analizarán los informes periciales y se recibirá la prueba testimonial que se haya admitido.

Posterior a ello y previa audiencia de conclusiones si fuere necesario, se procederá de inmediato al dictado de la parte dispositiva de la sentencia y la sentencia integral deberá ser dictada y notificada dentro del plazo de tres días.

Artículo 246.- Modificaciones materiales de lo dispuesto

Acogida la petición, a gestión de parte y en cualquier tiempo, se podrá hacer modificaciones a lo pronunciado mediante resolución, siempre y cuando las circunstancias lo ameriten y no se varíe en lo sustancial lo resuelto.

Artículo 247.- Oposición fundada

Si existiera oposición fundada a las diligencias presentadas, se valorará su procedencia. En caso de que la contención no pudiera resolverse en el mismo proceso, así se razonará y se deberá continuar el trámite mediante las normas del

proceso resolutivo familiar, para lo cual la autoridad judicial tomará las medidas pertinentes.

TÍTULO V Procedimientos especiales

Capítulo I: Procesos en materia de pensiones alimentarias

Sección I: Disposiciones generales

Artículo 248.- Ámbito de aplicación

Las pretensiones alimentarias derivadas de las relaciones familiares tendiente a la imposición y demás situaciones de la cuota de pensión alimentaria se tramitarán de acuerdo con las disposiciones de este capítulo y las gestiones de las partes e intervinientes podrán ser verbales o escritas.

Artículo 249.- Integración de procedimientos según principios sustantivos

Al aplicarse esta normativa procesal, las normas y las situaciones de hecho se interpretarán siempre tomando en cuenta el interés de la persona beneficiaria y el principio de la responsabilidad de cumplimiento de la obligación alimentaria; además de los principios de celeridad, informalidad, sencillez, oficiosidad y sumariedad.

Artículo 250.- Carga probatoria y dinamicidad de la prueba

La carga probatoria corresponderá a quien niegue o se oponga a los ingresos y formas económicas indicadas por la parte acreedora, la responsabilidad en el aporte de la misma corresponderá a quién tenga mejores elementos para entregarla al despacho.

Artículo 251.- Ejecución de obligaciones establecidas en otros procesos

Si en otro proceso se estableciere por acuerdo conciliatorio o por decisión judicial una obligación alimentaria cuantificada derivada de la relación familiar, se deberá enviar las piezas necesarias para su debida ejecución al despacho de pensiones alimentarias que por competencia territorial corresponda.

Cuando se hubiera llevado a cabo algún tipo de acuerdo conciliatorio ante el Patronato Nacional de la Infancia, cualquiera de las partes podrá iniciar el trámite de ejecución de lo acordado. También podrán ejecutarse en esta vía, los montos pactados o establecidos mediante los mecanismos previstos en la Ley de Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social. En ambos supuestos no se requiere la homologación del despacho judicial. En todo caso,

cualquier discusión acerca del contenido o validez del acuerdo se tramitará ante la autoridad de la materia alimentaria mediante el proceso resolutorio familiar, sin perjuicio de la ejecutividad del monto pactado en tanto se discute aquella pretensión.

Artículo 252.- Restricción migratoria e índice de personas obligadas

A fin de poder salir del país, toda persona deudora de una obligación alimentaria establecida judicialmente deberá contar con la respectiva autorización de la parte acreedora de la obligación, salvo que garantice el cumplimiento de todos los pagos correspondientes a un año, incluyendo el aguinaldo y el salario escolar o los gastos derivados de inicio de lecciones en caso de estar obligado con cuota fija.

El Poder Judicial y la Dirección General de Migración y Extranjería, contarán con un índice de personas obligadas alimentariamente, para lo cual las autoridades judiciales deberán enviar en forma inmediata, por los medios más eficientes y seguros posibles, cualquier tipo de imposición alimentaria que se haga, salvo que la parte actora manifieste expresamente no tener interés en esa comunicación, sin perjuicio de la posibilidad de solicitarlo posteriormente.

Artículo 253.- Efectos de las resoluciones en materia alimentaria

Ninguna resolución dictada conforme este capítulo sobre el monto de cuota alimentaria constituirá cosa juzgada material; lo decidido podrá ser modificado por medio de los procedimientos establecidos en este Código.

Artículo 254.- Representaciones especiales

Tendrán personería para demandar alimentos en favor de personas menores de edad o personas con capacidad disminuida, declarada o no, sus representantes legales cuando tengan a su cargo a esas personas y en su defecto, sus simples guardadores quienes podrán probar tal circunstancia por los medios a su alcance, incluyendo quienes actúan como representantes de las instituciones públicas o privadas a cuyo cargo se encuentran estas personas.

Artículo 255.- Obligaciones patronales y sanciones

Ningún patrono, persona física o representante legal de entidad jurídica, podrá negar información acerca de los salarios y otros ingresos de la persona deudora de alimentos. La negativa a indicarlo o la falsedad en lo expresado lo hará incurrir en los delitos de desobediencia a la autoridad o falsedad de documentos públicos o privados contemplados en el Código Penal.

Artículo 256.- Pago obligatorio de los alimentos

No será excusa atendible para oponerse a la fijación de la cuota de pensión alimentaria el no tener trabajo, salario o ingresos; tampoco que los negocios no produzcan utilidades, todo sin perjuicio del análisis de la prueba y de las averiguaciones que, de oficio o a solicitud de parte, ordene el tribunal.

Si se ocultaren o distrajeren bienes o ingresos, se testimoniarán piezas ante el Ministerio Público a fin de que se determine si se está en presencia de una actividad delictiva.

Artículo 257.- Embargo para el cobro de cuotas retroactivas de alimentos

A fin de hacer efectivo el cobro de las cuotas alimentarias retroactivas que establece el artículo 96 del Código de Familia, se puede ordenar, a pedido de la parte ejecutante, el embargo de bienes de la persona obligada en cantidad suficiente para cubrir lo adeudado, intereses legales y costos de la ejecución.

Sección II: Procedimiento principal de fijación de cuota alimentaria

Artículo 258.- Contenido de la demanda

La demanda deberá contener, en lo compatible, los requisitos establecidos en este Código. No será necesario indicar medio o lugar para notificaciones, en cuyo caso las notificaciones serán por estrados.

Cuando se pretenda alimentos para dos o más personas, deberá expresarse la pretensión del monto a imponer para cada una.

En la demanda se podrá solicitar la orden de retención salarial, sin perjuicio de poder pedirlo posteriormente

Si la demanda no cumple con los requisitos y ello impide iniciar el procedimiento, se procederá con el trámite de prevención de inadmisibilidad previsto en este Código

Artículo 259.- Rechazo de plano

La demanda se rechazará de plano cuando sea evidente la inexistencia del derecho o cuando se tenga conocimiento de la existencia de otro proceso en el cual se discute la misma obligación.

Artículo 260.- Audiencia previa de conciliación

Si la demanda es admisible, dentro de los diez días hábiles a la presentación de la demanda o de su corrección, el tribunal convocará a las partes

a una audiencia previa de conciliación con el fin de avenir a las partes a un arreglo conciliatorio acerca de la obligatoria alimentaria. El despacho podrá consultar antes de esa audiencia la información de planillas reportadas ante la Caja Costarricense de Seguro Social o verificar cualquier dato de ingreso salarial de la persona deudora directamente ante su ente patronal o de registros de bienes por los medios que considere prudentes.

Artículo 261.- Sentencia anticipada

Si no se pudiese realizar la audiencia previa o no prosperare en ella una conciliación entre las partes, se procederá al dictado de una resolución con carácter de sentencia anticipada que deberá contener:

- 1.- La razón y fundamento de la existencia del derecho para la prestación alimentaria.
- 2.- El monto razonado de la cuota alimentaria mensual para cada una de las personas beneficiarias.
- 3.- Indicación de obligación de pago de la cuota de aguinaldo y de salario escolar o gasto de inicio de lecciones, según proceda.
- 4.- Advertencia de la existencia del aumento automático de la cuota alimentaria de acuerdo con lo normado en este Código.
- 5.- En caso de haberse pedido y de que haya existido la condena en el proceso respectivo, la fijación del monto de pago de las cuotas alimentarias retroactivas y los gastos de embarazo y maternidad cuando corresponde en esta sede, ambas reguladas en el artículo 96 del Código de Familia.
- 6.- Apercibimiento de la existencia del apremio corporal a pedido de parte en caso de no cumplimiento de la obligación alimentaria.
- 7.- Apercibimiento a la persona demandada para la oposición a la sentencia anticipada y la indicación de la facultad de establecer medio o lugar para escuchar notificaciones futuras.
- 8.- La orden de retención salarial que haya sido solicitada y en la cual se tenga la información necesaria para ello.
- 9.- La orden de inclusión en el índice de personas obligadas.

A fin de notificar esta resolución, a criterio del despacho por haberse agotado otras posibilidades, se podrá ordenar allanamiento del lugar en donde se oculte la persona deudora; esta actuación será verificada por la autoridad judicial

que conoce del asunto u otra debidamente comisionada al efecto según los procedimientos dados en el Código Procesal Penal.

Artículo 262.- Plazo para oposición

Las partes podrán oponerse a la sentencia anticipada en el plazo de cinco días. La oposición no suspenderá sus efectos sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia final.

La oposición a la sentencia anticipada deberá contener una concreta y clara referencia a los hechos de la demanda, las pretensiones que se solicitan y el ofrecimiento de la prueba de su interés.

Artículo 263.- No oposición a la sentencia anticipada

Si ninguna de las partes se manifiesta disconforme en tiempo con lo establecido en la sentencia anticipada, se continuarán los procedimientos de ejecución de cobro de los montos allí establecidos sin necesidad de ulterior trámite.

Artículo 264.- Convocatoria a audiencia

Planteada en tiempo la oposición de alguna de las partes, se convocará a una audiencia a realizarse dentro de los quince días siguientes a la presentación de la oposición o del vencimiento del plazo si solo una de las partes se opone. En esa misma resolución se pondrá en conocimiento la oposición, se admitirán las pruebas ofrecidas por las partes y se advertirá de la obligación de presentar estas el día de la audiencia. En ese acto se verificarán las siguientes actuaciones:

- 1.- Se instará a las partes a la consideración de una forma alterna a la solución del conflicto. En caso de considerarse necesario, podrá llamarse a la audiencia a cualquier profesional especialista en resolución alterna de conflictos para el tratamiento de esta fase.
- 2.- De no existir conciliación se practicará la prueba de carácter interlocutoria y resolverá cualquier cuestión procesal interlocutoria que haya sido planteada antes o en la misma audiencia, incluyendo las excepciones procesales establecidas en la oposición.
- 3.- Práctica de las pruebas admitidas.
- 4.- Las partes expresarán sus conclusiones en forma breve.
- 5.- Se procederá al dictado de la parte dispositiva de la sentencia. La sentencia integral deberá ser dictada y notificada dentro del plazo de tres días.

La indicación del monto pedido en la demanda no implicará limitación alguna para la fijación de la cuota alimentaria.

Artículo 265.- Procedimiento de inclusión de persona beneficiaria

Cuando se pretende incluir una persona beneficiaria en un proceso ya instaurado contra el mismo deudor alimentario del principal, el despacho deberá llevar a cabo el procedimiento de este apartado, debiendo ajustar el trámite al caso concreto con respeto al debido proceso.

Artículo 266.- Procedimiento para el cobro de las sumas derivadas de la restitución de cuotas alimentarias

Para el cobro de las sumas adeudas por la restitución de cuotas alimentarias que establece el artículo 168 del Código de Familia, quién tenga legitimación deberá llevar a cabo la respectiva petición, de lo que se dará audiencia por tres días a la otra parte y posterior a ello se resuelve decidiendo el monto debido, cuyo cobro se hará en el mismo proceso, según lo normado en las normas relativas a los cobros judiciales de los títulos ejecutorios.

Artículo 267.- Suspensión del cobro de la obligación alimentaria definitiva

Existiendo sentencia firme de fijación de cuota alimentaria, la ejecución se puede suspender por acuerdo de partes o a solicitud de la parte actora. La ejecución no podrá reanudarse hasta tanto no exista manifestación expresa de la parte actora de reiniciar los procedimientos. En este caso deberá notificarse personalmente o en casa de habitación a la persona obligada. En tanto se mantenga esa suspensión quedará sin efecto el impedimento migratorio.

Sección III: Procedimientos de extinción o modificación de la cuota fijada de alimentos y cobro de gastos extraordinarios no pactados

Artículo 268.- Disposición general y proposición

El trámite de modificación o exoneración de la cuota de pensión alimentaria y el cobro de gastos extraordinarios se hará en legajo separado. Una vez firme la resolución que se dicte el legajo será agregado al expediente principal.

La persona interesada hará la solicitud mediante escrito o en forma verbal ante el despacho exponiendo los motivos en que se basa y su pretensión concreta y debe ofrecer las pruebas respectivas, aportando la documental. Si la gestión está incompleta, se aplicará el procedimiento de inadmisión previsto en este Código. Si fuere infundada, se rechazará de plano.

Artículo 269.- Audiencia única

Estando en forma la petición, el despacho convocará a una audiencia a las partes, con notificación personal a la persona accionada, resolución en la cual se le pondrá en conocimiento de los hechos de la gestión y que puede hacer llegar la prueba idónea.

La audiencia se desarrollará de la siguiente forma:

- 1.- Explicación clara de los derechos y deberes de los participantes.
- 2.- Invitación a las partes a conciliar. En caso de considerarse necesario, podrá llamar a la audiencia a cualquier profesional especialista en resolución alterna de conflictos para el tratamiento de esta fase.
- 3.- Audiencia a la parte contraria acerca de los hechos.
- 4.- Práctica de prueba interlocutoria y resolución de cualquier cuestión procesal que haya sido planteada antes o durante la audiencia.
- 5.- Admisión y práctica de las pruebas ofrecidas u ordenadas de oficio.
- 6.- Las partes expresarán sus conclusiones en forma breve.
- 7.- Se procederá al dictado de la parte dispositiva de la sentencia. La sentencia integral deberá ser dictada y notificada dentro del plazo de tres días.

Artículo 270.- Aumento automático de la cuota alimentaria

El monto de la cuota alimentaria se actualizará de oficio, en virtud del aumento del costo de la vida, de la siguiente forma:

- 1.- Para la persona obligada no asalariada en forma anual en el mes de enero, en un porcentaje igual a la variación del salario establecido según lo descrito en el artículo segundo de la Ley N.º 7337 del 5 de mayo de 1993.
- 2.- Para la persona obligada asalariada cada seis meses en los meses de enero y julio, en forma porcentual de acuerdo con el aumento de ley decretado por el Estado para el sector público o privado, según corresponda.

En todo caso, si al momento de establecer el monto vigente se había tomado en cuenta ese aumento próximo, se realizará hasta el próximo período.

Sección IV: Ejecución de la deuda alimentaria

Artículo 271.- Exigibilidad de la obligación alimentaria

La cuota alimentaria establecida en el acuerdo previo de conciliación o en la sentencia anticipada será ejecutable por los medios coercitivos establecidos, después del tercer día de la notificación.

Artículo 272.- Forma normal de pago

La deuda de alimentos se pagará mediante la entrega de la cuota establecida a la persona beneficiaria o su representante en forma directa o por depósito bancario a una cuenta de la parte gestionante y, en su defecto, a una cuenta del Poder Judicial según los trámites establecidos en las normas reglamentarias y circulares que al efecto dicta la institución.

Artículo 273.- Retención salarial

En cualquier momento de su ejecución, incluso desde la propia demanda de alimentos, la parte actora podrá solicitar al despacho judicial que se ordene la retención de la cuota alimentaria de la fuente regular de ingresos que la persona deudora devenga en su trabajo u otra actividad, y se deposite en el lugar que se le indica. Ninguna persona podrá negarse a llevar a cabo esa retención y depósito, su falta podrá ser denunciada por el delito de desobediencia a la autoridad.

No podrá despedirse a una persona trabajadora por la retención de salario ordenada en virtud de una deuda alimentaria.

La retención del salario por concepto de pensión alimentaria tendrá preferencia sobre cualquier embargo o retención de carácter civil que tenga la persona deudora. Si se tratara de dos o más deudas alimentarias y el salario de la persona deudora no alcanza para la retención de todas ellas, con independencia de su nacimiento, deberá prorratearse entre las personas beneficiarias el monto retenido.

Artículo 274.- Apremio corporal

En caso de no cumplirse el pago normal de la deuda alimentaria, a petición de la parte acreedora se podrá girar contra la persona deudora mayor de quince años y menor de setenta y cinco años, orden de apremio corporal; la cual procederá hasta para el cobro de seis mensualidades incluyendo la presente, además de los rubros de aguinaldo, salario escolar o gastos de inicio de lecciones y los gastos extraordinarios.

Para el cumplimiento de la orden de apremio corporal podrá extenderse, a pedido de la parte gestionante y luego de agotadas otras formas para hacer efectiva la orden, allanamiento del lugar en donde se oculte la persona deudora,

cuya actuación verificará la autoridad judicial que conoce del asunto o comisionar a otro despacho, todo según los procedimientos dados en la legislación procesal penal.

No procede el apremio corporal contra la persona deudora a quien se le retiene la cuota alimentaria de su fuente de ingreso por orden de la autoridad judicial y se ha verificado tal retención en forma periódica; salvo que la retención fuera incompleta o existieran cuotas pendientes, pero previo a esto debe hacerse una advertencia de pago por cinco días.

Ninguna persona deudora alimentaria podrá estar en apremio corporal por más de seis meses, al vencimiento de este plazo se ordenará su libertad y lo no pagado podrá cobrarse mediante vía de cobro ejecutorio; pero si se activa esta vía estando aún apremiada la persona deudora, cesa dicho estado en forma inmediata; todo sin perjuicio de que las cuotas de alimentos, que corren en tanto se mantenga el apremio, podrán cobrarse también por aquella vía ejecutoria sin necesidad de que se haya solicitado el respectivo apremio.

Artículo 275.- Cobro mediante título ejecutorio

La resolución judicial firme que indique montos de las cuotas alimentarias ordinarias, aguinaldos, salarios escolares, gastos derivados de inicio de lecciones y gastos extraordinarios debidos por la persona deudora y emanada por los despachos competentes, aunque se trate de mensualidades para las cuales no haya solicitado apremio corporal, podrán ser cobradas en el propio despacho judicial que conoce del proceso mediante la vía de ejecución directa; solicitando se ordene el embargo de bienes en cantidad suficiente para la suma adeudada, intereses legales y costos de la ejecución para su posterior remate, según lo establecido en la normativa referente a los cobros judiciales.

Artículo 276.- Pedidos de autorización para búsqueda de trabajo y pago en tractos

Si la persona deudora alimentaria comprobare en forma satisfactoria, a juicio de la autoridad competente, que carece de trabajo y de recursos económicos para cumplir con el pago de las cuotas alimentarias, se podrá conceder un plazo prudencial que no exceda de un mes, prorrogable por otro, para que cumpla con el pago de las cuotas adeudadas.

El despacho podrá ordenar, a pedido de la persona deudora, el pago en tractos de una deuda total o parcial de alimentos morosa.

Si se ha solicitado cualquiera o ambos beneficios, el despacho ordenará recabar en forma inmediata, sin audiencia a las partes, la prueba ofrecida y resolverá y notificará dentro de las veinticuatro horas siguientes; ordenando la suspensión, cuando proceda, de la orden de apremio corporal en caso de concesión de alguno de los beneficios.

Artículo 277.- Liquidación de gastos extraordinarios pactados

Cuando se trate de liquidar los gastos extraordinarios se solicitará al despacho su cuantificación. Para estos efectos aportará la prueba pertinente, sin perjuicio de aquellos gastos de fijación prudencial. Se dará audiencia a la otra parte por tres días y posterior a ello la autoridad judicial resolverá.

Los montos establecidos se cobrarán por los medios dados en este Código, incluso el apremio corporal.

Capítulo II: Procedimiento de divorcio, separación judicial o cese de la unión de hecho por mutuo consentimiento

Artículo 278.- Entrega de la petición

Los cónyuges o convivientes, conjunta o separadamente, o la persona autorizada, presentará la petición por escrito ante el despacho competente, adjuntando el testimonio de escritura y las certificaciones correspondientes.

Artículo 279.- Participación de personas menores de edad

La persona menor de edad hija del matrimonio o de la unión de hecho podrá ser escuchada para el entendimiento en lo relacionado a su cuidado personal o su interrelación con los padres, ya sea directamente por el tribunal o a través de los equipos interdisciplinarios si lo considera necesario.

En todo caso, si se solicita homologación de un convenio de divorcio, separación judicial o cese de la unión de hecho y existen hijas o hijos menores de edad, deberá concederse audiencia por tres días al Patronato Nacional de la Infancia para que se refiera al convenio en lo relacionado a las personas menores de edad.

Artículo 280.- Notificación a quien no firma la petición

Cuando el escrito de gestión no viene firmado por alguna de las personas cónyuges o convivientes y esta no ha dado autorización para la presentación de esa forma en la escritura del convenio, se le deberá notificar la presentación de la solicitud y se concederá un plazo de cinco días para lo que corresponda.

Artículo 281.- Homologación del acuerdo

Estando en forma la petición, con los documentos necesarios y transcurridos el plazo de las audiencias ofrecidas, se dictará la resolución que homologue o no el acuerdo. La autoridad judicial podrá variar lo acordado en lo que respecta a derechos de las personas menores de edad referentes a cuidado personal y visitas, sin perjuicio de la petición de aclaración o adición al convenio o la petición de cualquier documento faltante que pueda pedir la autoridad judicial.

Cuando exista duda sobre alguna de las cláusulas del convenio se citará a una audiencia para aclarar lo acordado.

La resolución de homologación podrá no contener en forma puntual lo resuelto, sino hacer referencia al convenio presentado, salvo que la autoridad judicial considere necesario una mejor redacción del acuerdo para su mejor comprensión y para efectos de una eventual ejecución. En el primer caso y para efectos de la ejecutoria para su inscripción en los registros correspondientes, deberá acompañarse a esta la copia certificada por el tribunal del respectivo convenio.

Artículo 282.- Oposición al convenio y procedimiento

Solo se admitirá oposición al convenio cuando se trate de vicios en el consentimiento o falsedad y se alegue antes de la homologación. Para estos efectos se conferirá el plazo de cinco días a la otra parte para que se manifieste y aporte prueba. Vencido este plazo se citará a una audiencia para recibir la prueba, escuchar las conclusiones de las partes y se procederá al dictado de la parte dispositiva de lo resuelto. La sentencia integral deberá ser dictada y notificada dentro del plazo de tres días e incluirá la resolución sobre la oposición formulada y en caso de no accederse a ella, se deberá pronunciar sobre la homologación pedida.

Capítulo III: Procedimientos de adoptabilidad y de adopción

Sección I: Declaratoria de adoptabilidad

Artículo 283.- Requisitos previos a la adopción

Para el trámite de la adopción de una persona menor de edad se deberán presentar las copias certificadas de la sentencia firme de la autoridad judicial que ha declarado adoptabilidad en el respectivo proceso de terminación de los atributos de la responsabilidad parental o de la declaratoria de adoptabilidad emanada del Patronato Nacional de la Infancia y tratándose de adopción internacional, de la autoridad central.

Artículo 284.- Adoptabilidad en sede administrativa

La declaratoria de adoptabilidad de una persona menor de edad será declarada en sede administrativa en el Patronato Nacional de la Infancia.

En caso de que exista oposición fundada en sede administrativa, el Patronato Nacional de la Infancia deberá interponer la petición de declaratoria en sede judicial mediante el proceso resolutivo familiar de terminación de los atributos de la responsabilidad parental con petición subsidiaria de adoptabilidad.

Artículo 285.- Adoptabilidad de personas mayores de edad con discapacidad

Tratándose de personas mayores de edad con capacidades especiales que le impida otorgar consentimiento, no se necesitará el trámite previo de adoptabilidad, sin embargo, para el inicio del trámite de la adopción deberá tener una persona representante o salvaguardas nombrado por la autoridad judicial para esos efectos.

Artículo 286.- Integración de trámites

En la misma sentencia del proceso resolutorio familiar de terminación de los atributos de la responsabilidad parental y declaratoria de adoptabilidad, si se dan las condiciones para hacerlo, se podrá resolver sobre la adopción.

Sección II: Procedimiento de adopción

Artículo 287.- Legitimación

Están legitimadas para iniciar el trámite de adopción las personas declaradas idóneas para estos efectos por parte del ente administrativo correspondiente, salvo el caso de adopción de personas mayores de edad con capacidades especiales que no puedan otorgar consentimiento en cuyo caso la idoneidad de los promoventes se valorará en este mismo procedimiento.

Artículo 288.- Medidas provisionales

Una vez presentada la petición, se podrá ordenar, como medida cautelar, el cuidado provisional de la persona por adoptar a cargo de quienes pretenden la adopción o cualquier otra medida que procure facilitar la interrelación.

Si se trata de la adopción de personas menores de edad con desprendimiento directo según el inciso c) del artículo 109 del Código de Familia, el despacho deberá establecer los procedimientos provisionales regulados en esa norma jurídica.

Artículo 289.- Informes periciales

Si se admite la solicitud, se ordenarán los peritajes o informes necesarios de carácter interdisciplinario o multidisciplinario según el caso.

Artículo 290.- Audiencia privada

Una vez notificado el Patronato Nacional de la Infancia, cuando proceda; ya recibidos los informes periciales ordenados y si fuera el caso cumplidos los trámites del inciso c) del artículo 109 del Código de Familia, la autoridad judicial resolverá sobre la prueba solicitada, y convocará a una audiencia en la cual

deberán estar presentes en forma obligada los promoventes en forma personal, la persona representante del Patronato Nacional de la Infancia en caso de tratarse de adoptados menores de edad y la persona por adoptar en caso de que tenga edad suficiente para el acto; en la que se verificará lo siguiente:

- 1.- Entrevista a la persona por adoptar.
- 2.- Recibo de manifestación directa, personal y expresa de las personas adoptantes de su deseo en la adopción.
- 3.- En caso de considerarse necesario para aclarar o ampliar, se escuchará a quienes han rendido los informes periciales.
- 4.- Recepción de la prueba testimonial admitida o cualquier otra que se estime conveniente.
- 5.- Escucha del criterio de la persona representante del Patronato Nacional de la Infancia en casos de personas menores de edad por adopción.
- 6.- Dictado de la parte dispositiva del fallo, momento en el cual deberá exponerse a las personas adoptantes las obligaciones que se asumen. La sentencia en forma integral deberá dictarse y notificarse dentro del tercer día.

Artículo 291.- Adopción en sede notarial

Cuando se trata de personas mayores de edad y no se trate de capacidades especiales que no les permita dar su consentimiento, la adopción se tramitará en sede notarial, mediante los procedimientos establecidos en el título VI del Código Notarial.

Una vez aprobada, la persona notaria estará en la obligación de presentar el testimonio de escritura ante el Registro Civil dentro de los ocho días siguientes y tramitar su inscripción.

Capítulo IV: Procedimiento para la restitución internacional de personas menores de edad

Sección I: Generalidades

Artículo 292.- Legitimación activa

Será titular de la acción de restitución el padre, madre, persona tutora o guardadora de hecho o de derecho, institución u organismo que ejerciera el derecho de guarda o custodia, conforme el régimen jurídico del país de residencia habitual del niño inmediatamente antes de su traslado o retención.

Artículo 293.- Legitimación pasiva

Estará legitimado pasivamente la persona quién ha sustraído o retiene ilícitamente a la persona menor de edad cuyo desplazamiento o retención constituye la causa de la solicitud.

Sección II: Actuaciones preliminares

Artículo 294.- Medidas precautorias

Previo a la presentación de la solicitud de la restitución, la autoridad central designada o la parte interesada podrá solicitar, como medida urgente, la localización y protección de la persona menor de edad.

Verificada la localización, lo comunicará de inmediato al Estado requirente vía autoridad central.

La autoridad central solicitará o adoptará las medidas adecuadas tendientes a conseguir la restitución voluntaria de la persona menor de edad y comunicará al juzgado el resultado de la solicitud.

A partir de dicha noticia, en caso que se hubiere solicitado la previa localización de la persona menor de edad, comenzará a correr un plazo de treinta días naturales a efectos de la correspondiente presentación de solicitud de restitución, para el caso de que esta no se hubiese deducido. Vencido este plazo sin que se presente la solicitud de restitución, las medidas adoptadas de forma cautelar caducarán de pleno derecho.

Artículo 295.- Fase preliminar

La solicitud de restitución deberá ajustarse a los requisitos establecidos en los convenios internacionales atinentes a la materia y se podrá presentar en forma directa ante la autoridad central o mediante solicitud directa ante el órgano jurisdiccional competente. En este último caso se remitirá de inmediato a la autoridad central.

En ambos casos, la autoridad central deberá llevar a cabo las acciones establecidas en el artículo 7 del Convenio de la Haya sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Personas Menores de Edad.

La documentación que se acompañe a la solicitud de restitución con el fin de acreditar la legitimación activa del requirente y demás recaudos, deberá presentarse traducida en caso de así corresponder, no requiriéndose su legalización.

Sección III: Procedimiento

Artículo 296.- Admisibilidad y emplazamiento

Una vez presentada solicitud de restitución, el juzgado procederá a la calificación de las condiciones de admisibilidad y titularidad activa. A estos efectos el peticionante deberá acreditar la verosimilitud de su derecho demostrando sumariamente en el escrito inicial que se encuentra en el ejercicio de la guarda o custodia de la persona menor de edad.

La presentación de la solicitud de restitución ante el despacho jurisdiccional marcará la fecha de iniciación de los procedimientos.

Admitida la solicitud, se procederá al dictado de una resolución con carácter de sentencia anticipada, la que debe contener:

- 1.- El dictado contra la persona requerida de la orden de restitución de la persona menor de edad.
- 2.- El otorgamiento del plazo de tres días para la oposición a la petición y para que se opongan las excepciones pertinentes y se presente y ofrezca la prueba.
- 3.- El dictado de las medidas cautelares necesarias a los efectos de la protección y sujeción de la persona menor de edad al país, o bien la modificación o mantenimiento de las medidas adoptadas inicialmente.
- 4.- La orden de notificación al Patronato Nacional de la Infancia para que actúe en defensa de los derechos de la persona menor de edad de edad.
- 5.- Designación de un representante para la persona requirente en caso de que no pueda trasladarse al país.

Artículo 297.- Oposición a la petición

La oposición a la solicitud deberá realizarse en escrito fundado en el que se opondrán las excepciones pertinentes y se presentará y ofrecerá la prueba.

Las oposiciones en este procedimiento persiguen la demostración de los siguientes hechos:

- 1.- Que la persona, institución u organismo que se hubiere hecho cargo de la persona menor de edad no ejercía, de modo efectivo, el derecho de custodia en el momento en que fue trasladado o retenido o había consentido o posteriormente aceptado el traslado o retención.
- 2.- Existencia de un grave riesgo de que la restitución de la persona menor de edad lo exponga a un peligro físico o psíquico o que, de

cualquier otra manera, ponga a la persona menor de edad en una situación intolerable. El tribunal no podrá denegar la restitución de un niño por estos motivos si se demuestra que se han adoptado las medidas adecuadas para garantizar la protección del mismo tras la restitución.

- 3.- Que la propia persona menor de edad con edad, con edad y grado de madurez suficiente para tener en cuenta su opinión, se exprese de forma contraria a la restitución.
- 4.- Que el otorgamiento de la restitución es manifiestamente violatoria de los principios fundamentales del Estado requerido en materia de protección de los derechos humanos y libertades fundamentales.

El conocimiento de las excepciones opuestas se hará en sentencia.

Artículo 298.- No oposición u oposición inatendible

Si no existiera oposición ni se formularan excepciones a la solicitud, la sentencia anticipada quedará firme y se dispondrá hacerla efectiva comunicando a la autoridad central.

En caso de que se considere que la oposición no se encuentra fundada, la autoridad judicial resolverá de esa forma y ordenará la firmeza de la sentencia anticipada con comunicación a la autoridad central.

Artículo 299.- Traslado de la oposición y audiencia del proceso

Admitida la oposición formulada, se pondrá en conocimiento de la parte requirente por el plazo de tres días y en esa resolución se convocará a audiencia dentro de los cinco días siguientes. En esta misma resolución el despacho se pronunciará sobre la admisión de los medios probatorios ofrecidos por las partes. La resolución que rechace prueba no tendrá recurso de apelación.

Artículo 300.- Procedimiento en la audiencia

La audiencia no dejará de celebrarse por la ausencia de los citados. En ella se intentará la conciliación, la que verificada se hará constar en acta y será homologada por la autoridad judicial. En caso contrario, se procederá a la fijación de los puntos en debate, se diligenciarán los medios probatorios dispuestos, se oirá a la persona menor de edad cuando a juicio del tribunal esté en condiciones de formarse un juicio propio y en forma breve a las partes. Al final de la audiencia se emitirán conclusiones. Posterior a ello, se procederá al dictado de la parte dispositiva de la sentencia. La sentencia integral deberá ser dictada y notificada dentro del plazo de tres días.

Al dictarse la sentencia, la autoridad judicial deberá valorar, opuestas o no como excepciones por parte de la persona requerida, la procedencia o no de lo pedido conforme a los motivos indicados en su oposición.

Artículo 301.- Derecho de interrelación familiar

La solicitud que tiene por objeto hacer efectivo el derecho de visitas o de interrelación familiar por parte de sus titulares en los casos previstos en los convenios internacionales de la materia, seguirán el procedimiento establecido en la presente ley.

No son requisitos necesarios para la procedencia de la solicitud en el marco de los instrumentos internacionales, la existencia de un traslado o retención ilícitos previos, ni la existencia de un régimen de visitas establecido previamente.

TÍTULO VI
La ejecución de las resoluciones

Capítulo I: Ejecución de resoluciones inscribibles

Artículo 302.- Inscripción de sentencias ante el Registro Civil y Registro de Personas

Todas las sentencias firmes que establezcan obligación de inscripción de estado civil, filiación, suspensión y terminación de los atributos de la responsabilidad parental y nombramiento de representantes en los registros públicos, se deberán ejecutar de oficio dentro de los cinco días siguientes a esa firmeza y podrá llevarse a cabo por medios electrónicos.

Artículo 303.- Inscripción de resoluciones con carácter patrimonial

La ejecución de resoluciones de carácter patrimonial que impliquen inscripciones ante registros públicos o privados se ordenará a petición de parte interesada.

Artículo 304.- Exención de pago de tributos en traspasos

La inscripción de cualquier resolución que decida cuestiones patrimoniales entre cónyuges, o entre estos e hijas o hijos estará exenta de pago de derechos de traspasos.

Capítulo II: Ejecución de derechos personalísimos

Artículo 305.- Principio de la tutela de la realidad

Cuando alguna de las partes pretenda la ejecución de una sentencia, acuerdo o resolución que trate sobre del cuidado personal de una persona en

condición de vulnerabilidad, de un sistema de interrelación familiar o de la administración de bienes y ha transcurrido un tiempo prologando sin que se hubiera ejecutado, la autoridad judicial se abstendrá de ejecutarla en aquellos casos en que la realidad haga evidente que se ha consolidado una situación diferente de la que se pretende ejecutar y esta beneficia a la persona en la referida condición. En este supuesto, la autoridad judicial remitirá a las partes a la vía de modificación de fallo y sin perjuicio del disfrute del monto de pensión alimentaria vigente.

Artículo 306.- Ejecuciones provisionales

Se podrá ordenar, de oficio o a petición de parte y en resolución fundada, la ejecución provisional de la sentencia sin estar firme cuando se trate del cuidado de personas en estado de vulnerabilidad o de fijación de relaciones interpersonales.

Artículo 307.- Cumplimiento coercitivo

Para la ejecución de lo resuelto, la autoridad judicial podrá ordenar el cumplimiento por medios coercitivos incluso el allanamiento y el apercibimiento de las sanciones penales que correspondan en caso de negativa.

Artículo 308.- Competencia de los regímenes de relaciones interpersonales supervisados

La ejecución de un régimen de relaciones interpersonales de carácter supervisado para personas menores de edad luego de la firmeza del fallo, estará a cargo del Patronato Nacional de la Infancia o cualquier otro órgano estatal que realice labores en beneficio de esta población; sin perjuicio del compromiso que adquiera algún ente privado acreditado ante dicha institución. Si se trata de otras personas en condición de vulnerabilidad, será correspondencia de las instituciones públicas que trabajan en beneficio de ellas.

Para estos efectos, estas instituciones públicas o privadas dispondrán del personal necesario en los horarios no hábiles de oficinas y en los lugares adecuados.

En caso de las organizaciones privadas que asuman la supervisión por voluntad propia no podrán revocar su ofrecimiento, salvo por cuestiones autorizadas por la autoridad judicial.

En todo caso, los funcionarios públicos o privados que lleven a cabo la supervisión deberán entregar los informes sobre lo acontecido cuando así sea dispuesto por la autoridad judicial.

Capítulo III: Ejecución de derechos patrimoniales

Sección I: El derecho de ganancialidad

Artículo 309.- Legitimación y trámite inicial

Una vez establecido en sentencia el derecho de ganancialidad y cuando se hayan individualizados los bienes sobre los cuales recae en forma concreta, cualquiera de las partes interesadas solicitará la ejecución, debiendo indicar los bienes declarados con derecho de ganancialidad y ofrecer la prueba necesaria para fijar el valor neto de estos.

Cuando la petición esté en forma, se dará audiencia a la otra por tres días para proponer cualquier otro tipo de prueba sobre ese aspecto del valor neto y en forma inmediata se ordenará traer las pruebas ofrecidas y pertinentes, incluyendo si fuere necesario y no hay acuerdo sobre el valor del bien, la de tipo pericial para la valoración del bien.

Artículo 310.- Convocatoria a audiencia conciliatoria y decisión final

Rendido el peritaje y los informes necesarios se convocará a una audiencia de conciliación.

No existiendo acuerdo, la autoridad judicial emitirá, dentro del tercero día, la resolución final sobre el valor del derecho de cada parte y las obligaciones pecuniarias que se asumen y su forma de pago de conformidad con el artículo 41 del Código de Familia.

En esa misma resolución se otorgará al titular del bien un plazo razonable para el cumplimiento de la obligación, si no se cumple en ese plazo, la persona acreedora del derecho de ganancialidad podrá pedir el cobro de la suma indicada mediante el procedimiento de cobro ejecutorio establecido en la normativa de cobro de las obligaciones civiles y mercantiles.

Artículo 311.- Definición de bienes comunes en ganancialidad

Tratándose de bienes en copropiedad de la pareja; no existiendo hijos o hijas menores de edad o existiendo no hay interés en el que ostentará la custodia de ellos en permanecer con el bien y otorgar pago al otro cónyuge; y si ambas partes tienen interés en la titularidad completa del bien sin que exista acuerdo en otra solución, la autoridad ordenará el remate con la base del acuerdo de partes o, en su defecto, del dictamen pericial pedido, salvo que existan gravámenes hipotecarios; sin posibilidad de rebajar la base ante los remates fracasados.

Sección II: Obligaciones de hacer, no hacer y entrega de cosas

Artículo 312.- Ejecución de obligaciones de hacer

Cuando se haya establecido en una sentencia una obligación de hacer, el despacho ordenará a la persona obligada llevar a cabo lo dispuesto, para lo cual concederá un plazo razonable de conformidad con la naturaleza de la obligación y las condiciones personales y económicas de la persona obligada.

Vencido el plazo dado sin que se hubiera cumplido, la parte ejecutante podrá llevar a cabo lo ordenado, pudiendo establecer luego el respectivo cobro de los gastos incurridos, así como de los daños y perjuicios, mediante el procedimiento de cobro de sumas no determinadas que establece este Código.

La parte ejecutante podrá cobrar, en esta misma vía, los daños y perjuicios en caso de que no pueda o no quiere cumplirla.

Si se tratara de firma de una escritura pública y si el obligado no cumple con otorgarla en el plazo conferido, el tribunal ordenará la confección de la escritura correspondiente a un notario público a elección de la parte ejecutante con otorgamiento de la obligación por parte de la autoridad judicial.

Artículo 313.- Obligaciones de no hacer

Cuando se haya obligado a una persona a no hacer determinado acto o conducta bajo apercibimiento de ser juzgado por el delito de desobediencia a la autoridad y ha incumplido, la autoridad judicial, de oficio o a petición de parte, lo comunicará al Ministerio Público para lo correspondiente y se tomarán las medidas necesarias para el cumplimiento de la orden de no hacer, incluso con auxilio de la autoridad de policía.

Para el cobro de los daños y perjuicios provocados por el incumplimiento, se seguirán los trámites previstos en este capítulo.

Artículo 314.- Entrega de cosas

Si se ha apercibido de la entrega de una cosa en plazo establecido, sin advertencia de juzgamiento por el delito de desobediencia a la autoridad; se procederá a apercibirlo de esa forma para que se cumpla en forma inmediata. Si no se cumple la obligación y la cosa fuere localizable y no recompensable en dinero, se podrá llevar a cabo, con auxilio de la autoridad de policía, el allanamiento del lugar en que se encuentre con las formalidades de la legislación procesal penal.

Si el incumplimiento de esta obligación provoca daños y perjuicios, para su cobro se seguirán los trámites previstos en este capítulo

Sección III: Obligaciones de pago

Subsección I: Sumas no determinadas

Artículo 315.- Trámite inicial

Cuando en resolución judicial se hubiera ordenado el pago daños y perjuicios o de una suma por definir, se debe presentar la liquidación concreta y detallada de los montos.

La petición se pondrá en conocimiento de la parte ejecutada por cinco días. En caso de no oposición o allanamiento a las pretensiones, se dictará, sin más trámite, la resolución final.

En caso de oposición y si fuere necesarios, la autoridad judicial ordenará la realización de los dictámenes periciales y pedirá los informes y documentos que la partes propongan.

Artículo 316.- Audiencia

Rendidas las pericias y recibidos los demás informes y documentos, se admitirá la demás prueba y se convocará a una audiencia en la cual se intentará la conciliación, en caso de que esta fracase se recibirá la prueba admitida, se oirán las conclusiones y se emitirá la parte resolutive de la sentencia, en tanto la sentencia integral deberá ser dictada y notificada dentro de tercero día.

Artículo 317.- Decisión final

De establecerse un monto para el pago, la autoridad judicial deberá otorgar en esa resolución el plazo razonable para el cumplimiento de la ordenado, de acuerdo al monto y condiciones personales y patrimoniales de la persona obligada, el cual no podrá exceder de seis meses y de no hacerlo la parte ejecutante podrá iniciar el trámite de apremio patrimonial ejecutorio para conseguir ese pago.

Subsección II: Cobro de sumas líquidas

Artículo 318.- Normativa aplicable

Salvo lo dispuesto en esta normativa, el trámite del cobro de las sumas de dinero establecidas en resolución judicial firme se hará efectivo directamente en el mismo proceso mediante el trámite previsto para el cobro de las obligaciones civiles o mercantiles. Tratándose del nombramiento de persona depositaria judicial se tendrá cuenta el interés familiar para su designación.

Artículo 319.- Bienes con derecho de ganancialidad

No será necesario decretar embargo de los bienes sobre los cuales recayó el monto de derecho de ganancialidad si ya existe anotación en virtud del proceso resolutivo; para proceder con la fase de remate, únicamente deberá presentarse la certificación registral en la que conste la preferencia de esa anotación.

Cuando dicha anotación no es preferente, el eventual remate deberá efectuarse con el gravamen que tenga ese carácter.

Artículo 320.- Embargo de bienes en sociedades comunes

A fin del cobro de cualquier suma de dinero líquida determinada en resolución de proceso familiar procederá el embargo de los bienes propiedad de una sociedad en la cual los cónyuges, excónyuges o exconvivientes de hecho son los únicos accionistas.

Artículo 321.- Inscripción de aprobaciones de remate entre familiares

Una vez aprobado un remate en un proceso familiar en el cual la adjudicación correspondió a uno de los cónyuges o a cualquiera de sus hijas o hijos, su inscripción se verificará por medio de ejecutoria de la resolución que lo aprobó y demás piezas necesarias para esa inscripción.

Artículo 322.- Liquidación del producto de remate en materia de ganancialidad

Tratándose de un remate consecuencia del cobro del derecho de ganancialidad, el producto de este será liquidado luego de las deudas preferentes en el siguiente orden:

- 1.- Intereses y costas.
- 2.- Gastos de cuidado y mantenimiento del bien cuando se nombró depositario mediante resolución judicial.
- 3.- Capital adeudado por el derecho de ganancialidad.

El remanente será devuelto al propietario del bien ejecutado

LIBRO III
NORMAS DE DERECHO INTERNACIONAL PROCESAL DE FAMILIA

TÍTULO I
Competencia internacional

Capítulo I: Disposiciones generales

Artículo 323.- Normas aplicables

Las normas jurídicas de competencia aplicables a situaciones vinculadas con varios ordenamientos jurídicos nacionales se determinan, en primer lugar por acuerdo de partes en materias disponibles para la prórroga de competencia; en su defecto por los tratados y las convenciones internacionales vigentes de aplicación en el caso y, en ausencia de ambos, se aplican las normas del derecho internacional procesal contenidas en este capítulo y demás leyes especiales.

Artículo 324.- Igualdad de trato

Los ciudadanos y los residentes permanentes en el extranjero gozan del libre acceso a la jurisdicción para la defensa de sus derechos e intereses, en las mismas condiciones que los ciudadanos y residentes permanentes en Costa Rica.

Ninguna caución o depósito, cualquiera sea su denominación, puede ser impuesto en razón de la calidad de ciudadano o residente permanente en otro Estado.

Artículo 325.- Cooperación y asistencia procesal internacional

Sin perjuicio de las obligaciones asumidas por instrumentos jurídicos internacionales, las autoridades judiciales costarricenses deben brindar amplia cooperación jurisdiccional con los requerimientos emanados de otros Estados y las comunicaciones dirigidas a autoridades extranjeras deben hacerse mediante exhorto.

Se debe dar cumplimiento a las medidas de mero trámite y probatorias solicitadas por autoridades jurisdiccionales extranjeras siempre que la resolución que las ordena no afecte principios de orden público internacional costarricense.

Los exhortos deben tramitarse de oficio y sin demora, de acuerdo con las leyes costarricenses, sin perjuicio de disponer lo pertinente con relación a los gastos que demande la asistencia requerida.

Artículo 326.- Acuerdo de elección de foro

En materia patrimonial e internacional, las partes están facultadas para prorrogar competencia en las autoridades judiciales fuera de Costa Rica, excepto que las autoridades costarricenses tengan competencia exclusiva.

Artículo 327.- Exclusividad de la elección del foro

La autoridad judicial elegida por las partes tiene competencia exclusiva, excepto que ellas decidan expresamente lo contrario.

Artículo 328.- Prórroga expresa o tácita

La prórroga de competencia procede si nace del convenio escrito mediante el cual los interesados manifiestan su decisión de someterse a la competencia de la autoridad judicial a la cual acuden. Asimismo opera la prórroga de competencia, para el actor por el hecho de entablar la demanda y, con respecto al demandado, cuando la conteste, deje de hacerlo u oponga excepciones previas sin articular la declinatoria.

Artículo 329.- Foro de necesidad

Aunque las reglas del presente Código no atribuyan competencia internacional a la autoridad judicial costarricense, esta pueden intervenir, excepcionalmente, con la finalidad de evitar la denegación de justicia, siempre que no sea razonable exigir la iniciación de la demanda en el extranjero y en tanto la situación privada presente contacto suficiente con el país, se garantice el derecho de defensa en juicio y se atienda a la conveniencia de lograr una sentencia eficaz.

Capítulo II: Disposiciones especiales

Artículo 330.- Norma general aplicable

Salvo norma contraria particular, es competente para el conocimiento de las pretensiones relativas al derecho de familia del domicilio o la residencia habitual de la parte demandada.

Artículo 331.- Medidas provisionales y cautelares

Las autoridades judiciales costarricenses son competentes para decretar medidas provisionales y cautelares en los siguientes casos:

- 1.- Cuando conocen del proceso principal, sin perjuicio de que los bienes o las personas no se encuentren en el país.
- 2.- A pedido de una autoridad judicial extranjera competente o en casos de urgencia, cuando los bienes o las personas se encuentran o

pueden encontrarse en el país, aunque carezcan de competencia internacional para conocer del proceso principal.

- 3.- Cuando la sentencia dictada por una autoridad judicial extranjera deba ser reconocida o ejecutada en Costa Rica.

Artículo 332.- Litispendencia

Cuando una pretensión que tiene el mismo objeto y la misma causa se ha iniciado previamente y está pendiente entre las mismas partes en el extranjero, las autoridades judiciales costarricenses deben suspender el proceso en trámite si es previsible que la decisión extranjera puede ser objeto de reconocimiento.

El proceso suspendido puede continuar si la autoridad judicial extranjera declina su propia competencia o si el proceso extranjero se extingue sin que medie resolución sobre el fondo del asunto o, en el supuesto en que habiéndose dictado sentencia en el extranjero, esta no es susceptible de reconocimiento en nuestro país.

Artículo 333.- Matrimonio, separación judicial y divorcio

Las pretensiones de validez, nulidad y disolución del matrimonio, así como las referentes a los efectos del matrimonio, la separación judicial y el divorcio, deben interponerse ante la autoridad judicial del último domicilio conyugal efectivo o ante el domicilio o la residencia habitual del cónyuge demandado.

Se entiende por domicilio conyugal efectivo el lugar de efectiva e indiscutida convivencia de los cónyuges.

Artículo 334.- Unión de hecho

Las pretensiones que surjan como consecuencia de la unión de hecho deben presentarse ante la autoridad judicial del último domicilio efectivo común de las personas que la constituyen o del domicilio o residencia habitual del demandado.

Artículo 335.- Alimentos

Las pretensiones relativas a la prestación alimentaria deben interponerse a opción del acreedor en cualquiera de los siguientes foros:

- 1.- El despacho o autoridad del estado del domicilio o de la residencia habitual del acreedor;
- 2.- El despacho o autoridad del estado del domicilio o de la residencia habitual del deudor, o
- 3.- El despacho o autoridad del Estado con el cual el deudor tenga vínculos personales tales como: posesión de bienes, percepción de ingresos u obtención de beneficios económicos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, se considerarán igualmente competentes las autoridades judiciales o administrativas de otros Estados a condición de que el demandado en el juicio hubiera comparecido sin objetar la competencia

Serán competentes para conocer las acciones de aumento de alimentos, cualesquiera de las autoridades señaladas en los incisos anteriores.

Serán competentes para conocer de las acciones de cese y reducción de alimentos, las autoridades que hubiesen conocido de la fijación de los mismos, excepto si el acreedor alimentario acepta la competencia de una autoridad judicial diversa.

Artículo 336.- Filiación por naturaleza y por técnicas de reproducción humana asistida

Las pretensiones relativas a la determinación e impugnación de la filiación deben interponerse, a elección de la parte actora, ante las autoridades judiciales del domicilio o de la residencia habitual de quien reclama el emplazamiento filial o ante las autoridades del domicilio o residencia habitual del progenitor o pretendido progenitor.

En caso de reconocimiento son competentes las autoridades del domicilio de la persona que efectúa el reconocimiento, las del domicilio o residencia habitual del hijo o las del lugar de su nacimiento.

Artículo 337.- Adopción

Las autoridades judiciales costarricenses son exclusivamente competentes para la decisión de la guarda con fines de adopción y para el otorgamiento de una adopción de personas menores de edad con su residencia habitual en Costa Rica

Para la anulación o revocación de una adopción son competentes las autoridades judiciales del lugar del otorgamiento o los de la residencia habitual del adoptado.

Las autoridades administrativas o jurisdiccionales costarricenses deben prestar cooperación a las personas con domicilio o residencia habitual en la Costa Rica, aspirantes a una adopción a otorgarse en país extranjero, que soliciten informes sociales o ambientales de preparación o de seguimiento de una adopción a conferirse o conferida en el extranjero.

TÍTULO II Ejecución de resoluciones extranjeras

Artículo 338.- Ámbito de aplicación

Las sentencias y resoluciones dictadas en el extranjero que se deban ejecutar en Costa Rica deberán cumplir con el requisito de autorización previsto en este apartado y, de ser admisible, se procederá con su ejecución en el despacho que corresponda por competencia material y territorial.

Artículo 339.- Normas sobre cuidado de menores de edad y alimentos

Las normas relativas a cuidado o guarda de personas menores de edad con conflicto entre personas que viven en diversos países se ejecutarán y decidirán de acuerdo con el procedimiento especial de restitución dado en este Código.

Serán de aplicación concreta y directa las normas internacionales referentes a ejecución de deberes alimentarios decretados en otros países, mediante la debida adecuación de los procedimientos dados en esta normativa.

Artículo 340.- Requisitos de la solicitud

Con la gestión se debe adjuntar copia auténtica de la resolución expedida por el órgano competente del país de origen y se hará constar que se han cumplido los requisitos diplomáticos y consulares exigidos en aquel país y en Costa Rica.

Si el fallo no lo contiene, se deben agregar a la certificación auténtica los elementos suficientes para demostrar que, en el proceso en que se dictó la resolución, se cumplió legalmente con el debido emplazamiento para la otra parte y, en caso de no contestación, las consecuencias en la legislación correspondiente.

Artículo 341.- Improcedencia de la autorización

No procederá la autorización si existiere en Costa Rica sentencia firme con carácter de cosa juzgada material sobre las pretensiones dadas en el fallo por inscribir, cuando estas no sean competencia exclusiva de los tribunales nacionales o sean contrarias a los principios de orden público internacional de Costa Rica.

Artículo 342.- Procedimiento

Admitida la gestión en sus requisitos formales, se dará traslado a la parte contra quién se dirige la ejecución para que se manifieste dentro de los cinco días siguientes; si no se conoce su domicilio se le hará saber mediante edicto publicado por una vez en cualquier periódico de circulación nacional, y si se

localiza en el extranjero se le notificará por medios consulares, en cuyo caso el plazo indicado aumenta a treinta días.

Finalizado el plazo se dictará la resolución y de ser procedente se enviará al despacho que corresponda para su debida ejecución.

Si se tratara de ejecución de simple inscripción, el mismo órgano procederá con la emisión de la ejecutoria correspondiente.

Artículo 343.- Rechazo de la ejecución

Si el reconocimiento se deniega, se devolverá la documentación a quien la haya presentado y si el rechazo se debió a cuestiones formales, una vez subsanados, se podrá formular nueva solicitud.

ARTÍCULO 2.- Reformas

Refórmese las siguientes disposiciones legales para que digan así:

I.- Los siguientes titulares de títulos y capítulos del Código de Familia, Ley N.º 5476, para que se tenga así:

- 1.- El Título III para que se llame: “De los atributos de la responsabilidad parental”.
- 2.- El capítulo II del título III para que se llame: “De los atributos de la responsabilidad parental sobre hijos habidos en el matrimonio”.
- 3.- El capítulo III del título III para que se llame: “De los atributos de la responsabilidad parental sobre hijos habidos fuera del matrimonio”.
- 4.- El capítulo IV del título III para que se llame: “Extinción, pérdida y suspensión de los atributos de la responsabilidad parental”.

II.- Los siguientes artículos del Código de Familia, Ley N.º 5476, para que se tenga así:

Artículo 16.- Matrimonio. Prohibición para celebrarlo

Es prohibido el matrimonio:

- 1) Del menor de dieciocho años sin el asentimiento previo y expreso de quien ejerza sobre él los atributos de la responsabilidad parental o tutela, salvo lo estipulado en el inciso 1) del artículo 21 de este Código;
- 2) ...
- 3) ...”

“Artículo 21.- Matrimonio. Menor de edad. Asentimiento del padre o la madre

Para la celebración del matrimonio de una persona menor de edad es necesario que cualquiera de sus padres en ejercicio de los atributos de la responsabilidad parental otorgue su asentimiento y no están obligados a motivar su negativa. La dispensa del asentimiento será suplida por el tribunal, mediante respectivo procedimiento señalado en el Código Procesal de Familia, en los siguientes casos:

- 1) Cuando el menor haya sido declarado en adoptabilidad con terminación de los atributos de la responsabilidad parental para sus progenitores y si siendo huérfano careciere de tutor; y
- 2) Cuando el asentimiento se niegue y sea necesario para evitar que el menor de edad sufra los perjuicios que podrán derivar de los delitos cuya acción o pena se extinguen con el matrimonio.”

“Artículo 24.- Matrimonio civil. Celebración

Además del caso del artículo anterior, el matrimonio podrá celebrarse ante las autoridades de jefatura de las oficinas centrales o regionales del Registro Civil o ante los notarios públicos. Los primeros no podrán cobrar honorarios por sus actuaciones. En caso de los segundos, el acta correspondiente se asentará en su protocolo y deberán conservar en el de referencia, la copia respectiva y deberán enviar todos los antecedentes y documentos requeridos a los contrayentes, el testimonio notarial y la copia del acta en los formularios que son suministrados por el Registro Civil a esta institución dentro de los ocho días hábiles siguientes a la celebración del matrimonio para su inscripción. Ambos funcionarios estarán sometidos al régimen disciplinario y penal correspondientes.”

“Artículo 30.- Matrimonio. Imposibilidad de matrimonio por poder

Bajo ninguna circunstancia se verificará un matrimonio con poder de alguno de los contrayentes y los funcionarios que celebren matrimonios deberán dar constancia y fe pública de que al acto concurrieron los dos contrayentes en un mismo momento.

Artículo 31.- Matrimonio. Requisitos

El matrimonio, una vez establecida la autoridad que lo celebrará y su competencia, se verificará ante dos testigos mayores de edad, los contrayentes expresarán su voluntad de contraer matrimonio entre sí y el funcionario los declarará unidos en matrimonio; de todo lo cual se levanta una acta que firmarán los contrayentes y los testigos junto al funcionario y una copia de ella se entregará a los primeros.”

“Artículo 41.- Régimen de gananciales

Al disolverse o declararse nulo el matrimonio, al declararse la separación judicial y al celebrarse, después de las nupcias, capitulaciones matrimoniales, cada cónyuge adquiere el derecho de participar en la mitad del valor neto de los bienes gananciales constatados en el patrimonio del otro. Tales bienes se considerarán gravados de pleno derecho, a partir de la declaratoria a las resultas de la respectiva liquidación.

Podrá procederse a la liquidación anticipada de los bienes gananciales cuando el tribunal, previa solicitud de uno de los cónyuges, compruebe, de modo indubitable, que los intereses de este corren el riesgo de ser comprometidos por la mala gestión de su consorte, o por actos que amenacen burlarlo. Únicamente no son gananciales los siguientes bienes, sobre los cuales no existe el derecho de participación.

- 1) Los que fueren introducidos al matrimonio, o adquiridos durante él, por título gratuito o por causa aleatoria;
- 2) Los comprados con valores propios de uno de los cónyuges, destinados a ello en las capitulaciones matrimoniales;
- 3) Aquellos cuya causa o título de adquisición precedió al matrimonio;
- 4) Los muebles o inmuebles, que fueron subrogados a otros propios de alguno de los cónyuges; y
- 5) Los adquiridos durante la separación de hecho de los cónyuges.

Se permite renunciar, en las capitulaciones matrimoniales o en un convenio que deberá hacerse en escritura pública, a las ventajas de la distribución final

El progenitor o progenitora que tenga el cuidado personal de los hijos o hijas menores de edad y se trata de un bien inmueble que se utiliza como habitación familiar, tendrá preferencia para el pago del monto que corresponde como ganancial. La misma regla se aplicará cuando dicho bien se encuentre en copropiedad.”

“Artículo 48.- Divorcio. Causales

Será motivo para decretar el divorcio:

- 1) El adulterio de cualquiera de los cónyuges;
- 2) El atentado de uno de los cónyuges contra la vida del otro o de sus hijos;

- 3) La tentativa de uno de los cónyuges para prostituir o corromper al otro cónyuge y la tentativa de corrupción o la corrupción de los hijos de cualquiera de ellos;
- 4) La sevicia en perjuicio del otro cónyuge o de sus hijos;
- 5) La separación judicial por un término no menor de un año, si durante ese lapso no ha mediado reconciliación entre los cónyuges; durante dicho lapso el tribunal, a solicitud de los interesados y con un intervalo mínimo de tres meses, celebrará no menos de dos comparecencias para intentar la reconciliación entre los cónyuges. La primera comparecencia no podrá celebrarse antes de tres meses de decretada la separación.

Para tales efectos, el despacho judicial solicitará los informes que considere pertinentes.

Si alguno de los cónyuges no asistiere a las comparecencias, si estas no se solicitan, o si las conclusiones a que llegue el tribunal así lo aconsejan, el plazo para decretar el divorcio será de dos años;

- 6) La ausencia del cónyuge, legalmente declarada; y
- 7) (Derogado)
- 8) La separación de hecho por un término no menor de tres años.

También podrá decretarse el divorcio por el mutuo consentimiento de los cónyuges, el cual se tramitará conforme lo dispone el Código Procesal de Familia y deberá presentarse al tribunal el convenio en escritura pública en la forma indicada en el artículo 60 de esta ley. El convenio y la separación, si son procedentes y no perjudican los derechos de los menores, se aprobarán por el tribunal en resolución considerada; el despacho podrá pedir que se complete o aclare el convenio presentado si es omiso, oscuro en los puntos señalados en este artículo de previo a su aprobación.”

“Artículo 60.- Separación por mutuo consentimiento. Momento en que puede pedirse

Se puede decretar la separación judicial de los cónyuges por mutuo consentimiento de acuerdo con el procedimiento establecido en el Código Procesal de Familia. Los esposos que la pidan deben presentar al tribunal un convenio firmado en escritura pública por ambos cónyuges, o en su defecto por apoderado especialísimo para el acto que contenga cada uno

de los puntos requeridos según este artículo; pero únicamente uno de los cónyuges puede estar representado; documento en el cual se debe hacer mención sobre los siguientes puntos:

- 1) A quien corresponde la guarda, crianza y educación de los hijos comunes menores de edad.
- 2) Cuál de los dos cónyuges asume la obligación de alimentar a dichos hijos y la proporción en que se obligan ambos.
- 3) Establecimiento del derecho o no de obligación alimentaria entre los cónyuges y el monto en que se obligan.
- 4) Sobre la propiedad de los bienes habidos en el patrimonio de los cónyuges.

Este pacto no valdrá mientras no se pronuncie la aprobación de la separación.

El convenio no podrá surtir efecto para su homologación si no es presentado ante el despacho antes de los tres meses posteriores a su celebración notarial.

Lo convenido con respecto a los hijos podrá ser modificado por el tribunal.

El convenio y la separación, si son procedentes y no perjudican los derechos de los menores de edad, se aprobarán por el tribunal, quien podrá pedir que se complete o aclare el convenio presentado si es omiso u oscuro en los puntos señalados en este artículo de previo a su aprobación.”

“Artículo 84.- Reconocimiento administrativo de la paternidad

Podrán ser reconocidos por sus padres todos los hijos habidos fuera de matrimonio y cuya paternidad no conste en el Registro Civil; igualmente los hijos por nacer y los hijos muertos.

Si el hijo no tiene paternidad asignada, el reconocimiento se hará ante el Registro Civil o notario público siempre que ambos padres comparezcan personalmente o haya mediado consentimiento expreso de la madre. El notario público deberá enviar el acta respectiva al Registro Civil dentro de los ocho días hábiles siguientes.

Si el hijo tuviera una paternidad asignada registralmente, por motivo de la presunción de paternidad de un padre que no corresponde a la verdad biológica, se podrá pedir su reconocimiento por quien corresponda ante el Registro Civil según los trámites administrativos contemplados en las normas orgánicas de esta institución. Si sucediere una oposición

fundada del padre o la madre registrales, el asunto deberá conocerse jurisdiccionalmente mediante el proceso resolutivo familiar de filiación.

Artículo 85.- Reconocimiento mediante juicio

En un proceso de impugnación de paternidad o de impugnación de reconocimiento de paternidad, podrá reconocerse al hijo o a la hija cuya paternidad inscrita se pretenda desplazar mediante pretensión que se pedirá hasta antes de terminar la recepción de prueba y surtirá efecto únicamente ante el acogimiento de la pretensión principal de desplazamiento de estado.

Tanto en los casos del artículo anterior como en el que establece este artículo, el funcionario encargado o el juez podrá solicitar la realización de la prueba científica establecida en el artículo 98 de este Código.”

Artículo 102.- Efectos de la adopción

La adopción produce los siguientes efectos:

- a) ...
- b) ...
- c) En lo concerniente al término y la suspensión de los atributos de la responsabilidad parental, para la adopción regirá lo estipulado en este Código.”

Artículo 107.- Impedimentos para adoptar

No podrán adoptar:

- a) ...
- b) ...
- c) ...
- d) Quienes hayan sido privados o suspendidos del ejercicio de los atributos de la responsabilidad parental, sin el asentimiento expreso del tribunal.”

Artículo 109.- Personas adoptables

La adopción procederá en favor de:

- a) Las personas menores de edad de quienes se haya declarado en juicio la terminación de los atributos de la responsabilidad parental de sus padres, excepto cuando un cónyuge adopte a los hijos menores del otro, siempre y cuando el cónyuge con quien viven los

menores ejerza, en forma exclusiva, los atributos de la responsabilidad parental.

- b) ...
- c) ...”

“Artículo 140.- Atributos de la responsabilidad parental

Compete a los padres regir a los hijos, protegerlos, administrar sus bienes y representarlos legalmente. En caso de que exista entre ellos opuesto interés, los hijos serán representados por un curador especial.

Artículo 141.- Atributos de la responsabilidad parental. Derechos y obligaciones. Irrenunciabilidad

Los derechos y obligaciones inherentes a los atributos de la responsabilidad parental no pueden renunciarse. Tampoco pueden modificarse por acuerdo de partes, salvo lo dispuesto para la separación y divorcio por mutuo consentimiento, en cuanto se refiera a la guarda, crianza y educación de los hijos.”

“Artículo 143.- Atributos de la responsabilidad parental y representación. Deberes y derechos

Los atributos de la responsabilidad parental confieren los derechos e impone los deberes de orientar, educar, cuidar, vigilar y disciplinar a los hijos y las hijas; esto no autoriza, en ningún caso, el uso del castigo corporal ni ninguna otra forma de trato humillante contra las personas menores de edad.

Asimismo, faculta para pedir al tribunal que autorice la adopción de medidas necesarias para coadyuvar a la orientación del menor, las cuales pueden incluir su internamiento en un establecimiento adecuado, por un tiempo prudencial. Igual disposición se aplicará a los menores de edad con terminación o que no estén sujetos de alguna persona de los atributos de la responsabilidad parental, en cuyo caso la solicitud podrá hacerla el Patronato Nacional de la Infancia. El internamiento se prolongará hasta que el tribunal decida lo contrario, previa realización de los estudios periciales que se requieran para esos efectos; estos estudios deberán ser rendidos en un plazo contado a partir del internamiento.”

“Artículo 145.- Atributos de la responsabilidad parental. Administración de bienes de hijos menores de edad

Los atributos de la responsabilidad parental comprenden el derecho y la obligación de administrar los bienes del hijo menor.

El hijo menor administrará y dispondrá como si fuera mayor de edad los bienes que adquiriera con su trabajo.

Se exceptúan de la administración paterna los bienes heredados, legados o donados al hijo, si así se dispone por el testador o donante, de un modo expreso o implícito. En tal caso se nombrará un administrador.

Artículo 146.- Atributos de la responsabilidad parental. Bienes de hijos menores de edad. Exento de cautela preventiva

El ejercicio de los atributos de la responsabilidad parental, en cuanto a los bienes del menor, no está sujeto a cautela preventiva alguna, salvo lo dispuesto en el artículo 149.

Artículo 147.- Atributos de la responsabilidad parental. Enajenación y gravamen de bienes del hijo

Los atributos de la responsabilidad parental no dan derecho a enajenar ni a gravar los bienes del hijo, salvo en caso de necesidad o de provecho evidente para el menor. Para ello será necesaria autorización judicial si se tratare de inmuebles o de muebles con un valor superior a diez mil colones.

Artículo 148.- Atributos de la responsabilidad parental. Reemplazo

Quien ejerza los atributos de la responsabilidad parental entregará a su hijo mayor o emancipado o a la persona que lo reemplace en la administración cuando esta concluya por otra causa, todos los bienes y frutos que pertenezcan al hijo y rendirá cuenta general de dicha administración.

Cuando procediere el nombramiento de un administrador de bienes, el tribunal, atendidas las circunstancias, señalará el honorario que haya de cobrar aquel.

En el caso de que la administración de los bienes del menor esté a cargo de personas distintas de aquella que tuviere la guarda, crianza y educación del mismo, el tribunal autorizará la suma periódica que debe ser entregada para su alimentación.”

Artículo 151.- Ejercicio conjunto, casos de conflicto, administración de bienes de hijo

El padre y la madre ejercen, con iguales derechos y deberes, los atributos de la responsabilidad parental sobre los hijos habidos en el matrimonio. En caso de conflicto, a petición de cualquiera de ellos y

mediante el procedimiento resolutivo familiar establecido en el Código Procesal de Familia, el juez decidirá oportunamente. Se deberá resolver tomando en cuenta el interés superior del menor de edad.

La administración de los bienes del hijo corresponde a aquel que se designe de común acuerdo o por disposición del tribunal.

Artículo 152.- Hijos menores de edad. Atributos de la responsabilidad parental, guarda, crianza y educación

En caso de divorcio, nulidad de matrimonio o separación judicial, el tribunal, tomando en cuenta primordialmente el interés de los hijos menores, dispondrá, en la sentencia, todo lo relativo a los atributos de la responsabilidad parental, guarda, crianza y educación de ellos, administración de bienes y adoptará las medidas necesarias concernientes a las relaciones personales entre padres e hijos y los abuelos de estos. Queda a salvo lo dispuesto para el divorcio y la separación por mutuo consentimiento. Sin embargo, el tribunal podrá en estos casos improbar o modificar el convenio en beneficio de los hijos.

Lo resuelto conforme a las disposiciones anteriores no constituye cosa juzgada y el tribunal podrá modificarlo por vía incidental, a solicitud de parte o del Patronato Nacional de la Infancia, de acuerdo con la conveniencia de los hijos o por un cambio de circunstancias.”

“Artículo 155.- Atributos de la responsabilidad parental. Hijos habidos fuera de matrimonio

La madre, aún cuando fuere menor, ejercerá los atributos de la responsabilidad parental sobre los hijos habidos fuera del matrimonio y tendrá plena personería jurídica para esos efectos.

El tribunal puede, en casos especiales, a juicio suyo, a petición de parte o del Patronato Nacional de la Infancia y atendiendo exclusivamente al interés de los menores, conferir los atributos de la responsabilidad parental al padre conjuntamente con la madre.”

“Artículo 158.- Extinción de los atributos de la responsabilidad parental

Los atributos de la responsabilidad parental se extinguen:

- a) Por el matrimonio o la mayoría adquirida.
- b) Por la muerte de quienes la ejerzan o de la persona menor de edad.

Artículo 159.- Suspensión de los atributos de la responsabilidad parental

Son causas de suspensión de los atributos de la responsabilidad parental:

- a) Cuando el uso indebido y habitual de drogas u otras sustancias estupefacientes torne imposible la convivencia y el sano ejercicio de los deberes y derechos para con los hijos.
- b) Por cualquier otra forma de mala conducta notoria de los padres, abuso del poder paterno e incumplimiento de los deberes familiares.”

“Artículo 162.- Atributos de la responsabilidad parental. Negocios del menor de edad. Nombramiento de representante legal

Cuando quien tenga la responsabilidad parental del menor edad estuviere incapacitado para determinado o determinados negocios del mismo, se le nombrará al menor un representante legal para ese negocio.

Artículo 163.- Recuperación de los atributos de la responsabilidad parental

Cuando haya cesado el motivo de la suspensión o de la incapacidad, el suspendido o el incapacitado recobrará los derechos de los atributos de la responsabilidad parental, mediante declaratoria expresa del tribunal que lo rehabilite, siempre y cuando la persona menor de edad no haya sido declarado adoptable.

Artículo 164.- Alimentos. Prestaciones que comprende

Se entiende por alimentos lo que provea sustento, habitación, vestido, asistencia médica, diversión, transporte y otros, además de todo lo referente a la educación, instrucción o capacitación para el trabajo de los alimentarios menores de edad o incapaces, todo conforme a las posibilidades económicas y el capital que le pertenezca o posea quien ha de darlos. Se tomará en cuenta las necesidades y el nivel de vida acostumbrado por el beneficiario, para su normal desarrollo físico y psíquico, así como sus bienes.

Las personas obligadas al pago de una pensión alimentaria deberán cancelar en forma obligatoria y por concepto de aguinaldo, dentro de los primeros quince días del mes de diciembre de cada año, una cuota igual a la que se paga como ordinaria, sin necesidad de que se ordene en resolución.

Según proceda, según si el demandado recibe beneficio de salario escolar en sus ingresos y se trate de beneficiarios que necesitan de gastos adicionales para la actividad académica, es obligatorio el pago de una cuota igual a la ordinaria, ello en el mes de enero de cada año para estos fines. Si la autoridad judicial dispone, puede establecerse un monto fijo anual por este concepto de inicio de lecciones para quienes no reciben salario escolar en sus ingresos salariales, lo cual se establecerá en dependencia con las necesidades de ese tipo de los beneficiarios y el ingreso de los obligados.

Artículo 165.- Pensiones alimentarias. Forma de pago

Las cuotas de pensiones alimentarias se fijarán en una suma pagadera en cuotas quincenales o mensuales anticipadas. Serán exigibles por la vía de apremio corporal, lo mismo que la cuota de aguinaldo, el salario escolar o los gastos de inicio de lecciones y el pago de los tractos acordados.

La cuota alimentaria se cancelará en moneda nacional, salvo pacto en contrario, en cuyo caso se cubrirá en moneda nacional.”

“Artículo 168.- Restitución de cuotas de alimentos fijadas sin derecho

Cuando en la sentencia anticipada de pensión alimentaria se fije una cuota alimentaria y en el proceso se decide que el deudor demandado no es obligado preferente o que el acreedor alimentario no tiene derecho a los alimentos; quien la haya pagado, sus representantes o personas herederas podrán exigir la restitución del monto cubierto.”

“Artículo 175.- Tutela. Menor de edad que no tiene sobre si los atributos de la responsabilidad parental

El menor de edad que no exista sobre él atributo de la responsabilidad parental de ninguno de los padres estará sujeto a tutela.

Artículo 176.- Tutor. Nombramiento en testamento

Quienes ejerzan los atributos de la responsabilidad parental podrán nombrar en testamento, tutor a sus hijos cuando estos no hayan de quedar sujetos a la patria potestad del padre sobreviviente.”

“Artículo 183.- Tutor. Derecho de prioridad

Quien haya recogido un niño expósito o abandonado será preferido en la tutela.

Cuando un menor de edad no sujeto a atributos de responsabilidad parental fuere acogido en un establecimiento de asistencia social, el director o jefe de la institución será su tutor y representante legal desde el momento del ingreso.

El cargo no necesita discernimiento, pero el tutor está obligado a rendir al tribunal un informe anual sobre la situación del pupilo y sus bienes.

Asimismo informará al tribunal del ingreso o salida del menor del establecimiento.”

“Artículo 187.- Tutor. Impedimentos para su nombramiento

No podrá ser tutor:

- 1.- El menor de edad ni la persona declarada en estado de interdicción.
- 2.- La persona que presente una discapacidad que le dificulte tratar personalmente los negocios propios.
- 3.- Quien tenga deudas con el menor de edad, a no ser que el testador lo haya nombrado con conocimiento de la deuda y lo haya declarado así, expresamente, en el testamento.
- 4.- El que tenga pendiente litigio propio o de sus ascendientes, descendientes o cónyuge con el menor de edad.
- 5.- Quien no tenga domicilio en el territorio nacional.
- 6.- El que haya sido removido de otra tutela por incumplir sus obligaciones y aquel que al rendir cuentas, estas le hubieren sido rechazadas por inexactas.
- 7.- Quien haya incurrido en ofensa o daño grave contra el menor de edad o sus padres.
- 8.- El que no tenga oficio ni medio de vida conocido, o sea notoriamente de mala conducta.
- 9.- Los funcionarios o empleados del tribunal que conocen del caso, salvo que se trate de tutela legítima o testamentaria.
- 10.- Quien hubiere sido privado de los atributos de la responsabilidad parental.”

“Artículo 243.- Unión de hecho. Solicitud de reconocimiento

Para los efectos indicados en el artículo anterior, cualquiera de los convivientes o sus herederos podrá solicitar al tribunal el reconocimiento de la unión de hecho; la acción caducará en dos años a partir de la ruptura de la convivencia o de la muerte del causante.

Los convivientes, en forma conjunta, podrá solicitar al tribunal el reconocimiento de la unión una vez finalizada y con el mismo plazo de

caducidad, mediante el trámite establecido en el Código Procesal de Familia, para lo cual se deberán plasmar en una escritura pública los respectivos acuerdos referentes a los bienes constantes en el patrimonio de los convivientes, lo referido a alimentos entre ellos, custodia, alimentos e interrelación de hijos menores de edad, según el artículo 60 del Código de Familia y en ella se deberá plasmar las declaraciones de al menos dos personas que manifiesten sobre la existencia de la unión y los requisitos del artículo anterior.”

III.- Las siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, N.º 7333, y sus reformas

“Artículo 55.- En materia laboral y de juicios universales, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia conocerá:

- 1.- De los recursos de casación y revisión que procedan, con arreglo a la ley, en juicios ordinarios o abreviados de derecho sucesorio y en juicios universales, o en las ejecuciones de sentencia en que el recurso no sea del conocimiento de la Sala Primera.
- 2.- Del recurso de casación en los asuntos de la jurisdicción de trabajo cuya cuantía, determinada exclusivamente por el monto de sus pretensiones no accesorias, conforme con la cuantía que para este recurso establezca la Corte Plena, o cuando la cuantía sea inestimable. También conocerá del recurso de casación que proceda en los procesos de protección de fueros especiales y tutela del debido proceso con independencia de que se trate de una relación pública o privada de empleo. Lo que resuelva la Sala sobre la competencia para conocer del recurso de casación, será vinculante para los otros órganos jurisdiccionales.
- 3.- De las demandas de responsabilidad civil contra los jueces integrantes de los tribunales colegiados de cualquier materia, excepto los de trabajo de menor cuantía.
- 4.- De las cuestiones de competencia que se susciten en asuntos de la jurisdicción laboral, cuando no corresponda resolverlos a otros tribunales de esa materia.
- 5.- De las competencias entre jueces civiles que pertenezcan a la circunscripción de tribunales colegiados de diferente territorio, en cualquier clase de asuntos, cuando no corresponda resolver la cuestión a la Sala Primera.”

“Artículo 99.- Los tribunales colegiados de familia conocerán:

- 1.- Recursos de apelaciones interlocutorias y de sentencias de los procesos conocidos en los juzgados de familia, juzgados de niñez y adolescencia y juzgados de violencia doméstica y protección cautelar, salvo la sentencias finales de los procesos de restitución internacional de personas menores de edad.
- 2.- Los conflictos de competencia entre juzgados de familia; entre juzgados de niñez y adolescencia, entre juzgados de violencia doméstica y de protección cautelar o entre dos de cualquiera de este tipo de juzgados.
- 3.- Los impedimentos, excusas y recusaciones de uno o varios de sus miembros propietarios o suplentes.
- 4.- Los demás asuntos que determine la ley.”

“Artículo 106.- Los juzgados de familia conocerán:

- 1.- Los procesos resolutivos familiares cuya resolución final tiene eficacia de cosa juzgada material, salvo los que son de conocimiento de los juzgados de niñez y adolescencia.
- 2.- La ejecución de sentencia provenientes de procesos resolutivos familiares cuya resolución final tiene eficacia de cosa juzgada material, salvo los que son de conocimiento de los juzgados de niñez y adolescencia.
- 3.- Las diligencias de divorcio, separación judicial y unión de hecho por mutuo consentimiento, salvo cuando se trate de matrimonios sin hijos o hijas menores de edad o discapacitados y no existiere referencia a bienes, caso en el cual se tramitará en sede notarial.
- 4.- Las diligencias de adopción de personas menores de edad y la de personas mayores de edad con algún grado de discapacidad que le impida otorgar su consentimiento y la oposición de estas o de las diligencias conocidas en sede notarial.
- 5.- Los recursos de apelación provenientes de los juzgados de pensiones alimentarias y juzgados de asuntos sumarios, salvo los de conocimiento del juzgado de niñez y adolescencia.
- 6.- Los conflictos de competencia entre juzgados de pensiones alimentarias o entre juzgados de asuntos sumarios, en estos últimos

siempre que no se trata de pretensiones relacionadas con derechos de personas menores de edad.

7.- Los demás asuntos que estipule la ley.”

“Artículo 120.- Los juzgados de pensiones alimentarias conocerán:

1.- Todos los asuntos referidos a prestaciones alimentarias derivadas de las relaciones familiares.

2.- La ejecución de pago de alimentos retroactivos estipulados en la sentencia del proceso resolutivo familiar de establecimiento de filiación.

3.- Los demás asuntos que estipule la ley.”

IV.- Las siguientes del Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley N.º 7739

“Artículo 16.- Control de salidas

La Dirección General de Migración y Extranjería otorgará permiso de salida temporal del país a las personas menores de edad, costarricenses o extranjeras, que gocen de una permanencia legal en el país, previa autorización expresa de quienes ejerzan los atributos de la responsabilidad parental o su representación legal. Cuando no exista la autorización de quienes ejerzan los atributos de la responsabilidad parental o su representación legal, el Patronato Nacional de la Infancia deberá autorizar el permiso de salida. Estas autorizaciones podrán ser revocadas, en cualquier momento por quien la haya otorgado. El Poder Ejecutivo o el Patronato Nacional de la Infancia, según corresponda, reglamentarán la forma, las condiciones los requisitos y procedimientos para otorgar los referidos permisos temporales de salida y revocarlos.

Sin el permiso de salida, la Dirección General de Migración no podrán permitir el egreso de las personas menores de edad. No requerirán la referida autorización para salir del país, los menores autorizados para salir del país y los menores autorizados para permanecer en el país como no residentes.

Si se trata de permiso de salida permanente del país de personas menores de edad con oposición de uno de los padres para una nueva residencia fuera del territorio nacional, el trámite deberá hacerse en forma judicial mediante el procedimiento resolutivo familiar, salvo que exista ausencia declarada del padre que no ha dado consentimiento, en cuyo caso el trámite se hará en la oficina administrativa según el procedimiento de este artículo.”

“Artículo 25.- **Derecho a la privacidad**

Las personas menores de edad tendrán derecho a no ser objeto de injerencia en su vida privada, familia, domicilio y correspondencia; sin perjuicio de los derechos y deberes inherentes a los atributos de la responsabilidad parental.”

“Artículo 36.- **Causales de separación definitiva**

Las causas que dan lugar a la separación definitiva de una persona menor de edad de su familia son las previstas en el Código de Familia como causales de pérdida y suspensión de los atributos de la responsabilidad parental. Esta suspensión o terminación solo podrán ser decretadas por un juez.”

“Artículo 140.- **Incumplimiento de medidas**

De incumplirse algunas de las medidas previstas en los artículos 135 a 136, la oficina local del Patronato Nacional de la Infancia podrá adoptar una medida alternativa, ampliar el plazo de cumplimiento de la anterior o remitir el asunto al juez, para la suspensión de los atributos de la responsabilidad parental.

Si la medida incumplida fuere una de las previstas en el artículo 137, la oficina local del Patronato pondrá la denuncia ante la autoridad administrativa a quién corresponda tomar las acciones coercitivas que proceda.”

V.- El siguiente del Código Civil

“Artículo 880.- **Casos de suspensión**

No corre la prescripción:

- 1.- ...
- 2.- Entre padres e hijos durante se mantenga los atributos de la responsabilidad parental.
- 3.- ...
- 4.- ...
- 5.- ...”

VI.- Los siguientes del Código Penal

“Artículo 57.- Inhabilitación absoluta

La inhabilitación absoluta que se extiende de seis meses a doce años, excepto la señalada en el inciso 6) de este artículo, que se extiende de cuatro años a cincuenta años, produce al condenado a lo siguiente:

- 1) ...
- 2) ...
- 3) ...
- 4) ...
- 5) Incapacidad para ejercer los atributos de la responsabilidad parental, tutela, curatela o administración judicial de bienes.
- 6) ...”

“Artículo 187.- El que incumpliere o descuidare los deberes de protección, de cuidado y educación que le incumbieren con respecto a un menor de dieciocho años, de manera que este se encuentre en situación de abandono material o moral, será reprimido con prisión de seis meses a un año o de veinte a sesenta días multa, y además con incapacidad para ejercer los atributos de la responsabilidad parental de seis meses a dos años. Al igual pena estará sujeto el cónyuge que no proteja y tenga en estado de abandono material a su otro cónyuge. En este caso y en los previstos por los artículos 185 y 186, quedará exento de pena el que pague los alimentos debidos y diere seguridad razonable, a juicio del juez, del ulterior cumplimiento de sus obligaciones.

Artículo 188.- Será penado con prisión de seis meses a dos años y además pérdida e incapacidad para ejercer los respectivos derechos o cargos, de seis meses a dos años, el que incumpliere o abusare de los derechos que le otorgue el ejercicio de los atributos de la responsabilidad parental, la tutela o curatela en su caso, con perjuicio evidente para el hijo pupilo o incapaz.”

VII.- El siguiente de la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia

“Artículo 4.- Atribuciones

Las atribuciones del Patronato Nacional de la Infancia serán:

- a) ...
- b) ...
- c) ...
- d) ...
- e) ...
- f) ...

- g) ...
- h) ...
- i) ...
- j) ...
- k) ...
- l) Representar legalmente a los menores de edad que no se encuentren bajo los atributos de la responsabilidad parental ni tutela, así como a quienes estén bajo esos atributos de una persona no apta para asegurarles la garantía de sus derechos.
- m) ...
- n)
- ñ) ...
- o) ...
- p) ...
- q) .
- r) ...
- s) ...
- t) ...
- u) ...”

VIII.- El siguiente de la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos

“Artículo 85.- Muerte del arrendatario de vivienda

En caso de muerte del titular en un arrendamiento para vivienda, las siguientes personas pueden subrogarse en el contrato, de pleno derecho, sin que precise trámite sucesorio, en el orden de prelación que aquí aparecen:

- a)
- b)
- c) Los descendientes del arrendatario que, en el momento de su fallecimiento, estén sujetos a los atributos de la responsabilidad parental o hayan convivido habitualmente con él en la vivienda arrendada.
- d)
- e)
- f)

El arrendador podrá invocar la resolución del contrato si en el plazo de treinta días no se le notifica el hecho del fallecimiento del arrendatario, acompañando certificación registral de la defunción y la prueba de identidad y del derecho del subrogado.

Si en el momento de fallecer el arrendatario no existe ninguna de las personas citadas en los incisos anteriores, el arrendamiento quedará

extinguido y el arrendador podrá promover proceso de desahucio por desalojo en lo personal.”

IX.- Los siguientes de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

“Artículo 110.- Además de lo dispuesto en el artículo anterior, corresponde al director general de Bienestar Social:

- a) ...
- b) ...
- c) Denunciar ante la Procuraduría General de la República, graves situaciones conocidas en las oficinas bajo su dependencia, relacionadas con el incumplimiento de obligaciones de los atributos de la responsabilidad parental y que según la ley sean motivo para la suspensión o terminación de estos atributos.
- d) ...
- e) ...
- f) ...”

“Artículo 114.- Esta oficina tendrá a cargo las siguientes funciones:

- a) ...
- b) Ofrecer asesoría, guía y conciliación en los casos que presenten problemas de relaciones conyugales o con motivo del ejercicio de los atributos de la responsabilidad parental.”

X.- El siguiente de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil

“Artículo 58.- En la inscripción del matrimonio, además de las declaraciones generales, deben consignarse:

- a) Nombres, apellidos y generales de los cónyuges, con indicación de su estado civil anterior;
- b) Nombres, apellidos y nacionalidad de los progenitores de los contrayentes, si fueren conocidos;
- c) Nombres, apellidos y generales del funcionario y testigos ante quienes se hubiere celebrado el matrimonio; y
- d) Lugar, hora, día, mes y años, edificio público o particular en que el matrimonio se hubiere celebrado.

Si hubiere habido dispensa o hubiere sido necesario el consentimiento de quien ejerciere los atributos de la responsabilidad parental o la tutela, se harán constar esas circunstancias.”

XI.- El siguiente de la Ley de certificaciones, firmas digitales y documentos electrónicos (Ley N.º 8454)

“Artículo 5.- En particular y excepciones:

En particular y sin que conlleve la exclusión de otros actos, contratos o negocios jurídicos, la utilización de documentos electrónicos es válida para lo siguiente:

- a)** La formación, formalización y ejecución de los contratos.
- b)** El señalamiento para notificaciones conforme a la Ley de notificaciones, citaciones y otras comunicaciones judiciales.
- c)** La tramitación, gestión y conservación de expedientes judiciales y administrativos; asimismo, la recepción, práctica y conservación de prueba, incluida la recibida por archivos y medios electrónicos. De igual manera, los órganos jurisdiccionales que requieran la actualización de certificaciones y, en general, de otras piezas, podrán proceder sobre simples impresiones de los documentos en línea efectuadas por el despacho o aceptar las impresiones de dichos documentos en línea, aportadas por la parte interesada y certificadas notarialmente
- d)** La emisión de certificaciones, constancias y otros documentos.
- e)** La presentación, tramitación e inscripción de documentos en el Registro Nacional.
- f)** La gestión, conservación y utilización, en general, de protocolos notariales, incluso la manifestación del consentimiento y la firma de las partes.

No se podrán consignar en documentos electrónicos:

- a)** Los actos o negocios en los que, por mandato legal, la fijación física resulte consustancial.
- b)** Las disposiciones por causa de muerte.
- c)** Los actos y convenios *no jurisdiccionales* relativos al derecho de familia.
- d)** Los actos personalísimos en general.”

ARTÍCULO 4.- Adiciones a otras leyes

1.- Adiciónese un segundo apartado al título preliminar del Código de Familia, Ley N.º 5476, con los siguientes artículos:

2.- Normas de Aplicación del Derecho Internacional de Familia

“Artículo 5.- Normas aplicables

Las normas jurídicas aplicables a situaciones vinculadas con varios ordenamientos jurídicos nacionales se determinan por los tratados y las convenciones internacionales vigentes de aplicación en el caso y, en defecto de normas de fuente internacional, se aplican las normas del derecho internacional privado costarricense de fuente interna determinadas en esta ley.

Artículo 6.- Aplicación del derecho extranjero

Cuando un derecho extranjero resulte aplicable el juez costarricense lo hará de oficio y evitando la figura del reenvío, pudiendo contar con la directa colaboración de las partes. El juez buscará tener en claro la vigencia, el contenido y la interpretación actual del derecho extranjero. Dicha interpretación será tal y como es realizada por los jueces del Estado al que ese derecho pertenece.

Para poder demostrar lo anterior el juez podrá utilizar todos los mecanismos que considere necesarios y a su juicio podrá utilizar los siguientes recursos:

- a)** La prueba documental, consistente en copias certificadas de textos legales con indicación de su vigencia, o precedentes judiciales;
- b)** La prueba pericial, consistente en dictámenes de abogados o expertos en la materia;
- c)** Informes del Estado requerido sobre el texto, vigencia, sentido y alcance legal de su derecho sobre determinados aspectos.

Si existieran varios sistemas jurídicos co-vigentes con competencia territorial o personal, o se sucedieran diferentes ordenamientos legales, el derecho aplicable se determinará por las reglas en vigor dentro del Estado al que ese derecho pertenece y, en defecto de tales reglas, por el sistema jurídico que presente los vínculos más estrechos con la relación jurídica de que se trate.

Si diversos derechos fueran aplicables a diferentes aspectos de una misma situación jurídica o a diversas relaciones jurídicas comprendidas en un mismo caso, esos derechos deberán ser armonizados por el juez,

procurando realizar las adaptaciones necesarias para respetar las finalidades perseguidas por cada uno de ellos.

La parte que se estime afectada por la vulneración de la presente norma y que lo haya alegado antes de la sentencia de primera instancia, podrá interponer en el momento procesal oportuno recurso de casación por la infracción, interpretación errónea o aplicación indebida de una ley de otro Estado contratante, en las mismas condiciones y casos que respecto del derecho nacional.

Las disposiciones de derecho extranjero aplicables deben ser excluidas cuando conducen a soluciones sean incompatibles con consecuencias que vulneren los principios fundamentales de orden público internacional que inspiran el ordenamiento jurídico costarricense.

Artículo 7.- Ley aplicable al estado y capacidad de las personas.

La ley aplicable al estado de las persona será la de su domicilio. En ausencia del anterior, aplicará la ley de la residencia habitual.

La capacidad de las personas estará sujeta a la ley del lugar de celebración del acto o contrato de familia realizado. En defecto de lo anterior, será aplicable la ley del domicilio de la persona y de no existir este regirá la ley de la nacionalidad.

El cambio de domicilio de la persona no afecta su capacidad una vez que ha sido adquirida.

Artículo 8.- Ley aplicable a la cuestiones de familia

Las partes podrán determinar, como regla general, el derecho aplicable a su relación jurídica, lo cual será realizado ya sea de forma expresa o bien tácita. Lo anterior será posible siempre que no se afecten derechos de terceros o bien se vulnere debido a sus consecuencias los principios de orden público internacional de Costa Rica o del país cuyo derecho fuera originalmente aplicable en ausencia de voluntad de partes.

En ausencia de lo anterior las relaciones de familia serán regidas por las siguientes disposiciones:

En cuanto al matrimonio, el divorcio, la separación y la unión de hecho. La ley del lugar de la celebración del matrimonio rige la forma, la existencia y la validez del acto matrimonial. Las pretensiones relacionadas con los efectos personales y económicos del matrimonio con excepción de las obligaciones alimentarias, así como del divorcio y la separación serán regidas por el derecho del último domicilio conyugal y en su defecto el de su última residencia habitual común. De no existir

ninguno de los anteriores, regirá el derecho del lugar de celebración del matrimonio. En cuanto a las uniones de hecho, sus efectos personales y patrimoniales con excepción de las obligaciones alimentarias, se rigen por el derecho de la última residencia habitual común de la pareja.

En cuanto a la filiación: Las condiciones del reconocimiento se rigen por el derecho del domicilio del hijo al momento del nacimiento o al tiempo del acto o por el derecho del domicilio del autor del reconocimiento al momento del acto. La forma del reconocimiento se rige por el derecho del lugar del acto o por el derecho que lo rige en cuanto al fondo. Todo emplazamiento filial constituido de acuerdo con el derecho extranjero debe ser reconocido en la República de conformidad con los principios de orden público internacional costarricense, especialmente aquellos que imponen considerar prioritariamente el interés superior del niño. Los principios que regulan las normas sobre filiación por técnicas de reproducción humana asistida integran el orden público internacional y deben ser ponderados por la autoridad competente en ocasión de que se requiera su intervención a los efectos del reconocimiento de estado o inscripción de personas nacidas a través de estas técnicas. En todo caso, se debe adoptar la decisión que redunde en beneficio del interés superior del niño.

En cuanto a las obligaciones alimentarias: Las obligaciones alimentarias, así como las calidades de acreedor y de deudor de alimentos, se regularán por aquel de los siguientes órdenes jurídicos que, a juicio de la autoridad competente, resultare más favorable al interés del acreedor:

- 1) El ordenamiento jurídico del Estado del domicilio o de la residencia habitual del acreedor;
- 2) El ordenamiento jurídico del Estado del domicilio o de la residencia habitual del deudor.

Serán regidas por el derecho aplicable las siguientes materias: El monto del crédito alimentario y los plazos y condiciones para hacerlo efectivo; La determinación de quienes pueden ejercer la acción alimentaria en favor del acreedor, y las demás condiciones requeridas para el ejercicio del derecho de alimentos.

Artículo 9.- Domicilio y residencia habitual

Para los fines del derecho internacional de familia la persona humana tiene su domicilio, en el Estado en que reside con la intención de establecerse en él y su residencia habitual en el Estado en el que tiene su círculo social de vida por un tiempo prolongado.

Una persona no puede tener varios domicilios al mismo tiempo. En caso de no tener domicilio conocido, se considera que lo tiene donde está su residencia habitual o, en su defecto, el lugar donde se localice.

El domicilio de las personas menores de edad se encuentra en el Estado del domicilio de quienes ejercen los atributos de la responsabilidad parental. Si el ejercicio de estos atributos es conjunto en ambos padres y estos se domicilian en Estados diferentes, las personas menores de edad se consideran domiciliadas donde tienen su residencia habitual.

Sin perjuicio de lo dispuesto por convenciones internacionales, las personas menores de edad que han sido sustraídos o retenidos ilícitamente no adquieren domicilio en el lugar donde permanezcan sustraídos, fuesen trasladados o retenidos ilícitamente.

El domicilio de las personas sujetas a curatela u otro instituto equivalente de protección es el lugar de su residencia habitual.

El domicilio de personas que actúan en función diplomática, así como de las personas que residan temporalmente en el extranjero por razones de trabajo, estudios u otros, será el último que hayan tenido en su territorio nacional.”

2.- Adiciónese el siguiente artículo al Código de Familia, Ley N.º 5476

“Artículo 158 bis.- Pérdida de los atributos de la responsabilidad parental

Son causas de pérdida de los atributos de la responsabilidad parental:

- a)** El estado de abandono en que se encuentra la persona menor de edad.
- b)** Cuando habiendo sido suspendido esos atributos, no se demuestre haber modificado la situación de vulnerabilidad en el plazo otorgado en la sentencia de suspensión.
- c)** Cuando la persona menor de edad haya sido objeto, por parte del padre o madre, de cualquiera de los delitos contra la integridad física y sexuales del Código Penal u otras leyes.
- d)** La ebriedad habitual, el uso indebido de drogas u otras sustancias estupefacientes, el hábito de juego en forma que perjudique el patrimonio de la familia, las costumbres depravadas y la vagancia comprobada de los padres; sin posibilidad de rehabilitación o cuando dicha conducta causó daño grave al menor de edad.

- e) La dureza excesiva en el trato o las órdenes, consejos, insinuaciones o ejemplos corruptores que los padres dieren a sus hijos.
- f) La negativa de los padres a dar alimentos a sus hijos, el dedicarlos a la mendicidad y permitir que deambulen en las calles.
- g) Incapacidad irreversible o ausencia declarada judicialmente.”

3.- Adiciónese el siguiente artículo a la Ley Orgánica del Registro Civil, Ley N.º 3504

“Artículo 63 bis.- Procedimiento para el reconocimiento de hijos biológicos con presunción de paternidad

Cuando se trate del reconocimiento de hijos ya inscritos con presunción de paternidad; el padre biológico presentará la gestión ante la oficina del Registro Civil que corresponda, la cual llamará a quienes aparecen como padres registrales para que se pronuncien sobre la petición, pudiendo estos comparecer conjuntamente con el promoverte al inicio de las diligencias.

De existir oposición de alguno de ellos, se deberá archivar el asunto y enviar a las partes a la vía contenciosa prevista en el Código Procesal de Familia.

Si hay conformidad de los padres registrales, el órgano encargado autorizará el reconocimiento, salvo que considere la verificación de algún tipo de prueba, sea testimonial o científica para determinar la veracidad de la paternidad solicitada. Recabada esta se hará pronunciamiento del mismo.”

4.- Agréguese los siguientes artículos a la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley N.º 7333, y sus reformas para que diga

“Artículo 55 bis.- La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia

En lo familiar, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia conocerá de:

- 1.- Los recursos de casación y las demandas de revisión en los procesos resolutive familiares cuya resolución tiene eficacia de cosa juzgada material y en procesos de ejecuciones de sentencia derivados de la aplicación del régimen patrimonial del matrimonio o reconocimiento de unión de hecho con cosa juzgada material.

- 2.- Los recursos de apelación contra la decisión final en los procesos de restitución internacional de personas menores de edad.
- 3.- Los conflictos de competencia material entre un juzgado o tribunal de familia y uno de otra materia cuando el que ha prevenido el asunto es el de familia; así como los conflictos de competencia territorial entre dos tribunales de familia.
- 4.- Ratificación y ejecución, cuando proceda, de sentencias pronunciadas por tribunales extranjeros, con arreglos a los tratados y leyes vigentes y de los demás casos del reconocimiento de sentencias y resoluciones extranjeras en las materias propias de familia, alimentos y niñez y adolescencia.
- 5.- Del recurso de apelación interpuesto contra la resolución que se pronunció acerca de la competencia internacional alegada.”

“Artículo 85 bis.- Personal Interdisciplinario auxiliar de justicia

Estarán adscritos de manera funcional y administrativa a cada uno de los juzgados de familia, de niñez y adolescencia y de violencia doméstica y protección cautelar, bajo la supervisión técnica del Departamento de Psicología y Trabajo Social de la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial, un grupo de especialistas que prestarán las labores que le encomienda este Código y leyes conexas, quienes, en caso de ser necesario, podrán prestar colaboración y auxilio a los juzgados de pensiones alimentarias respectivos; siendo indispensable que en cada despacho, en lo posible en forma única o compartida, la permanencia de un profesional en trabajo social y un profesional en psicología; sin perjuicio de que las funciones que se les asignan las puedan desarrollar otros profesionales adscritos a entes auxiliares del Poder Judicial, de cualquier otra institución estatal o profesionales privados.

Será potestad exclusiva de quién juzga el indicar en sus solicitudes si el auxilio deberá darse en forma conjunta entre varios profesionales o de uno solo de ellos en dependencia con al objeto probatorio y del proceso.

Corresponde a dichos especialistas:

- 1.- Rendir los peritajes e informes requeridos por la autoridad judicial competente de conformidad con lo establecido en este Código para las pruebas periciales.
- 2.- Atender y supervisar los regímenes de interrelación familiar ordenados por el juez en forma cautelar, debiendo brindar los informes requeridos por la autoridad judicial para efectos de establecer la decisión definitiva.

- 3.- Dar colaboración de contención emocional y atención profesional en caso de crisis cuando así sea requerido por alguna autoridad judicial o ente auxiliar del Poder Judicial.
- 4.- Asesorar al órgano jurisdiccional para la adecuada comparecencia, entrevista y declaración de las personas menores de edad y personas con discapacidad.
- 5.- Colaborar con la autoridad judicial en las materias relacionadas con su especialidad
- 6.- Realizar cualquier otra actividad ordenada por el órgano jurisdiccional que sea atinente y compatible con su función.
- 7.- Las demás funciones que señalen la ley o los reglamentos emitidos por el Poder Judicial.

Por ningún motivo, los especialistas a que se refiere este artículo llevarán a cabo labores de clínica o de terapia profesional.

En todo caso en el cual se soliciten el ejercicio de las funciones anteriores a varios profesionales de los indicados en uno o varios procesos que integran una misma situación familiar pendientes ante el mismo o diverso despacho judicial, deber de los profesionales auxiliares llevar a cabo todas las actividades de coordinación tendientes a evitar la revictimización de las personas a quienes se deba practicar las pericias o diligencias, para lo cual el despacho judicial podrá indicar a los profesionales la forma de entrega del respectivo informe o peritaje.

En aquellos casos en los cuales existe ya un informe pericial de este tipo en otro proceso de la misma situación familiar, se puede ordenar sustituir la pericia en el nuevo proceso por la anterior, debiendo el perito someterse al régimen de contradictorio si fuere pedido.

En aquellos casos en los cuales el profesional asignado para emitir el respectivo informe no pueda hacerlo por tener alguna causa de impedimento, inhibitoria o recusación de las establecidas para los administradores de justicia, la autoridad judicial deberá llevar a cabo el trámite necesario para sustituirlo por otro profesional de un juzgado del mismo circuito judicial o del más cercano posible.”

“Artículo 106 bis.- Juzgados de niñez y adolescencia

Los juzgados de niñez y adolescencia, que siempre actuarán en forma unipersonal, conocerán de:

- 1.- Los procesos resolutiveos familiares cuya resolución final tiene eficacia de cosa juzgada material referidos a derechos de personas menores de edad, además del proceso resolutiveo familiar de suspensión de los atributos de la responsabilidad parental.
- 2.- El procedimiento especial de restitución internacional de personas menores de edad y el proceso de adopción internacional.

- 3.- Las diligencias de protección cautelar referidas a personas menores de edad.
- 4.- Los procesos relativos a la adopción de personas menores de edad y su oposición.
- 5.- Los recursos de apelación provenientes de los juzgados de asuntos sumarios tratándose de derechos de personas menores de edad.
- 6.- La aplicación de convenios internacionales relativos a la materia de niñez y adolescencia.

Los procedimientos de restitución internacional de personas menores de edad, de adopción internacional y de aplicación de convenios internacionales relativos a materia de niñez y adolescencia deberán ser conocidos exclusivamente en el juzgado de niñez y adolescencia del Primer Circuito Judicial de San José.”

“Artículo 114 bis.- Juzgados de violencia doméstica y de protección cautelar

Los juzgados de violencia doméstica y de protección cautelar conocerán de:

- 1.- Todo lo relativo a los procesos de protección cautelar de violencia intrafamiliar, personas adultas mayores y personas con discapacidad.
- 2.- Los demás asuntos que estipule la ley.”

“Artículo 119.- Juzgados de familia de asuntos sumarios

Los juzgados de asuntos sumarios, que siempre actuarán en forma unipersonal, conocerán de:

- 1.- Los procesos resolutivos familiares cuya resolución final no produce cosa juzgada material, salvo la suspensión de los atributos de la responsabilidad parental.
- 2.- Los asuntos de petición unilateral.
- 3.- Los demás asuntos que estipule la ley.”

“Artículo 124.- Juez de enlace en materia de niñez y adolescencia

La Corte Suprema de Justicia, de entre las personas juzgadoras del Poder Judicial en materia familiar, elegirá una o varias personas que ejercerán la función de personas juzgadoras de enlace con el cometido de facilitar las consultas y comunicaciones judiciales directas sobre los asuntos tramitados en aplicación de los convenios internacionales y leyes nacionales.

Estas consultas y comunicaciones judiciales podrán ser recíprocas entre tribunales extranjeros y tribunales nacionales y se dejará constancia de las mismas en los respectivos expedientes con comunicación a las partes.”

“Artículo 252.- Capacitación de servidores en materia familiar

A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, el Poder Judicial promoverá la capacitación adecuada de los que trabajan en la administración de justicia.”

ARTÍCULO 3.- Derogatorias

I.- Deróguese en su totalidad la Ley de Pensiones Alimentarias, Ley N.º 7654

II.- Deróguese los siguientes artículos de las leyes que se dirán:

a) Código de Familia (Ley N.º 5476): artículos 5, 6, 7, 8, 9, inciso 7) del artículo 48, inciso 7) del artículo 58, 53, 54, último párrafo del artículo 96, 98 bis; 115 a 139, 153, 154, 157, 160 bis, 197 y 233.

b) Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley N.º 7739): artículos 40 y 141 a 148.

c) Código Civil (Ley N.º 63): artículos 27 párrafo tercero y 29.

d) Código Procesal Civil (Únicamente en caso de que a la entrada en vigencia de esta ley no se haya derogado el Código Procesal Civil de 1990), Ley N.º 7130, de 21 de julio de 1989, así:

1.- Artículo 14 en la siguiente frase: *“Los serán también las referentes a la materia familiar en aquellos lugares en donde no haya juzgado de familia”*.

2.- Párrafo final del artículo 162.

3.- Artículo 314 en la frase final del segundo párrafo que dice: *“En materia de familia, solo se admitirá el poder especial”*.

4.- Los incisos 1), 4), 5), 6), y 7) del artículo 420.

5.- El inciso 10) del artículo 438.

6.- Los incisos 1), 2), 3), 4), 5) y 7) del artículo 819.

7.- Los artículos 825 a 870 y 877 a 885.

Rige a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta.

Dado en la Presidencia de la República, a los diez días del mes de setiembre del dos mil catorce.

Luis Guillermo Solís Rivera
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Cristina Ramírez Chavarría
MINISTRA DE JUSTICIA Y PAZ

28 de enero de 2015

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos.

1 vez.—Solicitud N° 28274.—O. C. N° 25003.—C-2742960.—(2015013328).

**PUBLICAR UNA VEZ
RESPONSABLE DE PUBLICACION**

PROYECTO DE LEY

LEY PARA LA RESTRICCIÓN DE LA LIBERACIÓN AL AMBIENTE DE ORGANISMOS VIVOS MODIFICADOS

Expediente N.º 19.477

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Los organismos vivos modificados, también conocidos como transgénicos u organismos genéticamente modificados, representan un tema de actualidad. De las decisiones que se tomen, depende el futuro de la biodiversidad no solo nacional, sino mundial. Necesariamente se involucran otros temas, como la seguridad alimentaria, la salud humana, animal, vegetal, el impacto ambiental, entre otros. Es precisamente por ello que no se deben tomar medidas precipitadas, mucho menos, en respuesta a intereses económicos.

Sobre los transgénicos existe mucha discusión. Hay sectores que los defienden y los definen como una opción viable para atender a los problemas de alimentación que amenazan a gran parte de la población mundial. Por otro lado, son señalados como peligrosos, vinculados a problemas en la salud humana, la agricultura y el medio ambiente. Lo cierto es que con la información que hay al respecto, no es posible descartar con certeza absoluta ninguna de las dos posiciones.

Esta imposibilidad de rechazar de forma cierta cualquiera de los dos criterios supra expuestos, permite traer a colación el Principio Precautorio, este se expresa en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo la cual, lo contempla en su artículo 15:

“Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.” (La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. *Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo*. Río de Janeiro, Brasil. 1992. Disponible en <http://goo.gl/GZ1Zmh>. Consultado el 30 de octubre, 2014.)

Este artículo corresponde a una definición acertada sobre las implicaciones de este principio. Contempla el deber de los Estados de actuar con cautela a la hora de tomar decisiones y autorizar actividades cuyos efectos en el equilibrio ecológico sean nefastos y además, irreversibles.

Este mismo principio es rector del actuar de la Administración Pública, según se traduce de una interpretación del artículo dieciséis de la Ley General de la Administración Pública (LGAP) el cual establece que: *“En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia.”* (Asamblea Legislativa. *Ley General de la Administración Pública*. Vigente desde el 20 de diciembre de 1978. Publicada en La Gaceta N.º 15, de 22 de enero de 1979. Disponible en <http://goo.gl/IYTBvT>. Consultado el 30 de octubre de 2014.)

En esta ocasión, el objetivo es que los actos sean fundamentados, para ello lo primero que se requiere es determinar cuáles son las reglas de la ciencia y así, saber si la Administración se ajusta o no a ellas. Si no existen, en principio, habría que abstenerse de tomar decisiones que pudieran resultar injustas, ilógicas o inconvenientes.

Es decir, que tanto el artículo dieciséis de la LGAP como el Principio Precautorio, tienen el mismo propósito: evitar que se tomen decisiones que puedan traer consigo, consecuencias negativas que contraríen el fin público.

En concordancia con lo anterior, Salvador Bergel afirma que:

“Corresponde al Estado asumir la protección y defensa de bienes comunes. En este caso la intervención debe pasar por la implementación de políticas activas de evaluación y gestión de los riesgos y en función de ello se impone recurrir al principio de precaución...” (Salvador Bergel. *“El Principio Precautorio y los Riesgos en el Cultivo de Variedades Transgénicas”*. Revista do Programa de Mestrado em Direito do UniCEUB, Brasília, v. 2, n. 1, p. 55-115, enero-junio 2005.)

De acuerdo con la afirmación de este autor, el Estado está, no solo en la posibilidad, sino en la obligación de adoptar medidas en función de aplicar el Principio Precautorio. Esto en razón de defender los intereses comunes. Esta tesis, aplicada al caso costarricense, encuentra sustento normativo en el artículo 50 de nuestra Constitución Política, específicamente en su párrafo segundo que indica: *“Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”*. (Asamblea Nacional Constituyente. *Constitución Política de la República de Costa Rica*. Publicada el 7 de noviembre de 1949.) Por lo tanto, garantizar esto, se convierte en una responsabilidad estatal.

Es necesario observar como los organismos vivos modificados justifican la aplicación del Principio Precautorio. Para ello, se debe recurrir a los elementos

que la doctrina jurídica califica como integrantes de este principio. Bergel señala los siguientes:

“a) temor de un daño potencial a la salud o al medio ambiente derivado de una acción o inacción humana; daño cuyo efecto se considera irreparable e irreversible.

b) Incertidumbre científica acerca del acaecimiento del daño o de la relación de causalidad entre la conducta observada y el daño.

c) Necesidad del ejercicio de una acción anticipatoria del daño temido.”
(Salvador Bergel. “El Principio Precautorio y los Riesgos en el Cultivo de Variedades Transgénicas”. Revista do Programa de Mestrado em Direito do UniCEUB, Brasília, v. 2, n. 1, p. 55-115, enero-junio 2005.)

Ahora bien, sobre el daño potencial, Herrera Izaguirre realiza la siguiente afirmación:

“Los OGM son altamente perniciosos y pueden fácilmente propagarse en el medio ambiente y así afectar la salud humana si se consumen involuntariamente. El daño potencial de estos organismos, por ende, puede ser grave e irreversible.” (Juan Antonio Herrera Izaguirre. “El principio precautorio en la era de los OGM: incertidumbre y conflicto internacional.” Medio Ambiente & Derecho: Revista electrónica de Derecho Ambiental, 2005, N.º 12, p. 10. *Ninguna Empresa o Laboratorio puede certificar que no exista efectos nocivos para la salud o la integridad sicosomática de los consumidores de estos alimentos.*” Disponible en <http://goo.gl/yIkC9j>. Consultado el 30 de octubre de 2014.)

De esta manera, el temor de un daño potencial tanto a la salud como al medio ambiente se convierte en un aspecto evidente, por lo tanto, se está cumpliendo con el primero de los elementos que justifican la aplicación del Principio Precautorio.

Con respecto al segundo punto, es decir, la incertidumbre, el autor Ezaine Ramírez confirma que:

*“(…) la existencia de importantes **incertidumbres** científicas, concretamente, amenazas a bienes protegidos como la salud, el medio ambiente, la seguridad, el consumidor y la sociedad en general. No sólo se trata de dilemas éticos sobre la alteración de la naturaleza en los organismos vivos, sino específicamente del descontrol sobre los efectos nocivos que pudieran tener en las personas humanas el consumo de alimentos sobre los que se han aplicado manipulación genética.”* (Amado Alonso Ezaine Ramírez. “La protección de los derechos de los consumidores frente a los riesgos de los alimentos transgénicos.” Vlex Internacional, 2008, N.º 3. Disponible en: <http://goo.gl/Cv37HX>)

Tras la vehemente afirmación del citado autor, es posible confirmar la incertidumbre que rodea a los productos transgénicos, a la vez, se cumple con el segundo de los elementos que se requiere para que la aplicación del Principio Precautorio, en relación con los organismos genéticamente modificados, sea justificada.

Finalmente, es de conocimiento popular el interés de que se libere maíz transgénico de la empresa Monsanto en el cantón de Abangares. Esto, aunado a los -también populares- movimientos internacionales en contra de las políticas a las cuales, esta empresa es afín, nos dirige al tercer elemento requerido para la aplicación del Principio Precautorio: la necesidad del ejercicio de una acción anticipatoria del daño temido.

De forma simultánea, es necesario dirigirse a la figura de la moratoria. Esta se debe entender como un espacio de tiempo durante el cual, se prohíbe o se limita el desarrollo de una actividad que se sospeche dañina para el ambiente o la salud humana. Esta incipiente figura del derecho ambiental, encuentra su fundamento, precisamente, en el Principio Precautorio.

Este Principio permite que se tomen una serie de medidas para prevenir el menoscabo ambiental o a la salud, sobre este punto la Sala Constitucional ha mencionado que:

*"(...) en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible -o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución **e inclusive posponer la actividad de que se trate.**"* (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 0406 del 16 de enero del 2007 a las catorce horas con cuarenta y nueve minutos.) (Énfasis agregado)

Dentro de las disposiciones que se encuentran previstas por la jurisprudencia, en relación con el Principio Precautorio, se expresa la posibilidad de posponer la actividad que se sospeche dañosa. Esto es ciertamente lo que propone la moratoria pues, no se trata de prohibir el desarrollo de una operación. Lo que se intenta es postergarla hasta que haya certeza científica de que no va a causar perjuicios.

Así las cosas, se justifica de forma plena la necesidad de aplicar el Principio Precautorio, fundamento primordial de la moratoria, en relación con el ingreso y producción de organismos vivos modificados al territorio nacional.

Por lo tanto, se considera que aplicar una moratoria de quince (15) años resulta necesario y racional, pues sería de esperar que, tras los avances de la tecnología, la legislación y la ciencia, en un período como este se tengan estudios que no dejen lugar a la duda y confirmen o rechacen el peligro que se sospecha de los organismos vivos modificados. Precisamente por ello, se contempla la obligación del Estado de fomentar la investigación en este sentido.

La realidad actual, en relación con los organismos genéticamente modificados, justifica la necesidad de que el Poder Legislativo, de manera expresa y con un instrumento jurídico de la jerarquía que corresponde a la ley de la República, tome las decisiones que responden a las inquietudes del soberano. Para que así, sea el Poder Ejecutivo el que lleve a cabo lo dispuesto por el Primer Poder.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

**LEY PARA LA RESTRICCIÓN DE LA LIBERACIÓN AL AMBIENTE
DE ORGANISMOS VIVOS MODIFICADOS**

ARTÍCULO 1.- Objetivo de la ley

Declárese una moratoria nacional por quince años sobre la liberación al ambiente de organismos vivos modificados (OGM). El tiempo establecido en la moratoria está definido para el establecimiento y fortalecimiento de un marco regulatorio actualizado en bioseguridad, con base en los siguientes objetivos:

- a) Implementación del Marco Nacional de Bioseguridad.
- b) Construcción de las capacidades técnicas, científicas y de infraestructura para una correcta evaluación de riesgos de los OGM.
- c) Establecimiento de las líneas de base de la biodiversidad potencialmente afectada por los OGM.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Ambiente y Energía, y el Ministerio de Salud, serán las instituciones encargadas de velar por que los objetivos de la moratoria se cumplan en el tiempo definido o uno menor. Estos ministerios definirán, con previa consulta con la sociedad civil y las instituciones académicas y científicas, los avances en los objetivos.

ARTÍCULO 2.- Fin de la ley

Prevenir los posibles riesgos que estas actividades pudieran ocasionar a la salud humana o al medio ambiente y a la diversidad biológica o a la sanidad animal, vegetal y acuícola.

ARTÍCULO 3.- Contenido

Están incluidos dentro de esta moratoria: todos los OGM obtenidos o producidos a través de la aplicación de las técnicas de la biotecnología moderna, que se utilicen con fines agrícolas, pecuarios, acuícolas, forestales, industriales, comerciales, de biorremediación y cualquier otro.

ARTÍCULO 4.- Exclusión

Se excluye de esta moratoria:

1. Los OGM destinados a la investigación en espacios confinados.
2. Los OGM de uso farmacéutico y veterinario, los cuales se rigen por tratados internacionales y normativa específica.
3. Los OGM y sus derivados, importados para alimentación humana o animal, o su procesamiento.

Los organismos genéticamente modificados, excluidos de la moratoria, están sujetos al análisis de riesgos previo a la autorización de su uso y a la aplicación de medidas para la evaluación, gestión y comunicación del riesgo, de conformidad con el Protocolo de Cartagena sobre la Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre Diversidad Biológica, el Codex Alimentarius y la legislación nacional vigente.

ARTÍCULO 5.- Acreditación

Todo material genético que ingrese al territorio nacional, salvo lo exceptuado en el artículo 3 de esta ley, debe acreditar su condición de no ser un organismo genéticamente modificado. De comprobarse que el material analizado es un OGM, el Servicio Fitosanitario del Estado procederá a su decomiso y destrucción y a la aplicación de la sanción correspondiente.

ARTÍCULO 6.- Promoción de la investigación

El Estado costarricense promoverá el fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas de las instituciones nacionales, encargadas de difundir las técnicas que aplica la biotecnología moderna y la bioseguridad, con la finalidad de contribuir a la toma de decisión de los proveedores y consumidores, en relación con los OGM.

TRANSITORIO I.- Quedan a salvo de lo dispuesto en el artículo 1 de esta ley los derechos adquiridos de buena fe y en cumplimiento de todos los requisitos de la normativa vigente, con anterioridad a su entrada en vigencia. Sin embargo, los titulares de permisos vigentes no podrán ampliar el área de siembra autorizada ni extender su aplicación a otros organismos vivos modificados o realizar actividades distintas a las expresamente autorizadas de previo a la entrada en vigencia de esta ley. Los titulares de estos derechos deberán cumplir con todas las obligaciones establecidas en la legislación nacional.

TRANSITORIO II.- Todos aquellos trámites relacionados con permisos para la liberación y cultivo de organismos vivos modificados que se encuentren pendientes de resolución ante la Comisión Técnica de Bioseguridad, el Servicio Fitosanitario del Estado o cualquier otra dependencia del Estado costarricense a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, deberán ser archivados de forma inmediata.

TRANSITORIO III.- Mientras se encuentre vigente la moratoria establecida en el artículo 1 de esta ley, ningún permiso para la liberación y cultivo de organismos

vivos modificados será renovado o prorrogado, después de haberse extinguido por cualquier motivo, de conformidad con la legislación nacional.

Rige a partir de su publicación.

Edgardo Vinicio Araya Sibaja

José Antonio Ramírez Aguilar

Suray Carrillo Guevara

Ana Patricia Mora Castellanos

Gerardo Vargas Varela

Carlos Enrique Hernández Álvarez

José Francisco Camacho Leiva

Ligia Elena Fallas Rodríguez

Jorge Arturo Arguedas Mora

DIIPUTADOS Y DIPUTADAS

25 de febrero de 2015

NOTA. Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Ambiente.

1 vez.—Solicitud N° 28637.—O. C. N° 25003.—C-136020.—(2015015445).

PROYECTO DE LEY

**APROBACIÓN DEL ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE
LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y PALESTINA**

Expediente N.º 19.482

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Las Partes, animadas del propósito de fortalecer las relaciones de amistad y cooperación, suscribieron el presente Acuerdo Marco de Cooperación, en la ciudad de Nueva York, el día 23 de setiembre de 2013, firmó por nuestro país, el señor Enrique Castillo Barrantes, a la sazón Ministro de Relaciones Exteriores y Culto.

Cabe mencionar, que el objetivo fundamental de este Acuerdo, es la promoción de la cooperación técnica, económica, científica y cultural entre los dos países, a través del desarrollo y ejecución de programas y proyectos específicos en áreas de interés común, en especial, en los sectores de educación, cultura, salud, turismo, agricultura, ambiente, ciencia y tecnología, biblioteca y archivos, deportes y juventud, cooperativas, fortalecimiento institucional del Servicio Exterior, los derechos de los niños y la familia en todas sus manifestaciones y en cualquier otra área que pueda ser acordada. Lo anterior, de conformidad con la política, planes y programas de sus respectivos gobiernos y según sus posibilidades científicas, técnicas y financieras.

El presente compromiso bilateral, contempla diversas modalidades de cooperación que comprenden, desde el envío de expertos, investigadores, profesionales y técnicos y el desarrollo de servicios de consultoría, intercambio de información técnica y científica, organización de seminarios y conferencias, hasta la realización conjunta de programas de investigación, así como la ejecución de proyectos conjuntos de desarrollo tecnológico que vinculen centros de investigación de ambos países.

Asimismo, este instrumento jurídico, menciona que las Partes prestarán facilidades a entidades del sector público y privado, cuando se requiera, para el desarrollo y ejecución correcta de programas y proyectos de cooperación.

Finalmente, este Acuerdo establece un Mecanismo Bilateral de Consulta

sobre Cooperación que estará presidido por los viceministros de Relaciones Exteriores o los directores generales de Cooperación Internacional de los Ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países y que se reunirá ordinariamente cada dos años, en forma alternada, en Costa Rica y Palestina, y, extraordinariamente cuando las circunstancias lo requieran. Sus principales funciones son, entre otras, la identificación de los sectores de interés común, en los que sea necesario el desarrollo de proyectos de cooperación, la aprobación de un Programa Bienal de Cooperación, según aquellas áreas identificadas por las Partes, la selección de las modalidades financieras necesarias para la ejecución de los proyectos de cooperación, y la evaluación y revisión de los proyectos de cooperación correspondientes.

En virtud de lo anterior, sometemos a conocimiento de la Asamblea Legislativa el proyecto de ley adjunto relativo a la “**Aprobación del Acuerdo Marco de Cooperación entre la República de Costa Rica y Palestina**”, para su respectiva aprobación legislativa.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

**APROBACIÓN DEL ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE
LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y PALESTINA**

ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébese en cada una de sus partes el “**Acuerdo Marco de Cooperación entre la República de Costa Rica y Palestina**”, suscrito en la ciudad de Nueva York, el 23 de setiembre de 2013, cuyo texto es el siguiente:

**“ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN
ENTRE
LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y PALESTINA**

El Gobierno de la República de Costa Rica y El Gobierno de Palestina, en adelante referidos como “las Partes”:

Reconociendo el deseo de fortalecer los lazos de amistad existentes entre las partes;

Comprometidos en fortalecer más las relaciones y el desarrollo de áreas de entendimiento mutuo que puedan resultar en cooperación entre las partes;

Conscientes del deseo de promover la transferencia de tecnología, el intercambio de información y la investigación científica y de aprovechar su potencial para el desarrollo;

Reconociendo las ventajas recíprocas que resultarán de la cooperación técnica sostenida en áreas de interés común;

Por medio del presente acuerdan lo siguiente:

**ARTÍCULO 1
OBJETIVOS GENERALES**

El objetivo fundamental del presente Acuerdo, en adelante referido como “el Acuerdo”, es la promoción de la cooperación técnica, económica, científica y cultural entre las Partes, a través del desarrollo y ejecución de programas y proyectos específicos en áreas de interés común.

Las Partes prestarán facilidades a entidades del sector público y privado, cuando se requiera, para el desarrollo y la ejecución correcta de programas y proyectos de cooperación.

Asimismo otorgarán importancia a la ejecución de proyectos conjuntos de desarrollo tecnológico que vinculen centros de investigación de ambos países.

Con base en el presente Acuerdo las Partes podrán celebrar acuerdos complementarios de cooperación, en áreas específicas de interés común.

**ARTÍCULO 2
LAS ÁREAS DE COOPERACIÓN**

Las Partes desarrollarán, de común acuerdo, proyectos de cooperación de conformidad con la política, planes y programas de sus respectivos Gobiernos y

según sus posibilidades científicas, técnicas y financieras, en las áreas que consideren de mayor importancia, en especial, en los sectores de educación, cultura, salud, turismo, agricultura, ambiente, ciencia y tecnología, biblioteca y archivos, deportes y juventud, cooperativas, fortalecimiento institucional del Servicio Exterior, los derechos de los niños y la familia en todas sus manifestaciones y en cualquier otra área que pueda ser acordada.

ARTÍCULO 3 MODALIDADES DE LA COOPERACIÓN

Los proyectos en las áreas mencionadas en el artículo anterior, podrán asumir las siguientes modalidades:

- a) realización conjunta de programas de investigación y desarrollo;
- b) envío de expertos, investigadores, profesionales y técnicos;
- c) transferencia de experiencias y capacidades institucionales (Mejores Prácticas Institucionales);
- d) programas de pasantías para entrenamiento profesional, particularmente en áreas prioritarias para ambas Partes;
- e) organización de seminarios y conferencias;
- f) desarrollo de servicios de consultoría;
- g) talleres de capacitación profesional;
- h) organización de ferias, exposiciones y eventos de diverso tipo, en forma individual o conjunta;
- i) proyectos conjuntos de desarrollo tecnológico;
- j) intercambio de información técnica y científica;
- k) intercambio de mejores prácticas en conservación y ecoturismo; y
- l) cualquier otra modalidad acordada por las Partes.

En el intercambio de información científica y técnica obtenida como resultado de los proyectos de la cooperación bilateral, se observarán las leyes vigentes en ambos Estados. Las partes coordinarán a través de los canales diplomáticos, cuando sea necesario proteger el interés de uno de los Estados Parte.

Los proyectos que se desarrollen en forma conjunta por las Partes, deberán cumplir con la legislación sobre propiedad intelectual, las políticas y regulaciones vigentes en cada uno de los Estados.

ARTÍCULO 4 MECANISMO BILATERAL DE CONSULTA SOBRE COOPERACIÓN

Las Partes establecerán un Mecanismo Bilateral de Consulta sobre Cooperación que se reunirá ordinariamente cada dos años, comenzando tan pronto como sea posible tras la entrada en ejecución de este Acuerdo y alternando entre Costa Rica y Palestina. Las fechas serán acordadas previamente por la vía diplomática. Las Partes pueden reunirse extraordinariamente cuando las circunstancias lo requieran.

ARTÍCULO 5 INTEGRACIÓN DEL MECANISMO BILATERAL DE CONSULTA SOBRE COOPERACIÓN

El Mecanismo Bilateral de Consulta estará conformado por las respectivas delegaciones nacionales integradas por el personal técnico relevante, presididas por los Viceministros de Relaciones Exteriores o los Directores Generales de Cooperación Internacional de los Ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países.

Ambas partes considerarán la conveniencia de permitir la participación del sector privado en sus reuniones.

ARTÍCULO 6 FUNCIONES DEL MECANISMO BILATERAL DE CONSULTA SOBRE COOPERACIÓN

El Mecanismo Bilateral de Consulta sobre Cooperación tendrá las siguientes funciones principales:

- a) Identificar los sectores de interés común en los que sea necesario implementar programas específicos de cooperación bilateral;
- b) Aprobar un Programa Bienal de Cooperación que contendrá proyectos en aquellas áreas identificadas por las Partes;
- c) Seleccionar las modalidades financieras necesarias para que este tipo de proyectos sean efectivamente ejecutados;
- d) Evaluar iniciativas que se encuentren en fase de ejecución, aquellas que se hayan realizado o concluido al amparo de este Acuerdo, así como los acuerdos complementarios que emanen de éste;
- e) En caso necesario, proponer los ajustes adecuados a los proyectos que se presenten para su aprobación y a los que se encuentren en ejecución.

ARTÍCULO 7 EL PROGRAMA BIENAL DE COOPERACIÓN BILATERAL

El "Programa Bienal de Cooperación Bilateral" será estructurado con base en los proyectos elaborados por los organismos y entidades nacionales de cada uno de los países, de conformidad con sus áreas de interés. Se presentará a la Dirección de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica y al Ministerio de Relaciones Exteriores de Palestina para su facilitación y desarrollo.

Los proyectos o actividades sujetos a aprobación cumplirán con todas las especificaciones, incluyendo: objetivos, cronogramas de trabajo, costos previstos, recursos financieros, recursos técnicos, aéreas de ejecución, así como las obligaciones operativas y financieras de cada una de las Partes.

Los órganos competentes de cada una de las Partes, evaluarán anualmente cada uno de los proyectos que conformen el Programa y presentarán a sus respectivos Gobiernos las recomendaciones necesarias para su mejor ejecución.

ARTÍCULO 8 MODALIDADES DE FINANCIAMIENTO

La ejecución de los Programas que se adopten en el marco del presente Acuerdo se realizará bajo la modalidad de costos compartidos, salvo que otra modalidad sea acordada por las Partes.

Para la implementación de los programas específicos que se adopten, las Partes podrán solicitar, de común acuerdo y cuando sea posible, fuentes de financiamiento alternativas para la ejecución de sus programas conjuntos, incluyendo modalidades de cooperación triangular.

ARTÍCULO 9 EJECUCIÓN DEL ACUERDO Y SOLUCIÓN DE DISPUTAS

El presente Acuerdo se ejecutará bajo la coordinación de la Dirección de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Palestina.

Para la ejecución de este Acuerdo, así como para la de los acuerdos complementarios que emanen de él, las Partes se podrán beneficiar de la participación de instancias regionales, multilaterales o de terceros países, en caso de que ambas así lo consideren necesario y oportuno.

Los funcionarios, expertos o técnicos enviados por una de las Partes, gozarán de las facilidades que el ordenamiento jurídico de la otra Parte les conceda.

Cualquier disputa derivada de la interpretación o aplicación del presente instrumento, será solucionada por las Partes de común acuerdo.

ARTÍCULO 10 DISPOSICIONES FINALES

1. El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha en que ambas Partes se hayan comunicado, a través de la vía diplomática, el cumplimiento de las formalidades exigidas por su legislación nacional para la entrada en vigor del presente Acuerdo y tendrá un plazo de vigencia de diez años, prorrogable automáticamente por períodos iguales.

2. Este Acuerdo puede ser modificado por mutuo consentimiento y las modificaciones acordadas entrarán en vigor de conformidad con el numeral uno del presente artículo.

3. Cualquiera de las Partes podrá, en todo momento, denunciar el presente Acuerdo, mediante notificación escrita dirigida a la otra, por la vía diplomática. Dicha denuncia surtirá efecto seis meses después de su notificación.

4. A menos que se haya acordado de otra forma, la terminación del presente Acuerdo no afectará la conclusión de las actividades de cooperación formalizadas durante su vigencia, las que seguirán ejecutándose hasta su total culminación.

Hecho en la ciudad de Nueva York, a los veintitrés días del mes de setiembre de dos mil trece, en dos ejemplares en idiomas español, árabe e inglés, siendo ambos textos igualmente válidos.

**POR EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE COSTA RICA**

**POR EL GOBIERNO DEL
ESTADO DE PALESTINA”**

República de Costa Rica
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Dirección General de Política Exterior

MABEL SEGURA FERNÁNDEZ
DIRECTORA A. I. DE POLÍTICA EXTERIOR

CERTIFICA:

Que las anteriores cinco copias, son fieles y exactas del texto original en idioma español del Acuerdo Marco de Cooperación entre la República de Costa Rica y Palestina. Se extiende la presente, para los efectos legales correspondientes, en la Dirección General de Política Exterior, a las diez horas del dos de febrero del dos mil quince.

Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los dos días del mes de febrero del dos mil quince.

Luis Guillermo Solís Rivera
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Manuel A. González Sanz
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

25 de febrero de 2015

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente de Asuntos Internacionales y de Comercio Exterior.

1 vez.—Solicitud N° 28551.—O. C. N° 25003.—C-121040.—(2015014641).

ACUERDOS

No. 42-14-15

EL DIRECTORIO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

**En sesión ordinaria No. 038-2014 celebrada
el 10 de diciembre de 2014**

SE ACUERDA: Autorizar la participación de la diputada Marcela Guerrero Campos en el curso “Técnica Legislativa Y Administración Parlamentaria” se celebrará en el Centro de Formación de la Cooperación Española de Antigua Guatemala, del 20 al 23 de enero del 2015.

Asimismo se acuerda otorgar a la legisladora Guerrero Campos los pasajes aéreos y los viáticos correspondientes, de conformidad con lo que establece el Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos y con el itinerario de vuelo.

Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del citado reglamento, una vez concluida la participación de la legisladora en dicha actividad, se le solicita remitir a la Comisión de Relaciones Internacionales el respectivo informe de misión. ACUERDO FIRME, IRREVOCABLE Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.

San José, a los nueve días del mes de febrero de dos mil quince.

**HENRY MORA JIMÉNEZ
PRESIDENTE**

**LUIS VÁSQUEZ CASTRO
PRIMER SECRETARIO**

**JORGE RODRÍGUEZ ARAYA
SEGUNDO SECRETARIO**

No. 43-14-15

**EL DIRECTORIO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA**

**En sesión ordinaria No. 038-2014 celebrada
el 10 de diciembre de 2014**

SE ACUERDA: Autorizar la participación del diputado Abelino Esquivel Quesada en la 1 Jornada Latinoamericana de Cohesión Social, que se llevará a cabo en Santiago de Chile del 22 al 23 de enero del 2015.

Asimismo se acuerda otorgar al legislador Esquivel Quesada los tiquetes aéreos y los viáticos correspondientes, de conformidad de conformidad con lo que establece el Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos y con el itinerario de vuelo.

Se ratifica el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en el artículo 9 de la sesión N° 010-2014, en el sentido de que el legislador que cancele algún viaje autorizado por el Directorio Legislativo, deberá asumir de su propio peculio el costo del boleto aéreo siempre y cuando este haya sido formalmente emitido por la agencia de viajes correspondiente.

Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del citado reglamento, una vez concluida la participación del legislador en dicha actividad, se le solicita remitir a la Comisión de Relaciones Internacionales el respectivo informe de misión. ACUERDO FIRME, IRREVOCABLE Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.

San José, a los nueve días del mes de febrero de dos mil quince.

**HENRY MORA JIMÉNEZ
PRESIDENTE**

**LUIS VÁSQUEZ CASTRO
PRIMER SECRETARIO**

**JORGE RODRÍGUEZ ARAYA
SEGUNDO SECRETARIO**

No. 44-14-15

**EL DIRECTORIO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA**

**En sesión ordinaria No. 040-2015 celebrada
el 21 de enero de 2015**

SE ACUERDA: Autorizar la participación de la diputadas Karla Prendas Matarrita y Nidia Jiménez Vásquez en la I Jornada Latinoamericana de Cohesión Social, a celebrarse en Santiago de Chile, los días 23 y 24 de enero del 2015.

Asimismo se acuerda otorgar a las legisladoras Prendas Matarrita y Jiménez Vásquez los boletos aéreos y los viáticos correspondientes, de conformidad de conformidad con lo que establece el Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos y con el itinerario de vuelo.

Se ratifica el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en el artículo 9 de la sesión N° 010-2014, en el sentido de que el legislador que cancele algún viaje autorizado por el Directorio Legislativo, deberá asumir de su propio peculio el costo del boleto aéreo siempre y cuando este haya sido formalmente emitido por la agencia de viajes correspondiente.

Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del citado reglamento, una vez concluida la participación de las legisladoras en dicha actividad, se le solicita remitir a la Comisión de Relaciones Internacionales el respectivo informe de misión. ACUERDO FIRME, IRREVOCABLE Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.

San José, a los nueve días del mes de febrero de dos mil quince.

**HENRY MORA JIMÉNEZ
PRESIDENTE**

**LUIS VÁSQUEZ CASTRO
PRIMER SECRETARIO**

**JORGE RODRÍGUEZ ARAYA
SEGUNDO SECRETARIO**

No. 45-14-15

**EL DIRECTORIO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA**

**En sesión ordinaria No. 041-2015 celebrada
el 27 de enero de 2015**

SE ACUERDA: Autorizar la participación del diputado Rolando González Ulloa, en la reunión de la Mesa Directiva Ampliada del Parlamento Latinoamericano, en la ciudad de Las Tablas, Provincia de Los Santos, República de Panamá, la cual se llevará a cabo los días 5, 6 y 7 de febrero del 2015.

Asimismo se acuerda otorgar al legislador los pasajes aéreos y los viáticos correspondientes, de conformidad con lo que establece el Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos y con el itinerario de vuelo.

Se ratifica el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en el artículo 9 de la sesión N° 010-2014, en el sentido de que el legislador que cancele algún viaje autorizado por el Directorio Legislativo, deberá asumir de su propio peculio el costo del boleto aéreo siempre y cuando este haya sido formalmente emitido por la agencia de viajes correspondiente.

Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del citado reglamento, una vez concluida la participación de la legisladora en dicha actividad, se le solicita remitir a la Comisión de Relaciones Internacionales el respectivo informe de misión. ACUERDO FIRME, IRREVOCABLE Y DEFINITIVAMENTE APROBADO..

San José, a los nueve días del mes de febrero de dos mil quince.

**HENRY MORA JIMÉNEZ
PRESIDENTE**

**LUIS VÁSQUEZ CASTRO
PRIMER SECRETARIO**

**JORGE RODRÍGUEZ ARAYA
SEGUNDO SECRETARIO**

**PUBLICAR UNA VEZ
RESPONSABLE DE PUBLICACION**

No. 41-14-15

**EL DIRECTORIO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA**

**En sesión ordinaria No. 036-2014 celebrada
el 27 de noviembre de 2014**

SE ACUERDA: Autorizar la participación del señor Rolando Hidalgo Ramírez, cédula N° 4-221-752 en el “Encuentro Parlamentario y curso de Técnica Legislativa y Administración Parlamentaria”, que se celebrará en el Centro de Formación de la Cooperación Española, en Antigua, Guatemala, del 20 al 23 de enero del 2015.

Asimismo se acuerda otorgar al señor Hidalgo Ramírez el pasaporte de servicio, los pasajes aéreos y los viáticos correspondientes, de conformidad con lo que establece el Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos y con el itinerario de vuelo.

San José, a los nueve días del mes de febrero de dos mil quince.

**HENRY MORA JIMÉNEZ
PRESIDENTE**

**LUIS VÁSQUEZ CASTRO
PRIMER SECRETARIO**

**JORGE RODRÍGUEZ ARAYA
SEGUNDO SECRETARIO**

**PUBLICAR UNA VEZ
RESPONSABLE DE PUBLICACION**

No. 6573-14-15

***En uso de las atribuciones que le confiere la Ley No. 7319,
Artículo 10, del 17 de noviembre de 1992,
LEY DEL DEFENSOR DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA,
Reformada por la Ley No. 7423, del 18 de julio de 1994***

**LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA
REPÚBLICA DE COSTA RICA**

En Sesión ordinaria No. 148, celebrada el 24 de febrero de 2015

ACUERDA :

Nombrar al señor Juan Manuel Cordero González, como Defensor Adjunto de los Habitantes de la República, por un período de cuatro años, comprendido entre el veintiséis de febrero de dos mil quince al veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, ambas fechas inclusive.

El señor Cordero González se juramentó en Sesión Ordinaria No. 150 celebrada el 26 de febrero de 2015.

Asamblea Legislativa.- San José, a los veintiséis días del mes de febrero del año dos mil quince.

PUBLÍQUESE,

**HENRY MORA JIMÉNEZ
PRESIDENTE**

**LUIS VÁSQUEZ CASTRO
PRIMER SECRETARIO**

**JORGE RODRÍGUEZ ARAYA
SEGUNDO SECRETARIO**